

CONGRESO NACIONAL
CAMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2008
ORDEN DEL DIA N° 1205

Impreso el día 20 de noviembre de 2008

SUMARIO

COMISION DE POBLACIÓN Y DESARROLLO HUMANO, DE
LEGISLACIÓN GENERAL, DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES, DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE SALUD Y DEPORTE Y DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en distintos proyectos de ley de varios señores senadores, sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales. (S-250-578-2684/07 y 38-40-905-1538-3626-3719/08)

DICTAMEN DE COMISION

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Población y Desarrollo Humano, Legislación General, Justicia y Asuntos Penales, Trabajo y Previsión Social, Salud y Deporte y Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley S-250/07 de la señora Senadora Giri contra la violencia laboral; el Proyecto de Ley S-578/07 de la señora Senadora Maza que reproduce el Proyecto de Ley sobre violencia en el trabajo (Ref 166/05); el Proyecto de Ley S-2684/07 de la Senadora Giri y otros sobre violencia doméstica; el Proyecto de Ley S-38/08 de la señora Senadora Perceval que reproduce el Proyecto de Ley creando el observatorio de la violencia contra las mujeres (Ref:4178/06); el Proyecto de Ley S-40/08 de la Senadora Perceval, que reproduce el Proyecto de Ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres (REF: 4380/06); el Proyecto de Ley S-905/08 de la Senadora Viudes garantizando a la mujeres en pleno reconocimiento de sus derechos y garantías establecido en la Constitución Nacional y la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra las Mujeres; el Proyecto de Ley S-1538/08 de la señora Senadora Forstmann sobre prevención y sanción de la violencia laboral; el Proyecto de Ley S-3626/08 de la Senadora Gallego de Protección Integral para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; el Proyecto de Ley S-3719/08 del Senador Morales para prevenir, sancionar, y

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrolle sus relaciones interpersonales; y tenido a la vista el Proyecto de Ley S-2966/07 del Senador Basualdo disponiendo la realización de una campaña de publicidad destinada a la No Violencia Contra la Mujer, a partir del 25 de noviembre de cada año y El Proyecto de Ley S-2283/07 de la Senadora Bar estableciendo la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR, Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLE SUS RELACIONES INTERPERSONALES

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. Orden Público.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República.

Artículo 2.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:

- a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
- b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
- c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;
- d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres;
- e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
- f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
- g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

Artículo 3.- Derechos Protegidos.- Esta Ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas

las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a:

- a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
- b) La salud, la educación y la seguridad personal;
- c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;
- d) Que se respete su dignidad;
- e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
- f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;
- g) Recibir información y asesoramiento adecuado;
- h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;
- i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley;
- j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;
- k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización.

Artículo 4.- Definición.- Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente Ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica aparentemente neutra que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Artículo 5.- Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:

1) Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.

2) Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye

también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

3) Sexual; Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas. Con o sin acceso genital del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción uso de la fuerza o intimidación,

incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres

4) Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:

- a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
- b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
- c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo lugar de trabajo.

5) Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Artículo 6.- Modalidades. A los efectos de esta Ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independiente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres.

Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio las uniones de hecho y

las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y de la sociedad civil.

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos.

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, provocando pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad.

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

TITULO II POLÍTICAS PÚBLICAS

CAPÍTULO I PRECEPTOS RECTORES

Artículo 7.- Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del

derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:

- a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;
- b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres;
- c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;
- d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;
- e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales;
- f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece;
- g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;
- h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

CAPÍTULO II ORGANISMO COMPETENTE

Artículo 8.- Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley.

Artículo 9.- Facultades. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la presente Ley, deberá:

- a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia.

c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honorem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia.

d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia;

e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación;

f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;

g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención;

h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta Ley.

i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada en materia de violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinado a legisladores/as y asesores/as;

j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres;

k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que

determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos Federales con competencia en la materia;

l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados –como mínimo- por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas al victimario. Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen violencias;

m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios;

n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres.

ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa;

o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a sus víctimas;

p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen;

q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;

r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;

s) Convocar y poner en funciones al Consejo Consultivo de organizaciones de la sociedad civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;

t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas.

u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.

CAPÍTULO III LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LAS POLÍTICAS ESTATALES

Artículo 10. Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado Nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a los hombres que la ejercen a partir de las siguientes líneas programáticas:

1. Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
2. Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades:
 - a. Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje;
 - b. Grupos de ayuda mutua;
 - c. Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
 - d. Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica;
 - e. Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano.
3. Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.
4. Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.

5. Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer.
6. Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.
7. Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.

Artículo 11. Políticas públicas. El Estado Nacional implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia:

1. Jefatura de Gabinete de Ministros –Secretaría de Gabinete y Gestión Pública:

- a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público;
- b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales.

2. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

- a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia;
- b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia;
- c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia;
- d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/os;

e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia;

f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia.

3. Ministerio de Educación de la Nación:

a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;

b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres;

c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os por un cambio de residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar;

d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de post grado;

e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;

f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación.

4. Ministerio de Salud de la Nación:

a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud integral de la mujer;

b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en ámbito del Consejo Federal de Salud;

c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología,

pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios;

d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la utilización de protocolos de atención y derivación;

e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales.

f) Asegurar la asistencia especializada de los/as hijos/as testigos de violencia;

g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones;

h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;

i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

5. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación:

5.1. Secretaria de Justicia

a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;

b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita;

c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;

- d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;
- e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje;
- f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema;
- g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho;
- h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados.

5.2. Secretaría de Seguridad

- a) Fomentar en las fuerzas policial y de seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales;
- b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;
- c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil;
- d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;
- e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.

5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.

6. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:

a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en:

1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección;

2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación;

3. La permanencia en el puesto de trabajo;

4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función.

b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;

c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia;

d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales.

7. Ministerio de Defensa de la Nación:

a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas;

c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;

d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género.

8. Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación:

a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias;

b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género;

c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres;

d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;

e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresarial, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO IV OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 12. Creación. Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.

Artículo 13. Misión. El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 14. Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:

a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres;

b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores

sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia;

c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado Nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres;

d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;

e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía;

f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;

g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;

h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;

i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los Registros y los protocolos;

j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;

k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.

Artículo 15. Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado por:

- a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación social y derechos humanos;
- b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.

TÍTULO III PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16. Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres en cualquier procedimiento judicial o administrativo que las afecte, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

- a) La gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado;
- b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;
- c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente;
- d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;
- e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3 de la presente Ley;
- f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;
- g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;
- h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;
- i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos;

j) A oponerse a la realización de peritajes sobre su cuerpo o, en caso de consentirlos, a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;

k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

Artículo 17. Procedimientos Administrativos. Las jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta Ley, la que será aplicada por medio de los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, delegaciones de los Consejos Provinciales de la Mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO

Artículo 18. Ámbito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen previsto en el presente capítulo.

Artículo 19. Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y sumarísimo.

Artículo 20. Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.

Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.

Artículo 21. Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.

Aún en caso de incompetencia, el/a juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.

Artículo 22. Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiera la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las veinticuatro (24) horas.

Artículo 23. Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser efectuadas:

a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna;

b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla.

d) La denuncia será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomen conocimiento directo o indirecto de que una mujer padece violencia. El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el Título XI Capítulo IV del Código Penal de la Nación.

En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en veinticuatro (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público.

Artículo 24. Asistencia protectora. En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honorem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma.

Artículo 25. Medidas preventivas urgentes, Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 4, 5 y 6 de la presente Ley:

a) Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia y sus familiares;

b) Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer o hacia los restantes miembros del grupo familiar;

c) Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos;

d) Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el decomiso de las que estuvieren en su posesión;

e) Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil

con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

f) Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente,

g) Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma;

h) Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor;

i) Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales;

j) En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia;

k) En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad.

l) Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas;

m) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/as;

n) Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno;

ñ) Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa;

o) Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer

p) Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer,

Artículo 26. Facultades del/la juez/a. El/la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado.

Artículo 27. Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de cuarenta y ocho (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 25, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia,

El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.

En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes.

Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.

Artículo 28. Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en la que se encuentre.

Dicho informe será remitido en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o cesar alguna de las mencionadas en el artículo 25.

El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen.

También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

Artículo 29. Prueba: principios y medidas. El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material,

Artículo 30. Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

Artículo 31. Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las medidas preventivas ordenadas, pudiendo ampliar las impuestas u ordenar otras,

Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:

- a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido.
- b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor
- c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas,

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.

Artículo 32. Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan o rechacen medidas preventivas urgentes se concederá con efecto devolutivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá con efecto suspensivo.

En todos los casos, la apelación se otorgará en relación.

Artículo 33. Seguimiento. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención del equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

Artículo 34. Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

Artículo 35. Obligaciones de los/as funcionarios/as. Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a público/a a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:

- a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención;
- b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso;
- c) Cómo preservar las evidencias.

Artículo 36. Registros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta Ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que

padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.

Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta Ley deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho registro.

El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes,

La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, características de quienes ejercen o padecen violencia, modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas.

Artículo 37. Colaboración de organizaciones públicas o privadas. Los/as jueces/juezas podrán solicitar o aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

Artículo 38. Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente Ley estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en materia de costas.

Artículo 39 Normas supletorias. Serán de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.

TITULO V DISPOSICIONES FINALES

Artículo 40. Vigencia de la Ley 24.417. La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.

Artículo 41. Cláusula presupuestaria. Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.

Artículo 42. Entrada en vigencia. La Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

Artículo 43. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

SALA DE LA COMISION, 19 de noviembre de 2008.

Silvia E. Gallego.- Pedro G. Guastavino.- Rubén H. Marín.- Gerardo R. Morales.- Haide D. Giri.- Roberto F. Ríos.- Alfredo A. Martínez.- Luis P. Naidenoff.- María J. Bongiorno.- Julio A. Miranda.- Elena M. Corregido.- Ernesto R. Sanz.- Adriana Bortolozzi de Bogado.- Nicolás A. Fernández.- Cesar A. Gioja.- Rubén H. Giustiniani.- María R. Díaz.- Eric Calcagno y Maillman - Marcelo J. Fuentes - Elida M. Vigo.- Selva J. Forstmann - Marcelo A. H. Guinle - Ada M. Maza.- Mónica R. Troadello.- Ada Iturrez de Cappellini.- Roxana I. Latorre.- Horacio Lores.- José M. A. Mayans.- María C. Perceval.- Marina R. Riofrío.- Blanca I. Osuna.- Nanci M. A. Parrilli.- Roy A. Nikisch.- José C. Martínez.- María D. Sánchez.- José J. B. Pampuro.- Ramón E. Saadi.- Teresita N. Quintela.-

En disidencia parcial:
Isabel J. Viudes.-

ANTECEDENTES

(I)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

VIOLENCIA LABORAL

Artículo 1º.- Concepto. Se considera violencia laboral a toda acción de abuso de poder ejercida por el empleador, personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente con aquel con motivo y/u ocasión de la relación laboral, que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social del trabajador mediante la amenaza, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social.

Artículo 2º.- A los efectos de esta ley, se deberá entender como:

A) Maltrato físico: a toda conducta que esté dirigida directa o indirectamente a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre el trabajador.

B) Maltrato psíquico y social: a la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica desmedida.

Se define con carácter enunciativo como maltrato psíquico y social a las siguientes acciones:

I) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana.

II) Asignar misiones imposibles de realizar; o en plazos o condiciones irrazonables.

III) Encomendar labores en forma frecuente, claramente incompatibles con la categoría o tareas por la que fue empleado el trabajador.

IV) Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando aislamiento.

V) Prohibir a otros empleados que hablen con un trabajador determinado.

VI) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las herramientas o informaciones debidas y/o útiles, necesarias para que el trabajador realice una tarea atinente a su puesto o actividad cotidiana.

VII) Promover el hostigamiento psicológico de manera conjunta y organizada sobre un subordinado.

VIII) Efectuar amenazas reiteradas de despido sin una justa causa.

IX) Apropiarse total o parcialmente del crédito de ideas, propuestas o cualquier trabajo generado por el subordinado.

C) Acoso laboral: a la acción persistente y reiterada de incomodar al trabajador, manifestada en comportamientos, palabras escritas u orales, actos, y gestos que puedan atentar directamente contra la personalidad, dignidad, integridad física o psíquica del individuo o degradar el clima de trabajo en razón de su sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad, origen étnico, color de piel, religión, estado civil, preferencias culturales y deportivas, capacidades diferentes, conformación física, o situación familiar o social.

D) Acoso sexual: toda solicitud por cualquier medio o forma de favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad, haya o no acceso carnal, cuando concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

-Cuando se formule con anuncio expreso o tácito de causar un perjuicio a la víctima respecto de mejoras salariales, de categoría o de la continuidad misma de la relación laboral.

-Cuando el rechazo o negativa de la víctima fuere utilizado como fundamento de la toma de decisiones negativas relativas a dicha persona o a una tercera persona vinculada directamente con ella.

-Cuando el acoso interfiera el habitual desempeño del trabajo, estudios, prestaciones o tratamientos, provocando un ambiente intimidatorio, incómodo, hostil u ofensivo.

E) Inequidad salarial:

- Al hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial entre personas que ejercen en el mismo establecimiento funciones análogas, excepto cuando la distinción fuera fundada en la mayor eficacia, laboriosidad y responsabilidad. El empleador o personal jerárquico deberá probar el carácter no arbitrario de la distinción.

- Al hecho de mantener empleados en el mismo establecimiento en forma registrada y deficientemente registrada y/o no registrada.

F) Amenazas: a cualquier acto y/o dicho por medio de los cuales el empleador, deliberadamente da a entender que quiere ocasionar un mal futuro a algún trabajador.

G) Abuso de poder:

- todo uso indebido y/o desmedido de las facultades de dirección del empleador, en desmedro del medio social del empleado o de su salud psicofísica.
- toda vez que se exija al trabajador, desempeñar tareas laborales los días domingo, y que no esté contemplado como día habitual de trabajo en el contrato.

Art. 3º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia que sea ejercida en el ámbito laboral.

Art. 4º.- A efectos de evitar conductas abusivas, deberá quedar constancia, cuando no se hubiere estipulado el día domingo como día habitual laborable, de toda vez que el empleador proponga al empleado realizar trabajo dominical, como así también quedará constancia de la aceptación o negativa.

Art. 5º.- Ámbito de Aplicación. La presente ley será de aplicación en el ámbito de los tres Poderes del Estado Nacional y en todas las jurisdicciones comprendidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 24.156, como así también en la totalidad del ámbito laboral privado.

Art. 6º.- La autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, haciendo efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley y garantizando que la persona víctima de alguna situación de violencia laboral conserve y desempeñe sanamente su empleo.

Art.7º.- Procedimiento interno. Es responsabilidad del empleador establecer un procedimiento interno, ante el requerimiento fehaciente de la víctima, que sea confidencial, expedito y efectivo, que posibilite:

- 1- al empleado denunciar cualquier hecho de violencia laboral que se haya ejercido sobre él.
- 2- al empleador resolverlo.

Art. 8º.-Comprobados los hechos denunciados, el empleador responsable de ejercer cualquiera de los tipos de violencia en esta ley descriptos, deberá:

- a) Poner fin inmediatamente a la acción violenta
- b) Cuando corresponda, abonar las erogaciones ocasionadas por el tratamiento terapéutico que requiera el trabajador como consecuencia de la violencia sufrida.
- c) Y en los casos mas graves, abonar a la víctima una indemnización equivalente a la cuarta parte de los importes de las remuneraciones devengadas desde la fecha en que comenzaron los actos de violencia hasta la fecha de cese de los mismos.

Art. 9º.- Audiencia. El trabajador, víctima de las acciones de violencia laboral previstas en la presente, podrá solicitar directamente a la

autoridad de aplicación que fije una audiencia, a efectos de oír a las partes cuando:

- a) habiendo denunciado su situación ante el empleador, no obtuvo resultados satisfactorios;
- b) cuando el procedimiento establecido en el Art. 7, no se esté llevando a cabo de la forma que impera la presente ley;
- c) cuando en forma directa haya padecido los maltratos por su empleador o
- d) cuando desconozca o no tenga acceso directo a la persona de empleador.

Art. 10°.- La audiencia, a la que se refiere el Art. anterior, será fijada dentro del plazo de 5 días a efectos de oír a las partes, las que deberán concurrir asistidas por letrado patrocinante o representante gremial.

La reglamentación establecerá el procedimiento aplicable a la tramitación y resolución de las denuncias.

El dictamen administrativo será apelable en los tribunales de primera instancia de la Justicia laboral.

Art. 11.- Responsabilidad. Los empleadores son solidariamente responsables por las acciones u omisiones que posibiliten la violencia laboral a la que se vieron sujetos sus empleados por parte de sus superiores jerárquicos, o de un tercero vinculado directa o indirectamente a aquellos cuando tuvieren conocimiento, cualesquiera la forma, de tales actos.

Art. 12.- Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido sin justa causa del trabajador obedece a razones de represalias, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de 1 año posterior a la denuncia cursada por la víctima de las acciones enunciadas en el artículo 1º de la presente ley, o por haber comparecido como testigo de alguna de las partes respecto de estas acciones.

Art. 13.- Sanción. El trabajador despedido en las circunstancias del Art. 12, tendrá derecho a percibir una indemnización adicional equivalente a un (1) año de remuneraciones.

Art. 14.- Si se comprobare que la denuncia formulada respecto de hechos de violencia laboral, es falsa y/o que los testimonios realizados lo son, respecto de hechos de violencia laboral, el denunciado tendrá derecho a percibir una indemnización similar a la señalada por el Art. 8 inc. C.

Art. 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de ciento ochenta (180) días a partir de su sanción.

Art. 16.- Se invita a las provincias a adherir a la presente ley.

Art. 17 -Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Haide D. Giri.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Violencia es uno de los modos más simples utilizados por las personas para mantenerse en el poder, para mantener la supremacía, para imponer la propia voluntad a otros, para usurpar el poder, la propiedad y aún las vidas ajenas.

La violencia ha penetrado en todos los aspectos de la vida: se manifiesta constante y cotidianamente en la economía (explotación del hombre por el hombre, coacción del Estado, dependencia material, violencia laboral, discriminación del trabajo de la mujer, trabajo infantil, imposiciones injustas, etc.); en la política (el totalitarismo, la exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones, la guerra, la revolución, la lucha armada por el poder, etc.); en la ideología (implantación de criterios oficiales, prohibición del libre pensamiento, subordinación de los medios de comunicación, manipulación de la opinión pública, propaganda de conceptos de trasfondo violento y discriminatorio que resultan cómodos a la elite gobernante, etc.); en la religión (sometimiento de los intereses del individuo a los requerimientos clericales, control severo del pensamiento, prohibición de otras creencias y persecución de herejes); en la familia (explotación de la mujer, abusos sobre los hijos, etc.); en la enseñanza (autoritarismos de maestros, castigos corporales, prohibición de programas libres de enseñanza, etc.); en el ejército (obediencia debida de soldados, castigos, etc.); en la cultura (censura, exclusión de corrientes innovadoras, prohibición de editar obras, dictados de la burocracia, etc.).

Con el presente proyecto, apuntamos a generar contextos cada vez menos fáciles para el desarrollo de la violencia. Su erradicación solo será posible si desde diferentes ámbitos (entre los cuales el legislativo es uno de los mas importantes) impulsamos acciones positivas que impidan su desarrollo, que conformen un cerco frente al cual, la violencia, tenga menos posibilidad de aparecer y extenderse. Este proyecto de ley pretende prevenir conductas violentas en el ámbito laboral, sancionar las conductas allí descriptas, y mejorar los vínculos en relaciones laborales.

Según la OIT el acoso laboral es "cualquier incidente en el cual una persona es abusada o maltratada en circunstancias relacionadas con su trabajo. Estos comportamientos pueden ser originados por jefes, compañeros de trabajo y en cualquier nivel de organización".

En el mundo del trabajo la violencia se manifiesta como abuso de poder para doblegar la voluntad del otro mediante el empleo de la

fuerza física, psicológica, económica y política. En este sentido las mujeres aparecen como las más afectadas y vulnerables a esta agresión, lo que se debe a que, en su mayoría, ocupan puestos no jerárquicos o de menor calificación, y aun en puestos jerárquicos no tienen poder de decisión. Y en tanto abuso de poder, todo acto de violencia que es ejercido por el que lo posee contra el que no lo tiene, desmedidamente.

Existe una discriminación negativa basada en el sexo, consolidada en pautas culturales de sumisión y que en el devenir histórico ha producido la "naturalización" de la violencia de género. Estas pautas también se reproducen en el ámbito laboral.

La violencia laboral produce consecuencias físicas y psíquicas en sus víctimas, alterando tanto su rendimiento como su integridad social. Este estado de vulnerabilidad e inseguridad se refleja en cuadros de ansiedad, irritabilidad, tensión, depresión, desgano, abulia, incapacidad para concentrarse, dolor de cabeza, fatiga crónica, además de enfermedades de origen psicosomático como alergias y trastornos gastrointestinales.

Aun pensando en la productividad de un país, y no solo en el bienestar individual de sus ciudadanos, es indudable que este estado de salud repercute en la rendimiento del/la trabajador/a: sea por reducción de la calidad de su trabajo, el ausentismo, el abandono físico y estético, la desvalorización o los accidentes en el manejo de materiales o instrumental, entre otros.

Esta desmotivación laboral es llevada por la víctima también a su hogar y a su vida social, replegándose cada vez más en el ámbito privado y automarginándose de la participación activa y por lo tanto, afectando a toda la comunidad

El proyecto que estamos presentando incorpora además, como violencia laboral, a la presión que se ejerce sobre los trabajadores cuando se los obliga a trabajar durante los días domingos en contra de su voluntad.

Si la legislación laboral ha ido avanzando hacia un trato más justo a lo largo de la historia de la humanidad, las posteriores desregulaciones que dieron pie a un aumento de la precarización de las relaciones de trabajo, acarrearón en este aspecto específico del trabajo durante los días domingos, graves consecuencias para la vida familiar. La ausencia de los progenitores, muchísimas veces la madre, del único día en que la familia puede reunirse con tranquilidad alrededor de la mesa familiar, constituye un problema adicional a otras condiciones que erosionan la educación de los hijos.

Por otra parte, existen motivaciones de orden religioso y consuetudinario en relación con el trabajo durante los días domingos, que nuestra legislación no puede desconocer. Y no puede obligarse a

los empleados a ir contra sus propias convicciones por las condiciones que impone el mercado.

Al estado le corresponde mantener equilibrios en ésta como en otras materias que valoren además del desarrollo razonable de las actividades empresariales, la elección que los trabajadores pudieran hacer sin perder sus espacios laborales, para el desarrollo de la persona en materia de vida familiar, religiosa y del goce pleno de sus capacidades, incluyendo el ocio.

La Constitución Nacional reconoce el derecho inalienable de todo trabajador de gozar de condiciones dignas de trabajo (art. 14 bis), por lo tanto, regular un marco en el que se repriman los actos de violencia sobre los trabajadores, equivale a hacer cumplir la ley fundamental de Argentina.

Finalmente, queremos dejar constancia que para la formulación del presente proyecto, se han tenido a la vista, la Ley 7232 de la Provincia de Tucumán, Ley 5349 de la Provincia de Jujuy, Ley 1225/04 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley 13.168 de la Provincia de Buenos Aires, y distintos proyectos presentados a nivel Nacional. Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Haide D. Giri.

(II)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

VIOLENCIA EN EL TRABAJO

Titulo I

Capitulo I “ Del Concepto”

Articulo 1°:

Será considerado Violencia Laboral: Toda acción que manifieste abuso de poder ejercida en el ámbito laboral, por el empleador sea este público o privado, por personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él, sobre él trabajador que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y o social mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato físico y o psicológico y o psicológico social u otra ofensa sea esta por razones de: genero, orientación sexual, sexo, edad, religión, discapacidad, nacionalidad u origen étnico, color, estado civil, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas, o situación familiar, bromas, insultos, sin perjuicio de las definidas en la ley N° 23.592 y sus modificatorias.

Artículo 2°:

Son fines de esta ley, los siguientes:

- Prevenir conductas de este tipo en el ámbito laboral
- Sancionar las conductas descriptas en el artículo 1°
- Erradicar la violencia laboral.
- Mejorar los vínculos de las relaciones laborales

Artículo 3°:

Las referencias a empleador, trabajador, superior jerárquico y otros en género masculino deben ser entendidas como no restrictivas para empleadoras, trabajadoras, superiora jerárquica y otras.

Capítulo II “ Definición y Delimitación de los tipos” Violencia Directa e Indirecta

Artículo.4°:

Acoso Moral: Cualquier conducta que manifieste comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos, que degraden al trabajador, la relación y el ambiente laboral.

Artículo.5°:

Acoso Psicológico: Acción persistente de hostilidad, malos tratos desprecio, amedrentamiento, humillación, ataque a la autoestima y a la percepción de sí mismo del trabajador.

Artículo 6°:

Se definen con carácter enunciativo como acoso moral y/o psicológico a las siguientes acciones:

- a) Bloquear iniciativas, de interacción, generando aislamiento
- b) Cambiar al trabajador el lugar habitual de trabajo y/u oficina con ánimo de separarlo de sus compañeros o colaboradores más cercanos.
- c) Prohibir a los empleados que hablen con él.
- d) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana.
- e) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización.
- f) Asignar misiones sin sentido, innecesarias con la intención de humillar.
- g) Encargar trabajos imposibles de realizar
- h) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de una acción u ocultar las herramientas y/o elementos necesarios para concretar una tarea atinente a su responsabilidad.
- i) Promover el hostigamiento de otros trabajadores sobre un subordinado.
- j) Amenazar repetidamente con despidos infundados
- k) Desvalorizar la tarea cotidianamente
- l) Inventar rumores sobre la vida privada y/o social del trabajador.

Artículo 7°:

Se entiende a los efectos de la presente ley como acoso sexual, a la conducta reiterada de asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o

de otros comportamientos basados en el sexo, ejercida por empleador, superior jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él que afectan la dignidad de la mujer o del hombre trabajador. Incluye toda conducta ofensiva y amenazante, que resulta inaceptable, indeseada, e irrazonable para la víctima.

También todo contacto innecesario, comentarios, chistes, sarcasmos y observaciones no bienvenidas de contenido sexual, miradas o gestos lascivos, despliegue de literatura pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la apariencia o cuerpo, contacto físico innecesario y asalto sexual.

Se establecen los siguientes niveles:

-Nivel I: Acoso leve, verbal (incluye conductas del tipo de chistes inadecuados a las circunstancias, conversaciones de contenido sexual, silbidos, piropos continuados)

-Nivel II: Acoso moderado, no- verbal y sin contacto físico.
(Incluye conductas del tipo de miradas, muecas y gestos lascivos y o insinuantes.

-Nivel III: Acoso medio, fuerte verbal.
(Incluye conductas como llamadas telefónicas y o cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales).

-Nivel IV: Acoso fuerte, con contacto físico.
(Incluye conductas manosear, acorralar, sujetar, etc.)

-Nivel V: Acoso muy fuerte.
(Incluye tanto presiones psíquicas como físicas para mantener contactos íntimos.

Tanto el acoso moral como el psicológico al igual que los niveles I, II y III del acoso sexual, y la inequidad salarial conforman el tipo indirecto mientras que forman parte del directo los niveles IV y V de acoso sexual y el maltrato físico.

Artículo 8°:

Se entiende por maltrato físico a toda conducta que esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre el trabajador.

Artículo 9°:

Se entenderá por inequidad salarial el hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial entre hombres y mujeres, que ejercen en el mismo establecimiento funciones equivalentes, en igualdad de condiciones.

TITULO II

Capitulo I

“ De las responsabilidades”

Artículo 10°:

El empleador esta obligado a incluir una cláusula contractual donde expresa fehacientemente la prohibición de la violencia en el ámbito laboral

Artículo 11°:

Es responsabilidad del empleador dar a conocer al trabajador la presente ley. Asimismo deberá exhibir en lugares públicos y visibles dentro del establecimiento el artículo primero y el número de la ley, sea en cartelera u otras determinadas a tal fin, cuyas medidas no serán inferiores a 15cm. por 21cm.

Artículo 12°:

En caso de hostigamiento de un grupo de trabajadores hacia uno en particular es responsabilidad del empleador y/o superior jerárquico hacer cesar dicha conducta.

Artículo 13°:

Los empleadores son solidariamente responsables, por las acciones de violencia laboral que se vieron sujetos sus empleados, por parte de superiores o un tercero vinculado directa o indirectamente a el.

Artículo 14°:

El empleador está obligado a dar fin a la acción violenta y a reparar el daño laboral, moral y material causado a la víctima. En igual forma cuando dicha violencia es ejercida por terceros bajo su responsabilidad, desde el momento que toma conocimiento de las acciones previstas en el artículo 1° de la presente ley.

Capítulo II

“Del procedimiento y órgano competente”

Artículo 15°:

Será autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo, E y SS

Artículo 16°:

Es responsabilidad del empleador establecer un procedimiento interno expeditivo, confiable y efectivo, garantizando la confidencialidad y discrecionalidad del proceso. Asimismo, bajo las mismas condiciones, se podrá dirimir la situación en una instancia de mediación con intervención de representantes gremiales y/o quienes determinen las partes.

Artículo 17°:

El empleador será solidariamente responsable de la indemnización que corresponda abonar cuando el acto de violencia laboral se hubiere ejercido con su conocimiento y no hubiere arbitrado las medidas pertinentes para hacer cesar esa conducta

Artículo 18°:

Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de las acciones previstas en los artículos 4,5,6,7,8 y 9 que halla dado cuenta de la violencia laboral o que se halla negado a padecer violencia laboral, podrá sufrir perjuicio personal alguno en sus condiciones de empleo.

Artículo 19°:

Si el empleador omitiera o no cumpliera con lo establecido en el artículo 16, el damnificado podrá accionar ante la Autoridad Competente

Capítulo III De las sanciones

Artículo 20°:

Las infracciones previstas en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° serán sancionadas con multas determinadas en pesos equivalente al valor de cinco a veinticinco salarios mínimo, vital y móvil, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la acción.

Artículo 21°:

Los recursos provenientes de las sanciones serán percibidos por la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades del Ministerio de Trabajo, destinándose a capacitación, campañas, videos, publicidad, investigación, edición de material informativo, entre otros.

Artículo 22°:

La presente ley será de aplicación en el ámbito de los tres Poderes del Estado Nacional y todas las jurisdicciones comprendidas en el art. 8° y 9° de la ley 24.156 y el ámbito privado, debiendo dictarse en el plazo de 60 días desde la vigencia de la presente ley el procedimiento reglamentario para su aplicación.

Artículo 23°: Comuníquese al Poder Ejecutivo

Ada M. Maza.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

“Empleada de Minoridad denunció a su jefe por golpes”, “Víctimas de acoso sexual”, “Dos mujeres policía denuncian acoso sexual”, “ La ley no alcanza”, son los distintos titulares con que se intenta caracterizar este flagelo social y laboral.

La presente iniciativa, viene a cubrir un vacío legislativo, es el resultado de un largo camino de investigación y experiencias, al mismo tiempo recepta un serio trabajo sobre tema, que realizó y continua realizando la Secretaria de Igualdad de Oportunidades y de Trato de UPCN (Unión Personal Civil de la Nación).

Se ha tomado en parte, la letra y las variantes de las distintas legislaciones provinciales como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Tucumán, La Rioja, San Luis, Mendoza, Córdoba, y Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue promulgada la primera ley en la Provincia de Tucumán en el año 2002, y la segunda en la Provincia de Jujuy en el año 2003. Todo ello a raíz del impulso y actividad de seguimiento de la mencionada Secretaría Gremial.

Se trata de una problemática, en la que las sociedades modernas no han vacilado en detectarla, aplicando por medio de la normativa las soluciones adecuadas y eficaces para su eliminación, puesto que negarla o ignorarla, solo agrava el problema y denigra la calidad de vida del trabajador y el ambiente laboral en su conjunto.

Este trabajo ha tratado de resumir en su articulado, todo los aspectos fundamentales, tratando de extender su protección y sanciones a la mayor cantidad de supuestos posibles. Tampoco se ha descuidado razones y situaciones de relevancia en el tema como por ejemplo la prevención, publicidad y erradicación del mal.

Se tratado de plasmar los distintos tipos de violencia que están presentes en el ámbito laboral, es decir la moral, sexual y física. En la faceta procedimental siguiendo los principios generales del “debido proceso”, se ha tomado en parte y adaptado la legislación más avanzada como es la francesa, que al igual que Suecia son los únicos países de Europa que han legislado sobre el asunto, no obstante que el Parlamento Europeo ha recomendado hacerlo a través de distintas Resoluciones. Con respecto a las responsabilidades se ha buscado una redacción ágil, clara y entendible de manera que puedan ser comprendidas en su inteligencia tanto por el empleador como por el trabajador. El órgano de aplicación será el Ministerio de Trabajo puesto que consideramos que en razón de la materia es el adecuado para entender y conocer de esta problemática.

A su vez al tratar las sanciones, hemos luego de un cuidadoso examen, tratado de que las mismas, sean acordes a las faltas cometidas y también ejemplificadoras, procurando que no influyan en un aspecto negativo dentro del marco jurídico laboral o tengan algún impacto no deseado en la faz del desarrollo e inversión económico-ocupacional.

Para finalizar es nuestra aspiración que la presente ley sea aplicable tanto en ámbito público como el privado, porque estos acontecimientos ocurren en ambos, y no es posible que se deje a una amplia franja de trabajadores sin protección.

Ada M. Maza.

(III)

PROYECTO DE LEY

Título Preliminar

Art. 1.- Violencia Doméstica

Se entenderá por violencia doméstica o familiar a toda acción, omisión, abuso, que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito.

Art. 2.- Grupo Familiar

A los efectos de esta ley, se entenderá por grupo familiar, el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, colaterales, convivientes sin relación de naturaleza laboral, y no convivientes que hayan estado vinculados por matrimonio o unión de hecho.

Art. 3.- Objeto de la Ley

- a) Prevenir, erradicar y sancionar la violencia doméstica del núcleo familiar;
- b) Amparar, asistir y proteger integralmente a las víctimas de la violencia doméstica;
- c) Resguardar la institución familiar como célula social básica y fundamental de toda la comunidad.

Art. 4.- Principios

- a) Difusión de los principios rectores y el contenido de la presente ley.
- b) Inserción de mecanismos e instrumentos idóneos en las instituciones públicas en el ámbito educativo, social, sanitario y de los medios de comunicación para cumplimentar el objeto de la presente ley.
- c) Brindar especial protección a las mujeres por hechos de violencia de género en el núcleo familiar.
- d) Consagración de derechos y procedimientos a las víctimas de la violencia familiar, asegurando un acceso expedito a los mismos.
- e) Otorgamiento de beneficios laborales y económicos a las víctimas de violencia de género en el núcleo familiar.
- f) Adecuar el régimen penal y procesal penal a la problemática actual de la violencia doméstica, con fines protectores y sancionatorios.
- g) Instar a la colaboración, articulación y coordinación de emprendimientos institucionales públicos y privados.
- h) Promover la capacitación y especialización de los sujetos intervinientes en el tratamiento de la violencia doméstica.

Título I

Medidas de información, prevención y detección

Capítulo I

Medidas de información

Art. 5.- Plan Nacional

Inc. 1. Créase el Plan Nacional de Información y Prevención de la Violencia Familiar, que tendrá como fin:

a) Introducir en el medio social medidas de concientización respecto de los derechos y libertades fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres y de los principios básicos de convivencia.

b) Realizar difusión de la línea telefónica contemplada en el art. 75.

c) La formación y capacitación de profesionales en materia de violencia de género y familiar.

Inc. 2. El Plan Nacional de Información y Prevención de la Violencia Familiar, contará con la participación de afectados, instituciones y especialistas afines.

Inc. 3. Los emprendimientos del presente Plan, estarán adaptados para una adecuada accesibilidad a las personas discapacitadas.

Capítulo II

Ámbito educativo

Art. 6.- Política del sistema educativo

Favorecer en el alumnado el desarrollo de la capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.

Art. 7.- Medidas contra la desigualdad

Las autoridades a cargo de los establecimientos educativos de toda índole, tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a fin de interrumpir actitudes o hechos directa o indirectamente relacionados a la violencia de género, que se detecte dentro de los mismos, debiendo implementar en el alumnado, actividades de información y concientización relacionadas a la problemática de la violencia doméstica y de género.

Art. 8.- Escolarización inmediata

La autoridad administrativa de educación llevará a cabo todas las medidas necesarias para la inserción o reinserción escolar de los niños, niñas y adolescentes víctimas, prestando especial atención en los casos en que aquellos han debido ser reubicados por hechos de violencia doméstica.

Art. 9.- Eliminación de materiales sexistas

Las autoridades educativas oficiales velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres.

Art. 10.- Formación docente

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología fomentará medidas necesarias para que en los planes de formación docente, de todo nivel educativo, se incluya una formación específica en materia de igualdad de género y de reconocimiento y detección temprana de signos de violencia en los niños y jóvenes.

Art. 11.- Participación del Consejo Federal de Educación

El Consejo Federal de Educación impulsará recomendaciones para la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Art. 12.- Control educativo.

El organismo de contralor verificará y velará por el cumplimiento de las medidas educativas de la presente ley.

Capítulo III

Publicidad y medios de comunicación

Art. 13.- De la Publicidad

Cualquier difusión televisiva o radial que muestre un estereotipo negativo de la familia y sus integrantes, o implique un vejamen a las mismas, será considerada, en los términos de la presente, contraria a las disposiciones contempladas en la ley 22.285 en cuanto al contenido de las emisiones.

Art. 14.- Control de la publicidad y de la comunicación

El Comité Federal de Radiodifusión, o el organismo que en el futuro lo reemplace, deberá hacer uso de sus potestades sancionatorias cuando los medios audiovisuales omitan las prescripciones contempladas en el artículo anterior.

Art. 15.- El Consejo Nacional de la Mujer, El Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia, y la Comisión Nacional Asesora para la Integridad de las Personas con Discapacidad, podrán solicitar al Comité Federal de Radiodifusión, que emplee los medios necesarios para que el responsable de la pieza publicitaria cese o rectifique lo comunicado en la misma, sin perjuicio de las medidas sancionatorias que el Comité Federal de Radiodifusión aplique.

Art. 16.- El Comité de Federal de Radiodifusión debe expedirse fundadamente sobre la solicitud a la que se refiere el artículo anterior, en un plazo no mayor a quince (15) días, el que debe ser notificado al solicitante por medio fehaciente.

Capítulo IV

Ámbito de la Salud

Art. 17.- Medidas de sensibilización y formación

1. El Ministerio de Salud, junto con los órganos provinciales análogos, en el seno del Consejo Federal de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales para la detección precoz de la violencia familiar y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de fomentar la contribución del sector de la salud en contra de la violencia familiar.

2. La Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción, dependiente del Ministro de Salud, desarrollará programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las mujeres víctimas de la violencia de género.

3. El Consejo Interuniversitario Nacional promoverá la inserción en los programas de formación de profesionales sociosanitarios, de contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de la violencia doméstica.

Art. 18.- COFESA

El Consejo Federal de Salud, contará con el apoyo especial de la Asamblea Técnica del Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica, para procurar los fines de la presente ley en el ámbito de la salud.

Título II

Derecho de las mujeres víctimas de violencia de género

Capítulo I

Derecho a la información amplia y adecuada y a la asistencia jurídica y social

Art. 19.- Las mujeres víctimas de la violencia de género, gozarán de los derechos del presente capítulo, los cuales serán de aplicación efectiva y real, pudiendo recurrir al órgano judicial para su aplicación expedita.

Art. 20.- Derecho a la información

1. Las mujeres víctimas de violencia de género, deberán contar con toda la información que ampare su situación en forma expedita y personalizada.
2. La información será de acceso irrestricto, y se brindará en forma confidencial y de la manera más adecuada para la víctima.
3. Las víctimas que padezcan alguna incapacidad que limite el simple acceso a la información, contarán con vías adecuadas para acceder a las mismas.

Art. 21.- Asistencia social integral

Los Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica locales, brindarán apoyo, acogida y recuperación integral a las mujeres víctimas de violencia de género, basándose en los principios de actuación urgente, atención permanente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

La atención multidisciplinaria implicará:

1. Brindar información en los términos del art. 20.
2. Asistir psicológica, jurídica y sanitariamente a los sujetos pasivos de la violencia y a su grupo familiar.
3. Brindar contención de tipo social.
4. Otorgar apoyo educativo.
5. Formación de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

Art. 22.- Derecho a la asistencia jurídica

Se garantiza la asistencia jurídica y patrocinio gratuito en los procesos judiciales o administrativos, vinculados directa o indirectamente con los hechos de violencia a las víctimas que la requieran y no cuenten con

recursos suficientes, a través de los organismos existentes afines, y los creados por la presente ley.

Art. 23.- Extensión

Los beneficios descriptos en el artículo anterior, serán extensibles a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, y se brindarán, en todos los casos, en cuanto se solicitaren.

Capitulo II

Derechos y beneficios laborales y prestaciones de la Seguridad Social

Art. 24.- Principio del menor perjuicio

Los beneficios y derechos reconocidos en el presente capítulo, deben practicarse de manera tal que el empleador sufra el menor perjuicio posible como consecuencia de su ejercicio.

Art. 25.- Ausencia justificada

La víctima que se encuentre en relación de dependencia, tendrá los derechos reconocidos en la ley 23.691, haciéndose éstos extensivos a los supuestos en los que deba ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales tendientes a suprimir los efectos psicológicos de la violencia sufrida, en relación a su persona y/o a su grupo familiar.

Art. 26.- Licencia familiar

La víctima que tuviere personas a cargo, podrá gozar de hasta 2 días de licencia mensuales, con el fin de brindar contención afectiva a su núcleo familiar.

Art. 27.- Reorganización del empleo

El empleador deberá tomar las medidas necesarias, cuando sean requeridas por la víctima, para reorganizar las funciones y el tiempo de trabajo de la misma, a fin ayudarla a afrontar y dar solución al problema de la violencia.

Art. 28.- Conservación del empleo

El empleador conservará el empleo de la trabajadora víctima de la violencia de género y que tenga personas a su cargo, por un plazo de seis meses, cuando esta lo solicite.

El período de conservación, que será sin goce de salario, se considerará período de trabajo a los efectos del cómputo de su antigüedad, frente a los beneficios de las leyes laborales, estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo que le hubiesen correspondido en el caso de haber prestado servicios.

Cuando se produzca la reincorporación, sin perjuicio de lo establecido en el art. 27, se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión laboral.

Art. 29.- Protección ante el despido

Si el empleador despidiese a la trabajadora durante el plazo al que se refiere el art. anterior, deberá abonar, además de las indemnizaciones

por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquélla.

Art. 30.- De la trabajadora por cuenta propia

El juez, valorando las circunstancias particulares del caso, podrá ordenar que se les concedan beneficios tributarios a las trabajadoras por cuenta propia, víctimas de violencia de género, que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral; siempre que esto signifique una manifiesta disminución en sus ingresos.

Art. 31.- De los programas de empleo

En los planes nacionales para la inserción laboral, se brindará especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

Art. 32.- Acreditación

El órgano judicial interviniente dictará el instrumento que acredite ante el empleador la verificación de las circunstancias y requisitos que habiliten a la trabajadora a hacer uso de los derechos conferidos en el presente capítulo y en el anterior.

Capítulo III

Derechos económicos

Art. 33.- Fondo para las víctimas

1- Créase el Fondo de Asistencia Económica para las Víctimas de Violencia de Género, que tendrá como fin brindar respaldo económico a las víctimas.

2- El fondo estará constituido por:

- a) El aporte que realice el Estado Nacional a través de su Presupuesto General de Gastos, Leyes y Decretos Especiales.
- b) Contribuciones y subsidios de otras reparticiones o dependencias públicas o privadas.
- c) Los aportes resultantes de convenios o acuerdos con organismos internacionales o extranjeros.
- d) Legados y donaciones.

3- Esta ayuda se prestará mensualmente mientras dure la situación de desempleo de la víctima hasta un plazo máximo de seis meses. Podrá ser renovado por única vez y por un plazo igual o menor, teniendo en cuenta, por parte de la autoridad de aplicación, las especiales consideraciones del caso.

4- La accesibilidad a este beneficio estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) La existencia de un expediente judicial donde tramite la causa por violencia de la que la destinataria fuere víctima.
- b) Que la víctima se encuentre en situación de desempleo.
- c) La inscripción en los planes o registros nacionales o provinciales existentes, tendientes a la obtención de un empleo, siempre que se encuentre en condiciones físicas y mentales para desarrollarlo.

5- La tramitación para la concesión de este beneficio deberá realizarse en el mismo expediente judicial donde tramita la causa por violencia,

en el que deberán probarse la existencia de los presupuestos para su adquisición y ser otorgados por resolución judicial.

6- El Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación, fiscalización y control del presente Fondo.

Art. 34.- Acceso a la vivienda y residencias públicas

Las víctimas de violencia doméstica, serán consideradas como parte de los grupos prioritarios para el acceso a viviendas o residencias públicas, de acuerdo a los sistemas locales existentes, poniendo especial atención en caso de que las mismas tengan niños, niñas, adolescentes o discapacitados a su cargo.

Título III

Tutela Penal

Art. 35- De la suspensión de la pena

Incorpórese como último párrafo del Art. 27 bis del CPN, el siguiente texto:

En el supuesto de la suspensión de la pena, producto de la violencia de género, el Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en los incisos 2, 3 y 6 del presente artículo, generando su incumplimiento, la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena, debiendo cumplir la totalidad de la pena.

Art. 36.- Protección penal

Las penas establecidas en los arts. 89, 90, 91, 149 bis. y 149 ter, del CPN, serán incrementadas un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima:

1. Sea o hubiese sido esposa o concubina, o hijo de una de estas,
2. Sea pariente conviviente o no,
3. Sea incapaz y conviva con el autor,
4. Sea un conviviente que este a cargo del autor.

Título IV

Instituciones

Art. 37.- Créase el Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tendrá el carácter de organismo descentralizado con sede en la Capital Federal.

Art. 38.- Las provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran a la presente ley, deberán crear Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica, que podrán funcionar en organismos locales ya existentes que incluyan y/o incorporen entre sus incumbencias la problemática de la violencia doméstica. Allí donde no existieran, el Instituto Federal fomentará su creación y coadyuvará para tal fin.

Art. 39.- Cada Centro de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica estará compuesto por un plantel mínimo integrado por:

un/a abogado/a
un/a psicólogo/a
un/a médico
un/a asistente social.

El número de integrantes de cada Centro, deberá ser proporcional a la densidad demográfica de la zona donde funcione y a los indicios estadísticos relacionados al nivel de violencia doméstica y de género existente en la población.

Art. 40.- Serán funciones del Instituto Federal de Tratamiento y Prevención de la Violencia Doméstica:

- a) Desarrollar toda política tendiente a la resolución de la violencia doméstica y de sus efectos.
- b) Diseñar políticas asistenciales que deberán ser llevadas adelante por profesionales con experiencia en la materia.
- c) Elaborar planes y proyectos tendientes a implementar una estrecha relación funcional y coordinada por parte de los Centros locales de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica entre sí y con el Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica.
- d) Desarrollar medidas de protección directa, expedita y efectiva conjuntamente con otros organismos del estado con incumbencia en la materia.

Art. 41.- Serán funciones de los Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica de las jurisdicciones que adhieran a la presente ley:

- 1) Recibir denuncias, por parte de los mencionados en los arts. 61 y 64, o de terceros denunciante de buena fe y radicarlas en el órgano judicial competente, corroborando preliminarmente su idoneidad en el último caso.
- 2) Asistir psicológica, jurídica y sanitariamente a los sujetos pasivos de la violencia y a su grupo familiar.
- 3) Propender el tratamiento integral del fenómeno en forma personalizada y, cuando sea favorable, en conjunto con el grupo familiar.
- 4) Aplicar toda acción local concreta tendiente a la resolución, total o parcial de la violencia doméstica y de sus efectos.
- 5) Trabajar en coordinación con los ministerios públicos de defensa locales, comisarías, hospitales y oficinas de asistencia a la víctima dentro de la jurisdicción donde actúen.
- 6) Prestar colaboración a los órganos que asistan a los jueces para la elaboración de diagnósticos e informes, e igualmente a los magistrados competentes en asuntos penales y de familia, cuando la requieran.

Art. 42.- La creación de los Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica, por parte de las autoridades provinciales, deberá

propender siempre, en cuanto a su distribución, a que la población toda tenga posibilidad de acceso a los mismos.

Art. 43.- Cuando se tome conocimiento o haya sospecha fundada de algún hecho que constituya una violación de una norma vinculada, directa o indirectamente, con la violencia doméstica o familiar, el funcionario interviniente tendrá la obligación de denunciarlo, sin perjuicio de los deberes relativos al secreto profesional cuando correspondiere.

La obligación del párrafo anterior deberá ser cumplida dentro de un plazo máximo de SETENTA Y DOS (72) horas, salvo que, consultado el programa previsto en el tercer párrafo del artículo 2º del Decreto 235/96, surja que el caso se encuentra bajo atención o que, por motivos fundados a criterio del denunciante, resulte conveniente extender el plazo.

Art. 44.- Serán órganos de administración y gobierno del Instituto:

- a) El Comité Directivo;
- b) La Asamblea Técnica;
- c) El Consejo Federal.

Art. 45.- El Comité Directivo estará integrado por tres miembros designados: uno perteneciente al Consejo Nacional de la Mujer, otro al Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el tercero al Consejo Federal del Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica.

Art. 46.- Para ser miembro del comité directivo se requiere ser mujer, con extenso conocimiento en la materia.

Art. 47.- Ejercerán sus funciones por un período de cuatro (4) años, mientras continúen en su cargo en los organismos que los propusieron. Únicamente podrán ser redesignadas, por única vez consecutivamente, bajo la consideración de la mayoría absoluta del mismo cuerpo, en base a la evaluación de su gestión.

Art. 48.- Son funciones del Comité Directivo:

- a) Redactar y aprobar el reglamento de funcionamiento del Instituto, así como determinar cualquier modificación.
- b) Velar por el cumplimiento del reglamento.
- c) Fiscalizar, coordinar y articular el cuerpo global de profesionales.
- d) Dictaminar políticas generales en el tratamiento de la violencia domestica.

Art. 49.- La Asamblea Técnica estará encabezada por:

- a) Tres representantes mujeres especializadas nombradas por el Poder Ejecutivo Nacional, que representen a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Medio Ambiente y Salud.
- b) Cuatro representantes mujeres designadas por el Poder Legislativo Nacional, dos por cada una de las Cámaras, integrantes de las comisiones relacionadas con la materia.

- c) Dos representantes mujeres del fuero judicial de familia, designadas por el Poder Judicial de la Nación.
- d) Una representante mujer de la Policía Federal con especialización en delitos contra la mujer y la minoridad.
- e) Una representante del Consejo Federal de Educación.

Art. 50.- Serán funciones de la Asamblea Técnica:

- a) Brindar asesoramiento permanente al comité directivo, a los Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica locales, y al Consejo Federal, cuando éste lo requiera.
- b) Elaborar estadísticas anuales e informes, nacionales y provinciales, que posibiliten la verificación de los resultados de las políticas que se estén aplicando.
- c) Proponer acciones tendientes a facilitar la misión del comité directivo

Art. 51.- Las integrantes de la Asamblea Técnica serán designadas por un período de cuatro años. Serán renovados por mitades cada 2 años, pudiendo ser reelectas por otro único plazo igual.

Art. 52.- El Consejo Federal estará integrado por una representante por Provincia, y una por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran a esta ley, designadas por las respectivas legislaturas a propuesta en terna por el Poder Ejecutivo local.

Art. 53.- Cada representante local que integre el Consejo Federal tendrá a su cargo la coordinación general de tareas, proyectos y funciones entre los centros de prevención y atención de la violencia doméstica de la provincia que represente o de la C.A.B.A. y el Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia.

Art. 54.- Son funciones del Consejo Federal:

- a) Desarrollar estudios con el fin de recabar información sobre la evolución y relación con las costumbres e idiosincrasia del problema de la violencia doméstica a nivel regional;
- b) Articular emprendimientos conjuntos entre los Centros de Atención y Prevención provinciales;
- c) Elaborar y dirigir tareas, en forma coordinada, con y entre los Centros de Prevención y Atención provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 55.- Los recursos del Instituto se integrarán con:

- a) Los fondos que el Presupuesto General de la Nación preverá para el cumplimiento de los objetivos y acciones previstos por la presente ley.
- b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales quedarán exentos de todo tributo, cualquiera sea su naturaleza.
- c) Todo tipo de aportes, subsidios, contribuciones en dinero y/o en especie, proveniente de entidades oficiales o privadas.
- d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto de la venta de publicaciones o de la cesión de derechos de propiedad intelectual.

Art. 56.- Las provincias que adhieran a la presente ley, deberán:

Inc. 1- Crear en el ámbito de sus correspondientes ministerios público fiscales, o en el organismo análogo correspondiente, la Unidad Provincial Judicial de la Mujer, la cual estará mayoritariamente integrada por personal femenino calificado y funcionará coordinadamente con la Oficina de Asistencia a la Víctima y los Centros de Prevención y Atención. Tendrá como fin la recepción de denuncias y la tramitación de procesos originados por la comisión de delitos contra la familia y la mujer.

Inc. 2- Tomará todas las medidas necesarias para que se implemente en las comisarías, Unidades Especiales para la Protección de la Mujer, que estarán íntegramente compuestas por personal femenino, el cual deberá ser especialmente instruido en materia de delitos contra la familia y la mujer, y cuyos fines serán:

a) Asistir a la Unidad provincial Judicial de la Mujer.

b) Realizar tareas de prevención vinculadas a la materia de la presente ley.

Inc. 3- Adoptar las medidas descriptas en el art. 66.

Art. 57.- Se creará en los Hospitales Públicos Nacionales y en los Provinciales que adhieran a esta Ley, una unidad jurídica destinada a plantear las medidas procesales pertinentes a cada caso de violencia que esta Ley regula.

Art. 58.- La unidad jurídica estará integrada por un abogado/a que complementará las medidas de carácter integral que se llevarán a cabo para contener el cuadro de violencia.

Art. 59.- En el caso de violencia doméstica y las que se estipulan en esta Ley, el abogado/a aconsejará al médico que denuncie el hecho o patrocinará en las primeras medidas procesales que se estimen pertinentes para tratar la violencia del caso.

Art. 60.- Presentada la denuncia, o la medida procesal pertinente ante la autoridad competente, cesará en su función la unidad jurídica, continuando las actuaciones su curso legal, conforme a los principios de defensa en juicio, por vía oficial o privada.

Título V

Orbita procesal

Art. 61.- De la denuncia

Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas.

Art. 62.- El tercero denunciante de buena fe, podrá solicitar que se reserve su identidad, si así lo requiriese.

Art. 63.- Los Funcionarios Públicos que ante el conocimiento de un hecho de violencia, lo denuncien a la autoridad competente, serán eximidos de soportar ulteriores responsabilidades.

Art. 64.- Cuando los damnificados fuesen niños, niñas, adolescentes, incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales, el ministerio público, el Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica y/o los Centros de Prevención. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. Los damnificados mencionados, podrán directamente poner en conocimiento de los hechos al ministerio público.

Art. 65.- De las denuncias que se presenten se dará participación al Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica y al Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia. Para el mismo efecto, podrán ser convocados por el juez, los organismos públicos y entidades no gubernamentales dedicadas a la prevención y asistencia a las víctimas.

Art. 66.- Diagnóstico

El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán solicitar otros informes técnicos.

Cuando las circunstancias particulares del caso requieran medidas expeditas y sin demora, el juez podrá dispensarse del diagnóstico del párrafo primero.

Art. 67.- Diagnóstico de interacción familiar.

Sin perjuicio de la actuación de los auxiliares de la justicia que correspondan, para el diagnóstico de interacción familiar previsto en el artículo anterior, el Juez competente dispondrá:

a) De los servicios que presten las instituciones públicas especializadas y las instituciones que a esos efectos se inscriban en el registro creado en el art. 9 del decreto 235/96.

b) Del Cuerpo Interdisciplinario previsto en el artículo 6º del decreto 235/96.

c) De los Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica previstos en el Art. 38 de la presente ley.

El tratamiento que se indique podrá ser derivado a las instituciones públicas o privadas que se encuentren inscriptas en el registro del art.

9 del decreto 235/96, cuya coordinación y seguimiento de casos estará a cargo del Consejo Nacional Del Menor y La Familia.

El Consejo Nacional Del Menor y La Familia deberá informar a los jueces cuáles son las instituciones donde se asegurará al agresor y/o su grupo familiar, asistencia médico-psicológica gratuita.

Art. 68.- Audiencia de Evaluación y/o Conciliación

El juez convocará a las partes, a fin de tomar conocimiento de la situación familiar. El juez podrá convocar a una audiencia conjunta, sólo en el caso de que la víctima preste su conformidad para la misma.

Art. 69.- Sustitúyase el inc. 2 del art. 2 de la ley 24.573, por el siguiente:

Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad y las relativas a la violencia doméstica, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador.

Art. 70.- Medidas cautelares y/o autosatisfactivas.

El juez podrá disponer, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas:

- a) Ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo familiar;
- b) Prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo, estudio o habituales;
- c) Impedir la comunicación telefónica, electrónica, epistolar o de cualquier índole con la víctima;
- d) Inhabilitar al autor para la tenencia y portación de armas de fuego.
- e) Asegurar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;
- f) Decretar provisoriamente alimentos, tenencias y derechos de comunicación con los hijos.

El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a las circunstancias del caso.

Art. 71.- Sanciones

El juez podrá imponer tras el incumplimiento de alguna de las medidas establecidas en el art. anterior, la realización de labores o tareas comunitarias, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 239 CPN y/u otras normas legales.

Art. 72.- Toda vez que el autor incurra en incumplimientos, en forma injustificada, de prescripciones de índole terapéuticas, asistenciales, psicológicas o psiquiátricas, tendientes a resolver el problema de la violencia doméstica o de género, el juez podrá cargar costas judiciales a su orden, por los servicios profesionales puestos a su disposición y no utilizados.

Titulo VI

Políticas Públicas

Art. 73.- Fuerzas y cuerpos de seguridad

La autoridad de aplicación, con el objeto de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que los cuerpos de seguridad locales, creen unidades especializadas de atención a las víctimas de la violencia doméstica, allí donde aún no existiesen.

Art. 74.- Planes de colaboración

El Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia y Los Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica deberán elaborar programas tendientes a trabajar en forma conjunta y coordinada con las comisarías locales, juzgados, hospitales y centros asistenciales de salud a fin de lograr una mayor efectividad y funcionalidad en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia en el seno de la familia.

Art. 75.- Línea telefónica de comunicación

Habilítese una línea central 0-800 para la comunicación al Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica, para la recepción de denuncias, asistencia y amparo a las víctimas, la cual servirá como mecanismo de comunicación y derivación para los Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica locales.

Art. 76.- Deróguese los art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 de ley 24.417 y los arts. 4, 8, 13 del Decreto 235/96.

Art. 77.- Los artículos del Decreto 235/96, se entenderán reglamentarios de los preceptos de la presente ley.

Art. 78.- Invítase a las Provincias, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente.

Art. 79.- Esta Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 80.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía. – Pedro Salvatori. – Teresita N. Quintela. – Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani. – Mirian B. Curletti. – Mabel L. Caparros. – Roxana I. Latorre. – Adriana Bortolozzi de Bogado. – Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque. – María E. Castro. – Graciela Y. Bar. – Mario R. Mera. – Roberto F. Ríos. – Marina R. Riofrío.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El ámbito de lo doméstico ha sufrido a lo largo de la historia una doble contraposición: por una parte, la división entre público y privado (en

donde privado equivalía no sólo a negocios privados, sino también a la vida doméstica) y luego, la distinción entre privado y doméstico, donde lo primero es el mundo de la profesión y los negocios y lo segundo el ámbito de la intimidad ligada a la familia.

Ese lugar, menospreciado y deslucido frente al otro, el de la ciudadanía y el éxito social; fue naturalizándose como el espacio de la mujer, o peor aún el lugar donde muchas mujeres sufrieron y sufren la ridiculización y hasta la agresión física. Y con ellas, sus hijos.

Aunque no debe interpretarse reducidamente la violencia doméstica como violencia de género, hay que reconocer que ésta es la más extendida. El Proyecto de Ley que estamos presentando toma un concepto amplio de violencia doméstica que involucra al ejercicio del poder para controlar, humillar o maltratar a algún integrante de la familia.

Pero es bueno recordar que la discriminación de la mujer, que toma la forma de invisibilidad y falta de reconocimiento de los derechos en los ámbitos públicos y privado, asume muchas veces la forma de violencia en el ámbito de lo doméstico.

El ámbito también define una serie de conductas de quienes padecen la situaciones de violencia doméstica, que suelen tener reticencia a denunciar lo que ocurre, en parte a la espera de un cambio espontáneo del agresor y en parte por la dificultad para ver la conducta de violencia en alguien al que se está ligado por razones afectivas además de la baja autoestima que la situación va generando.

No es un elemento menor en esta cuestión la falta de confianza en las instituciones del estado, incluyendo los trámites jurídicos, que se convierten en refuerzos indirectos al círculo generado por la violencia. Por eso, en este Proyecto se hace especial referencia a la importancia del funcionamiento de los cuerpos interdisciplinarios que asisten preliminarmente a los órganos judiciales, brindándole a los mismos una fundamental herramienta al momento de tomar decisiones que afecten al grupo familiar.

La complejidad de la cuestión, donde intervienen factores de diferente naturaleza, incluyendo componentes ancestrales que están muy arraigados en la población, lecturas ortodoxas de mandatos religiosos, costumbres enraizadas provenientes de culturas patriarcales, un sistema educativo al que le lleva mucho tiempo incorporar y promover cambios en materia de discriminación, entre muchos otros, amerita una respuesta desde el estado.

Esa respuesta debe tomar la cuestión en toda su complejidad y emplear todos los recursos de que se dispone y que proveen las ciencias sociales, los avances jurídicos, las tecnologías de la información, entre muchos otros para actuar de manera inmediata e integral.

En ese sentido el Estado nacional debe funcionar como un articulador de políticas públicas integrales destinadas al amparo, protección y

prevención de la violencia doméstica que sólo tendrán éxito si se le suman las diferentes provincias.

En los últimos años, nuestro país ha evidenciado avances en el orden normativo, tendientes a otorgarle el debido tratamiento, en la esfera judicial, a la problemática de la violencia doméstica.

Entre estos avances, puede considerarse como primer paso significativo, a la sanción de la ley 24.417 "Ley de protección contra la Violencia Familiar" y su decreto reglamentario. Esta normativa tiene como objeto el tratamiento judicial de situaciones de violencia sufridas en el ámbito familiar por cualquiera de sus integrantes, establece la competencia de los tribunales de familia y prevé una serie de medidas cautelares tendientes a la efectiva protección de las víctimas.

Asimismo, contempla la obligación de denunciar hechos de violencia relacionados con niños, niñas, adolescentes, incapaces, ancianos y personas con discapacidades, que lleguen a conocimiento de los servicios asistenciales, educativos, públicos y privados, profesionales de la salud y funcionarios públicos. Establece además una instancia de conciliación y la necesidad de un diagnóstico de interacción familiar.

Por su parte la Constitución Nacional, en su artículo 75 inc. 23, encomienda al Congreso de la Nación, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de las mujeres.

En el orden trasnacional, nuestro país también ha ido avanzando en esta materia, otorgándole rango constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como en el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer; del mismo modo y más recientemente, el 5 de Julio de 1996, el Estado Nacional ha ratificado La Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Con esto se compromete a adaptar la legislación interna de modo tal que queden contempladas todas las obligaciones asumidas entonces, tendientes a luchar contra esta problemática de la violencia doméstica y de género, de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica.

Asimismo se compromete a incluir todas las normas adecuadas y medidas jurídicas para conminar al agresor a cesar con la violencia; establecer procedimientos legales y administrativos justos y eficaces; modificar patrones socioculturales de conducta, capacitar al personal de administración de justicia, efectores de salud y docentes, suministrar servicios especializados, fomentar la implementación de programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público, propender a que los medios de

comunicación elaboren directrices de difusión adecuadas a la normativa vigente; recopilar estadísticas a efectos de diseñar programas y políticas eficientes y promover la cooperación interinstitucional para el intercambio de ideas, experiencias y la ejecución de programas.

En estos aspectos, nuestro país ha detenido su avance. Mediante la sanción de esta ley apuntamos a llenar el vacío legislativo que se ha creado, cumpliendo así con las obligaciones por el Estado asumidas y que hasta hoy no han sido traducidas a normas, políticas, planes o servicios concretos en la materia.

Título I
Medidas de información, prevención y detección
Capítulo I
Medidas de información

Con la creación del Plan Nacional de Información y Prevención de la Violencia Doméstica pretendemos fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y a que se respeten y protejan sus derechos como ser humano.

Además de introducir medidas de concientización respecto de los derechos y libertades fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres y de los principios básicos de convivencia, se busca fomentar la educación y capacitación del personal y funcionarios encargados de la aplicación de las políticas de prevención, detección, sanción y eliminación de todas las formas de violencia doméstica.

Capítulo II
Ámbito educativo

Con la incorporación del tratamiento de la problemática de la violencia doméstica de una forma preventiva, desde la edad escolar; buscamos el enseñarle al alumnado a resolver sus conflictos pacíficamente, mediante el diálogo.

Estamos propugnando un sistema mediante el cual se le dé a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia doméstica una especial atención a efectos de evitar la deserción escolar.

Por otra parte, fomentamos que el Ministerio de Educación incluya en sus planes de formación docente, materias cuyos programas contengan el desarrollo de habilidades a efectos de transmitir al alumnado principios de igualdad entre hombres y mujeres y a detectar, signos de padecimiento de violencia doméstica.

Capítulo III
Publicidad y medios de comunicación

Procuramos, mediante estos artículos, que los medios de comunicación contribuyan a erradicar la violencia doméstica en todas sus formas y a realzar el respeto y la dignidad de la mujer.

Aún existiendo disposiciones sobre el contenido de las emisiones radiales y televisivas, contenidas en la ley federal de radiodifusión, pensamos que es necesario avanzar sobre las emisiones que de algún modo muestren a la sociedad un estereotipo negativo de la mujer en su rol dentro de la familia.

Por ello le damos herramientas jurídicas a instituciones que defienden en particular los intereses aquí tutelados, a fin de que puedan realizar un control sobre los contenidos en los medios. Creemos que el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia, y la Comisión Nacional Asesora para la Integridad de las Personas con Discapacidad, podrán realizar el control de manera efectiva.

El pedido de cese o rectificación de la pieza publicitaria, tiene como fin, que quien es responsable en la producción y que haya comprado un espacio en los medios de comunicación a fin de exhibirla, revea el contenido de la comunicación, al afectar los interés que aquí queremos proteger.

Por su parte el Comité de Federal de Radiodifusión debe expedirse fundadamente sobre el requerimiento que las instituciones anteriores le exijan, en un plazo prudencial que hemos fijado en 15 días. La contestación debe ser notificada al solicitante por medio fehaciente, dando cuenta de lo actuado y conforme a los medios legales con los que cuenta el COMFER.

Capítulo IV Ámbito de la Salud

En el ámbito de la salud, nuestro proyecto, incorpora planes y medidas de acción a fin de que los profesionales del área logren detectar signos de padecimiento de violencia doméstica entre sus pacientes, para lo cual se incluyen medidas de sensibilización y formación, tanto en los profesionales sanitarios en ejercicio como en los planes de formación universitaria de los mismos.

La formación del personal sanitario que procuramos tiene sus fundamentos en que, por su contacto y posibilidad de observación de sus pacientes, son quienes mejor pueden detectar signos de padecimiento de violencia. Al mismo tiempo, intentamos que la mujer, víctima de violencia, pueda acercarse a un centro de salud sin encontrarse con falta de capacitación o desviación ideológica por parte de quienes las asistan, configurando esto, una barrera en la posibilidad de lograr el amparo de la justicia y el efectivo ejercicio de sus derechos.

Las medidas adoptadas hasta aquí descriptas tienen su correlato en la obligación asumida por nuestro Estado de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres y de contrarrestar perjuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en

la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre o la mujer que legitiman o exacerban la violencia sobre la mujer o el grupo familiar.

Título II

Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

En este título nos proponemos por primera vez en la legislación argentina sobre violencia, darle un tratamiento específico a la "Violencia de Género", conceptualizada por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, como manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que constituyen una violación a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Nuestra legislación actual sobre violencia, intenta dar respuestas similares a problemáticas diferentes, no ha tenido en cuenta que la violencia que la mujer padece, es una violencia de género resultante de la acentuación de las relaciones históricas de desigualdad y distribución de poder que existe en nuestra sociedad entre hombres y mujeres.

Con la sanción de esta ley, estamos reconociendo la situación de vulnerabilidad de las mujeres y el hecho de que el factor de riesgo está dado por su pertenencia al género femenino. De allí que hemos incorporado un título con normativa específica tendiente a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

En miras a ello hemos reconocido y otorgado a la mujer víctima de violencia de género la posibilidad de acceder a toda la información necesaria tendiente a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos, así como la posibilidad de acceder a mecanismos eficientes de asistencia multidisciplinaria con el propósito de que sea asistida psicológica, sanitaria y jurídicamente tanto ella como su grupo familiar, brindarle contención de tipo social y otorgarle apoyo educativo en el desarrollo de habilidades en la resolución pacífica de conflictos.

Tomando en consideración que la mujer, en un alto porcentaje, posee obligaciones laborales o desarrolla alguna actividad lucrativa, hemos diseñado un programa por el cual la víctima, en el ejercicio de sus derechos, no se encuentre expuesta a perder el empleo o de configurarse un fracaso en su emprendimiento personal; situaciones que de evidenciarse, no conllevarían más que a un acrecentamiento del padecimiento ya sufrido.

A sabiendas de que muchas mujeres se encuentran desempleadas, hemos otorgado especial consideración a las mujeres víctimas de violencia de género en esta situación y en relación a la inscripción en los planes oficiales de inserción laboral.

Por su parte, hemos creado un Fondo de Asistencia Económica para las Víctimas de Violencia de Género que se encuentren en situación

de desempleo, a efectos de otorgarles una ayuda monetaria mensual; supeditando la accesibilidad a este beneficio a la radicación de la pertinente denuncia judicial cuyo objeto sea el tratamiento de la violencia de la que la destinataria fuere víctima y que, quien la pretenda haya procurado su inscripción en alguno de los planes existentes de inserción laboral.

Para lograr una incuestionable transparencia en la adjudicación de estas ayudas económicas se ha dispuesto que la tramitación para la obtención de las mismas, así como la acreditación de la existencia de los presupuestos exigidos se realicen en el mismo expediente judicial donde tramita la causa por violencia.

Título III Tutela Penal

La sanción y tutela penal como es sabido, no es la única solución ante el problema de la violencia doméstica, pero sin perjuicio de ello, juega un papel de vital importancia, como herramienta para desalentar conductas violentas.

Especial atención merece el condicionamiento del goce de la condena condicional a la obligación de cumplimentar con ciertas reglas de conducta que, aunque ya se encontraban tipificadas, era facultativa su elección por parte del juez:

- 1- Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas.
- 2- Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
- 3- Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.

Estas medidas apuntan directamente a intentar prevenir la reincidencia en el actor.

Por otro lado, siguiendo el principio penal por el que a mayor indefensión se debe brindar una mayor protección, traduciéndose esto en mayores sanciones, se eleva la pena de los delitos de lesión y coacción, junto a sus agravantes, siendo los mismos los mas típicos y habituales en el marco de la violencia doméstica.

Título IV Instituciones

A fin de que la intención del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica sea de implementación real y efectiva, hemos diseñado una red de instituciones simples pero coordinadas entre ellas y con las ya existentes de manera tal, que se encuentre garantizada la finalidad u objetivo de esta ley.

Se crea, en la órbita del Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos, el Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica, entre cuyas competencias estarán el desarrollo de políticas tendientes a la resolución de la violencia doméstica y de sus efectos, diseñar políticas asistenciales, diseñar e impulsar medidas de protección en forma conjunta con otros organismos del Estado con incumbencia en la materia y elaborar planes y proyectos tendientes a implementar una estrecha relación funcional y coordinada con los Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica.

Estos últimos también forman parte del diseño por esta ley elaborado, la creación de los mismos serán de cumplimiento efectivo por parte de cada provincia que adhiera a esta ley.

Los Centros de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica deberán contar con un plantel profesional mínimo normativamente estipulado y deberán tomarse como criterios de distribución y composición de los mismos, que toda la población tenga acceso a ellos, la densidad demográfica de la región e indicios estadísticos en relación a los casos de violencia detectados.

Como parte importante del diseño a implementar, hemos invitado a la provincias que adhieran a la presente a crear en el ámbito de sus Ministerios Públicos Fiscales u organismos análogos, La Unidad Provincial Judicial de la Mujer, la cual deberá funcionar coordinadamente con la Oficina de Asistencia a la Víctima y con los Centros de Prevención locales, teniendo como fin la recepción de denuncias y la tramitación de procesos originados por la comisión de delitos contra la mujer y la familia.

Del mismo modo, cada provincia deberá propender a la implementación en las comisarías de Unidades Especiales para Protección de la Mujer.

Creemos de vital importancia para la detección temprana de la violencia, que se añada al tratamiento y prevención, una institución denominada “unidad jurídica” que movilice y administre correctamente las herramientas jurídicas que se disponen para tal traumático momento.

La decisión de instalar esta unidad en los hospitales, remite a que es el primer lugar en donde es común detectar signos de violencia, maltratos y abusos. Por ello y encontrándose en un institución que cuenta con los elementos como para tratar el flagelo de la violencia de manera integral, nos parece de meridiana importancia el agregado de esta institución en este ámbito.

Creemos lograr conformar así, un esquema verdaderamente integral para el tratamiento de la violencia, al sumarse un abogado/a a la actividad que despliegan los médicos y psicólogos, asesorándolos y acompañándolos, para que las vicisitudes jurídicas, no sean un obstáculo para la ejercicio de la justicia.

Título V
Orbita Procesal
Legitimación activa:

Con la implementación de la ley propuesta se estaría otorgando legitimación activa a las siguientes personas:

- Damnificado directo
- Representantes legales, ministerio público, Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica y Centros de prevención, en caso de que los damnificados fueren niños, niñas, adolescentes, incapaces, ancianos o discapacitados.
- Personal de Centros asistenciales, sociales, educativos, profesionales de la salud y los funcionarios públicos en razón de su labor.

También hemos otorgado la potestad de denunciar a terceros que realicen denuncias de buena fe, en los Centros Locales, debiendo estos últimos radicarlas en el órgano jurisdiccional competente, corroborando previamente la idoneidad de las mismas.

Por ello instituimos la protección para resguardar la identidad de los terceros que de buena fe denuncien los hechos que conozcan. Esta medida permite que las personas con temor por los efectos que se desencadenen al denunciar, la realicen, al obtener mayor seguridad personal en resguardo de su identidad.

En cuanto a la protección que se le otorga a los funcionarios públicos por las denuncias que realicen, esta es de importancia, ya que pesa sobre ellos la obligación de denunciar, y que atento a que no pueda probarse en el proceso la violencia denunciada, estos no sean perseguidos.

La ley 24.573 de Mediación y Conciliación Obligatoria incorpora una instancia previa a la judicial, de mediación obligatoria. Estos métodos alternativos de resolución de conflictos, fueron incorporados en nombre de la celeridad y economía procesal, pero desconociendo que cuando se trata de violación a los Derechos Humanos, no hay mediación posible, ignorando la desigualdad de poderes que existe en las situaciones de violencia doméstica.

En un contexto de maltrato, de relaciones abusivas, de la imposición de poder, de miedos, pretender utilizar la mediación como resolución alternativa de conflictos provoca una notoria injusticia ya que es imposible arribar a un acuerdo entre las partes genuinamente consentido, además de que, debido a nuevas represalias, la mujer puede terminar accediendo a cualquier arreglo por desventajoso que sea, resultando altamente peligroso al someter a la mujer a nuevas situaciones de violencia.

Es dable resaltar, que las mujeres suelen verse presionadas, no sólo por los agresores sino también por el propio sistema judicial a acceder

a un avenimiento. Este avenimiento suele ser presentado como una instancia necesaria para preservar la unión de la familia y darle otra oportunidad al agresor a que se rehabilite; el ideal de la unión familiar suele prevalecer sobre el riesgo en el que se encuentra la mujer y sobre sus derechos a la integridad y a la salud.

Por ello, impulsamos una modificación terminológica y funcional a la actual "audiencia de conciliación", añadiendo la denominación "de Evaluación", en la cual el Juez y sus Auxiliares analizan la problemática y el grado de la misma, sin someter, obligatoriamente, a la parte damnificada a ningún acto que no acepte expresamente. Creemos que esta denominación y modalidad es más conducente y efectiva en el tratamiento de la violencia.

Esto por que debemos recordar que el Estado debe ser garante de los derechos individuales, y debe adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, en lugar de convertirlos en un foro de negociación privada de una relación asimétrica, donde impera la desigualdad de poder.

Utilizar los métodos de resolución alternativa de conflictos en materia civil y comercial, para los casos de violencia doméstica y de género, implica el desconocimiento de que ésta se trata de un problema social, y un problema de salud pública y Derechos Humanos.

Es por todo lo expuesto, que proponemos suprimir la instancia de mediación o conciliatoria hasta hoy obligatoria, modificando el inciso 2° del artículo 2 de la ley 24.573, incluyendo las causas sobre violencia doméstica entre las excepciones a la obligatoriedad de cumplimiento como presupuesto de acceso a la instancia judicial. Dejando la posibilidad de desarrollarse únicamente en los casos en que la parte damnificada lo solicite expresamente y ya dentro del marco del expediente judicial donde tramite la causa.

Medidas cautelares y/o autosatisfactivas:

La legislación actual que rige en materia de violencia familiar, propone una serie de medidas cautelares pero en forma limitada, nuestra ley viene a ampliarlas proponiendo además de las existentes, otras novedosas como ser:

- La prohibición al autor de acceso no solo al domicilio del damnificado, lugares de trabajo o estudio, sino también a todos aquellos lugares donde la víctima suele concurrir con habitualidad.
- Impedir la comunicación telefónica, electrónica, epistolar o de cualquier índole con la víctima y,
- Suspender las autorizaciones que el autor posea relativos a la tenencia, uso y portación de armas de fuego.

Sanciones:

La actual ley sobre Violencia Familiar, 24.417, no prevé sanciones ni medida alguna para los casos en que el agresor incumpla con las medidas precautorias dispuestas por el juez, así como para los casos en que el agresor incurra en inobservancias a las prescripciones

profesionales de índole terapéuticas, asistenciales, psicológicas o psiquiátricas tendientes a resolver el problema de la Violencia Doméstica.

Para el primer caso, mencionamos, a efectos de revigorizar su aplicación, el precepto legal contenido el Código Penal de la Nación para los supuestos de resistencia o desobediencia de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento o en virtud de una obligación legal, pero a sabiendas de que acudir al fuero penal para darle aplicación efectiva a este precepto suele ser complejo y dilatorio hemos implementado una nueva sanción consistente en la realización de labores o tareas comunitarias, con fundamento en que la Violencia Doméstica no es una cuestión privada sino que trasciende a la comunidad, en desmedro del interés público y es mediante esta sanción que de algún modo, el agresor aportaría una compensación a la comunidad.

En el segundo supuesto mencionado, hemos implementado la fórmula consistente en que toda vez que el agresor incurra en incumplimientos injustificados de prescripciones profesionales, el juez podrá imputar costas judiciales a su orden por los servicios profesionales puestos a su disposición e injustificadamente inutilizados.

Nuestra finalidad, al implementar estas nuevas sanciones, es evitar crear en las mujeres la sensación de vulnerabilidad e impunidad del agresor y de que el ámbito legal es de escasa ayuda para solucionar el problema que padece; sensaciones que traería como consecuencia la deserción del proceso y el descrédito a la realización de nuevas denuncias.

Creemos estar aportando una herramienta legislativa importante para enfrentar a la problemática de la Violencia Doméstica. Por esto y otros fundamentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Titulo VI

Políticas Públicas

Buscamos finalmente que la autoridad de aplicación promueva las actuaciones necesarias, para no dejar a las victimas sin una atención especializada en todo el país. Es de mucha importancia que territorialmente no queden espacios sin una atención preventiva ni posterior al hecho, que este ajustada a la gravedad de la violencia que estamos atacando.

Por ello la importancia de la coordinación en la elaboración de Planes para el tratamiento de la Violencia Domestica, hace a la funcionalidad del esquema institucional, en materia preventiva y punitiva del cual nos valemos para propugnar la efectividad de las medidas aquí propuestas.

La línea telefónica para la denuncia de los hechos de violencia, ha resultado de una notable utilidad. Prueba de ello, es que los estudios especializados demuestran que gracias a esta herramienta, ha podido trascender un mundo de encubrimiento. Es también una herramienta fundamental en el primer contacto con las personas y su terrible estado de violencia.

Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía. – Pedro Salvatori. – Teresita N. Quintela. – Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani. – Mirian B. Curletti. – Mabel L. Caparros. – Roxana I. Latorre. – Adriana Bortolozzi de Bogado. – Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque. – María E. Castro. – Graciela Y. Bar. – Mario R. Mera. – Roberto F. Ríos. – Marina R. Riofrío.

(IV)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1°.- Creación. Créase el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, destinado al monitoreo, recolección, producción y sistematización de datos e información sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres.

Artículo 2°.- Misión. El Observatorio tiene por misión la construcción de una instancia de observación permanente destinada al desarrollo de un sistema de información que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.

Artículo 3°.- Funciones. Son funciones del Observatorio de las Violencias contra las Mujeres:

- a. Recolectar, procesar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática sobre violencia contra las mujeres, con el fin de adoptar medidas para la construcción de políticas públicas tendientes a su prevención y erradicación.
- b. Promover la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos comparables, diacrónica y sincrónicamente, sobre violencia contra las mujeres y sus manifestaciones.
- c. Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución y las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia.

- d. Proveer el marco adecuado para el desarrollo de investigaciones y estudios sobre violencia contra las mujeres y sus manifestaciones, en tanto insumos a ser incorporados a los informes que el Estado Nacional deba elevar a los organismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
- e. Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones.
- f. Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del Observatorio de las Violencias contra las Mujeres, mediante una página web propia o vinculada al portal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía.
- g. Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren.
- h. Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas.
- i. Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, mesas redondas, seminarios, talleres, foros de discusión, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública.
- j. Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de iniciativas tendientes a prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres.
- k. Formular recomendaciones para mejorar los indicadores y los sistemas de información en materia de derechos humanos de las mujeres y, en particular, de violencia contra las mujeres, con perspectiva de género y en articulación con las jurisdicciones locales.
- l. Proponer medidas tendientes a mejorar el tratamiento de la violencia en los medios de comunicación, en particular de la violencia contra las mujeres.
- m. Articular las acciones del Observatorio de las Violencias contra las Mujeres con otros organismos de similares características a nivel nacional e internacional.
- n. Publicar un informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas, un diagnóstico sobre el desarrollo de las políticas adoptadas en la materia y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que correspondieren.

Artículo 5°.- Estructura. El Observatorio de las Violencias contra las Mujeres estará integrado por:

- a. Una persona quien ejercerá la Dirección del Observatorio, designada por la Presidencia de la Nación;
- b. Un equipo interdisciplinario, encargado de la recolección, producción y sistematización de datos sobre violencia contra las mujeres y el desarrollo de estudios e investigaciones en la materia; y
- c. Representantes, ad honorem, de organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, vinculados temáticamente a la misión del Observatorio de las Violencias contra las Mujeres.

Artículo 6°.- Atribuciones del/la Directora/a. Serán atribuciones del/de la Director/a del Observatorio de las Violencias contra las Mujeres:

- a. Representar al Observatorio en todos sus actos y ante los organismos públicos o privados, nacionales o internacionales que requieran su presencia;
- b. Adoptar las medidas de orden administrativo necesarias para el funcionamiento del Observatorio, pudiendo proponer, a estos efectos, su estructura interna, reglamento interno, constitución de su equipo interdisciplinario y organización en comisiones de trabajo;
- c. Solicitar a los organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales con competencia en la materia la colaboración o información que estime necesarias para el cumplimiento de su misión y objetivos; y
- d. Promover y coordinar la celebración de convenios interinstitucionales para el fortalecimiento de las instancias de investigación.

Artículo 7°.- Política de confidencialidad. En ningún caso se permitirán disposiciones administrativas en virtud de las cuales las mujeres víctimas de violencia deban inscribirse en registro especial alguno o cumplir algún requisito con fines de identificación.

Solamente para fines estadísticos y de investigación social, los organismos judiciales intervinientes deberán notificar al Observatorio de las Violencias contra las Mujeres las denuncias que se presenten, considerando características socio-demográficas de las víctimas, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados. Se deberá prever la confidencialidad de las actuaciones judiciales y proteger la privacidad e identidad de las mujeres víctimas.

Artículo 8°.- Participación en eventos. El Estado Nacional integrará al Observatorio de las Violencias contra las Mujeres en todos los eventos nacionales, regionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y que tengan como objetivo el estudio y análisis de la problemática de la violencia contra las mujeres y sus manifestaciones.

Artículo 9°.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo Nacional determinará las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 10°.- Reglamentación. La presente Ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de su promulgación.

Artículo 11.- Invitación a adherir. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley y a constituir sus propios Observatorios, los que trabajarán de manera articulada con el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres.

Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María C. Perceval.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En la lucha por erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, uno de los aspectos menos ponderados ha sido la necesidad de fortalecer los sistemas de recolección de datos y de elaboración de estudios e investigaciones en tanto insumos indispensables para el diseño de políticas públicas para su abordaje.

En este sentido, la creación de Observatorios obedece a una estrategia integral que permite establecer alianzas entre distintos actores sociales y políticos para el desarrollo de actividades que conduzcan, no sólo al fortalecimiento de la capacidad de análisis de la realidad, sino también para la construcción de herramientas indispensables para la intervención del Estado.

En Argentina no existen datos estadísticos ni estudios sistemáticos sobre violencia contra las mujeres. Esta escasez de investigaciones obstaculiza la implementación de políticas públicas y la realización de los análisis de impacto esenciales para reconocer los efectos y las consecuencias de las políticas y programas encaminados a prevenirla y erradicarla.

En este sentido, la propuesta para crear un Observatorio de las Violencias contra las Mujeres obedece a la necesidad de abordar la problemática de manera integral dado su carácter complejo y multifacético: contar con un sistema unificado de información permitirá reconocer las manifestaciones de la violencia; realizar diagnósticos sobre la situación y evolución; valorar los recursos y servicios de atención y su incidencia en la problemática; y, fundamentalmente, conocer la percepción de los actores sociales involucrados, particularmente de las mujeres.

El propósito del Observatorio es hacer de la información una herramienta útil para el monitoreo de las políticas públicas que se implementen en la materia, promoviendo conciencia social a través de la difusión permanente de los datos y de la construcción de un espacio de debate y participación ciudadana.

En materia de violencia contra las mujeres, desde distintas instancias regionales e internacionales se ha puesto de manifiesto la necesidad de concentrar la acción de los Estados en la evaluación del impacto de las leyes y las prácticas socioculturales desde una perspectiva de género; de recolectar datos desglosados por sexo y edad sobre todas las formas de violencia contra las mujeres; y de evaluar el impacto de las políticas y programas implementados, entre otras cuestiones.

Por ejemplo, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1993) insta a los Estados a aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Para este fin deberán “promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones”.

Asimismo, la Declaración establece que los Estados deberán “incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia contra la mujer y las medidas adoptadas para poner en práctica la presente Declaración” (artículo 4, incisos k y m)

Respecto de los informes, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1975), aprobada por Ley 23.179 de 1985 y con rango constitucional desde el '94, solicita a los Estados que indiquen en éstos aquellos factores y dificultades que afectan el cumplimiento de las disposiciones de la CEDAW, así como también aquellas medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas sus disposiciones (artículo 18)

A nivel regional, por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por Ley 24.632 de 1996, en cuanto a los deberes de los Estados, éstos convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para, entre otras cuestiones, “garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia

de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios”, y “promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia” (artículo 8, incisos h e i)

En cuanto a los informes, la Convención de Belem do Pará solicita a los Estados parte que, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados incluyan información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia, para asistir a las mujeres víctimas, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra las mujeres (artículo 10)

Finalmente, también la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995) aborda la problemática de la falta de registros y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres señalando que “la falta de suficientes estadísticas y datos desglosados por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la elaboración de programas y la vigilancia de los cambios. La documentación e investigación insuficientes de la violencia doméstica, el hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres y niñas, en privado y en público, incluso el lugar de trabajo, obstaculizan los esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas de intervención” (Plataforma de Acción; Capítulo IV Objetivos Estratégicos y Medidas; D. La violencia contra la mujer, párrafo 120)

Han inspirado este Proyecto de Ley, iniciativas no sólo referidas a la violencia contra las mujeres sino a la problemática abordada en un sentido más amplio: como forma de discriminación y violación de derechos humanos, como vulneración del principio de igualdad de oportunidades y trato, como manifestación de formas de racismo y xenofobia, como ataque a los principios democráticos. Son ejemplo de ellas, iniciativas tales como el Observatorio Regional de la Violencia de Género (Madrid, España); el Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Instituto Asturiano de la Mujer (Asturias, España); el European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia; el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa; el Observatorio de la Violencia de Género de la Unión Europea; entre otros.

La presente iniciativa se articula, asimismo, con el Proyecto de Ley que presentáramos en materia de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, donde –entre sus disposiciones– planteamos la necesidad de crear una instancia de monitoreo interinstitucional de la violencia contra las mujeres en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la finalidad de fomentar el desarrollo de investigaciones sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres; implementar acciones de seguimiento, diagnóstico y evaluación de las políticas que se implementen en la materia y elaborar propuestas de reformas

legislativas e institucionales; y difundir los resultados de los estudios e investigaciones.

Un Observatorio sociológico es una instancia de recolección sistemática de datos con el objetivo de ofrecer una fotografía de la realidad a la que refiere; una fotografía que cambia constantemente, ya que está sujeta a la incidencia de múltiples factores sociales, culturales, económicos y políticos, y en la que en la mayoría de las veces no aparecen reflejadas las mujeres.

En definitiva, el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres pretende ser una herramienta que facilite la labor de las personas con responsabilidades políticas al momento de adoptar decisiones, de los diferentes actores sociales para mejorar la articulación de sus acciones, y de los expertos para el desarrollo de programas en materia de prevención de las violencias contra las mujeres y de políticas que velen por conseguir la igualdad de oportunidades para todos y todas y el fortalecimiento del derecho de las mujeres para vivir una vida libre de violencias.

Por los motivos expuestos, solicito a los senadores y las senadoras acompañen la presente iniciativa.

María C. Perceval.

(V)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto implementar medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y brindar asistencia integral a las víctimas, desde un abordaje integral y multidisciplinario.

Artículo 2.- Definición. A los efectos de la presente Ley se entiende por violencia contra las mujeres todo acto u omisión tanto en el ámbito público como privado que, de manera directa o indirecta, tenga por objeto provocar un daño o sufrimiento físico, psíquico, sexual o patrimonial sobre cualquier mujer, a los efectos de intimidarla, castigarla o humillarla; de mantenerla dentro de los roles sexuales estereotipados; vulnerar su dignidad, el derecho a la libertad, a la autodeterminación sexual, a la integridad física, psíquica y sexual, a su seguridad personal; someterla a malos tratos, torturas o penas

cruelles, inhumanas o degradantes; o producirle daños a los bienes que integran su patrimonio o el de sus familiares.

Se encuentran incluidos en los actos u omisiones referidos los perpetrados por el Estado o sus agentes.

Quedan comprendidos los actos u omisiones:

- a) Perpetrados por el cónyuge o conviviente; ex cónyuge o ex conviviente; por el padre de un/a hijo/a en común; por ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos o afines; por quien tenga o haya tenido una relación de noviazgo;
- b) Perpetrados por curador; encargado de la educación o guarda; ministro de algún culto reconocido o no; y otras relaciones interpersonales; así como en el ámbito laboral, social y/o donde se desarrollen relaciones jerárquicas o que medie autoridad.
- c) Perpetrados por el Estado o sus agentes.

Artículo 3.- Principios de interpretación. Son principios rectores para la interpretación y aplicación de las disposiciones de la presente Ley los siguientes:

- a) El derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias y discriminaciones, tanto en el ámbito público como en el privado.
- b) El derecho a la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres.
- c) El derecho a una educación libre de patrones estereotipados de comportamiento y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
- d) La garantía del derecho a la seguridad económica para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as para facilitar su reintegración social.
- e) El derecho a un acceso rápido y efectivo a las instancias de denuncia y a los servicios de atención a las víctimas.
- f) Todos aquellos principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y EL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Artículo 4.- Derechos. Las víctimas de la violencia contra las mujeres tienen los siguientes derechos:

- a) Al respeto de su integridad física, psíquica y sexual;
- b) A recibir información sobre sus derechos y sobre los recursos y mecanismos para obtener la restitución de los derechos vulnerados;
- c) A contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita de manera integral e interdisciplinaria;
- d) A prestar testimonio en condiciones especiales de protección, y a la protección frente a toda posible o efectiva represalia;

- e) A ser informada de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de las consecuencias del proceso;
- f) A ser oída y que se tenga en cuenta su opinión en todas las etapas del proceso;
- g) A que se proteja su intimidad;
- h) A oponerse a la realización de peritajes sobre su cuerpo o, en caso de consentirlos, a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;
- i) A iniciar procedimientos para el reconocimiento de sus derechos y obtención de indemnización;
- j) En el caso de niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados, se deberá velar porque los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales, prohibiéndose, sin excepción, los careos con el agresor o testigos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán en ningún caso resultar restrictivas de sus derechos y garantías, ni implicar privación de la libertad. Se procurará, en la medida de lo posible, la posibilidad de reintegración de la niña o adolescente a su familia nuclear o ampliada y/o a su comunidad.

Artículo 5.- Derecho a la información. A los fines de la presente Ley, el derecho a la información implica que:

- a) Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a recibir información plena y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios que dispongan los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Dicha información comprenderá, entre otras, las medidas previstas en esta Ley; la información sobre sus derechos; y sobre los recursos de atención y asistencia integral previstos y lugares de prestación de los mismos.
- b) Se garantizará que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en un formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de señas, sistema Braille, u otras modalidades u opciones de comunicación.

Artículo 6.- Derecho a la asistencia integral. A los fines de la presente Ley, el derecho a la asistencia integral comprende:

- a) El derecho al acceso a servicios de atención psicológica, médica y jurídica, de emergencia y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, responderá a los principios de actuación urgente, atención permanente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
- b) La acción coordinada y en colaboración de estos servicios con las fuerzas policiales, los funcionarios judiciales, los servicios sanitarios y educativos y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas.

c) El derecho de los/as hijos/as de las mujeres víctimas a la asistencia integral y al acceso a estos servicios. A estos efectos, deben contar con personal específicamente formado en derechos humanos de la infancia para atender a los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 7.- Derecho a la asistencia jurídica. A los fines de la presente Ley, el derecho a la asistencia integral implica que:

a) Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por profesional especializado en todos los procesos que tengan causa directa o indirecta en la violencia. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima.

b) Se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia que lo soliciten.

c) Los Colegios de Abogados tenderán a adoptar las medidas necesarias para la designación urgente de un letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia contra las mujeres.

Artículo 8.- Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ninguna instancia y bajo ninguna circunstancia o motivo será permitido la creación de registros especiales de víctimas de violencia contra las mujeres.

Los funcionarios intervinientes deberán asegurar reserva en relación con la identidad de las víctimas.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 9.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán con relación a los hechos mencionados en el Artículo 2, que se lleven a cabo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de ordenar medidas preventivas urgentes, sin perjuicio de las demás acciones que puedan corresponder según la legislación general.

Artículo 10.- Legitimación. La denuncia podrá ser efectuada por:

a) la mujer víctima de violencia, cualquiera sea su edad.

b) la niña o la adolescente quien, directamente o a través de sus representantes legales, puede poner en conocimiento de los hechos al juez, y/o a la autoridad pública competente.

c) cualquier persona, si la persona afectada fuese niña o adolescente, discapacitada o una persona mayor que por su condición física o psíquica no pudiese formularla.

La obligación de efectuar la denuncia se extiende a los profesionales de la salud, a quienes presten servicios asistenciales, sociales y educativos públicos o privados, y a todo funcionario público que tome conocimiento de los hechos en ocasión o ejercicio de sus funciones, siempre que no constituya un delito.

Para el caso de que un tercero o superior jerárquico impidiera, obstaculizara, perturbare, amenazare y/o molestar al obligado/a a realizar la denuncia, siempre que no constituya un delito contemplado en el Código Penal, se le impondrá una sanción económica, a determinar por la reglamentación de la presente ley.

Artículo 11.- Intervención. La denuncia puede efectuarse ante cualquier juez de cualquier fuero, quien deberá actuar dentro de las veinticuatro 24 horas de tomar conocimiento de los hechos, pudiendo adoptar algunas de las medidas del artículo 14 de la presente Ley, debiendo remitir las actuaciones al juez competente dentro de las siguientes 24 horas.

Artículo 12.- Juez competente. Será autoridad judicial competente para entender en las actuaciones definitivas, los jueces con competencia asuntos de familia.

Cuando los hechos objeto de la denuncia puedan constituir delito, el funcionario que haya prevenido la pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente en la materia.

Artículo 13.- Obligación de informar. Los funcionarios policiales, judiciales o sanitarios a los cuales acuda la víctima de violencia tienen la obligación de informarle sobre los recursos institucionales, legales y sociales existentes para el reconocimiento de sus derechos vulnerados.

Artículo 14.- Medidas preventivas urgentes. Al tomar conocimiento de los actos u omisiones contemplados en el artículo 2 de la presente Ley y perpetrados por las personas enunciadas en los incisos a) y b) del mencionado artículo, el juez podrá ordenar, dentro de las 24 horas, las siguientes medidas preventivas urgentes:

- a) Ordenar la exclusión del presunto autor de la agresión de la vivienda donde habita la víctima si halla que la continuación de la convivencia significa un riesgo para su integridad física, psíquica y sexual o la de alguno/a de sus familiares.
- b) Prohibir el acceso del presunto autor de la agresión al domicilio de la víctima, como así también a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, y/o del progenitor o representante legal cuando la víctima fuere niña o adolescente.
- c) Fijar al presunto agresor un perímetro de exclusión para circular o permanecer en determinada zona cercana al domicilio, lugar de trabajo, estudio o esparcimiento de la víctima.
- d) Prohibir al agresor la tenencia y compra de armas y ordenar la incautación de las que estuvieren en su poder.
- e) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, previa exclusión del agresor de la vivienda.
- f) Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante si ésta se ha visto privada de los mismos por los hechos de violencia.

- g) En caso de mediar vínculo matrimonial entre el agresor y la víctima, disponer el inventario de los bienes de la sociedad conyugal y de los propios de la afectada.
- h) Fijar en forma provisoria la cuota alimentaria y el régimen de tenencia y visitas de conformidad con la legislación vigente.
- i) En el caso de que la víctima fuere niña o adolescente, podrán aplicarse las medidas de protección excepcional de derechos dispuestas por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
- j) Ordenar toda otra medida prevista por la legislación vigente, aún las autosatisfactivas, necesaria para garantizar la seguridad personal de la víctima y de sus hijos/as, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de coacción o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la o las víctimas.

El juez podrá dictar más de una medida a la vez. El juez determinará la duración de las medidas, de acuerdo a las circunstancias del caso, debiendo determinar un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado. Podrá requerir la intervención de la fuerza pública a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.

Artículo 15.- Medidas preventivas urgentes ante actos u omisiones perpetrados por agentes del Estado. Al tomar conocimiento de los actos u omisiones perpetrados por agentes del Estado y contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, el juez podrá ordenar, dentro de las 24 horas, las siguientes medidas preventivas urgentes:

- a) Informar, en forma fehaciente, el acto de violencia al organismo o institución en el cual se llevaba a cabo el o los actos de violencia a fin de resguardar la situación laboral, educativa y/o social de la víctima.
- b) Ordenar la exclusión del presunto autor de la agresión del lugar en donde se llevaba a cabo el o los actos de violencia (lugar de trabajo, escuela, esparcimiento)
- c) Prohibir el acceso del presunto autor de la agresión al domicilio de la víctima, a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, y/o del progenitor o representante legal cuando la víctima fuere niña o adolescente.
- d) Fijar al presunto agresor un perímetro de exclusión para circular o permanecer en determinada zona cercana al domicilio, lugar de trabajo, estudio o esparcimiento de la víctima.
- e) Prohibir al agresor la tenencia y compra de armas y ordenar la incautación de las que estuvieren en su poder.
- f) Ordenar el reintegro al establecimiento en el cual se hubiere perpetrado la agresión a petición de quien ha debido ausentarse del mismo por razones de seguridad personal, previa exclusión del agresor del mismo.
- g) Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante si ésta se ha visto privada de los mismos por los hechos de violencia.
- h) En el caso de que la víctima fuere niña o adolescente, podrán aplicarse las medidas de protección excepcional de derechos

dispuestas por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

i) Ordenar toda otra medida prevista por la legislación vigente, aún las autosatisfactivas, necesaria para garantizar la seguridad personal de la víctima y de sus hijos/as, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de coacción o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la o las víctimas.

El juez podrá dictar más de una medida a la vez. El juez determinará la duración de las medidas, de acuerdo a las circunstancias del caso, debiendo determinar un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado. Podrá requerir la intervención de la fuerza pública a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.

Artículo 16.- Comunicación de las medidas preventivas urgentes. A los fines de asegurar la eficacia del cumplimiento de las medidas preventivas urgentes y a pedido de parte, el juez podrá ordenar se comuniquen las medidas decretadas a las instituciones y/u organismos públicos o privados a los que se hubiere dado intervención en el proceso, como así también a aquellos ámbitos determinados por la aplicación de las medidas previstas en el artículo 14 de la presente Ley.

Artículo 17.- Audiencia. El juez fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de cuarenta y ocho (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 14, o si no se adoptara ninguna de ellas, de conocer los actos u omisiones.

El presunto autor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.

En dicha audiencia el juez escuchará a las partes por separado y resolverá sobre las medidas ordenadas manteniéndolas, modificándolas o adoptando aquellas que estime pertinentes.

Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente, se deberá velar porque los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales, prohibiéndose, sin excepción, los careos con el agresor o testigos. A tales efectos, les serán aplicables las disposiciones de los artículos 250 bis y 250 ter del Código Procesal de la Nación.

Artículo 18.- Diagnóstico de situación. El juez deberá requerir un diagnóstico de situación a un equipo interdisciplinario formado con perspectiva de género y derechos humanos para determinar los daños físicos, psíquicos, sexuales y/o patrimoniales sufridos por la víctima y el contexto en que éstos ocurrieron.

Dicho informe será remitido al juez en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas, prolongar las existentes o cesar alguna de las adoptadas.

El juez también podrá considerar otros informes producidos por profesionales o instituciones públicas o privadas idóneas en el abordaje de la violencia contra las mujeres que acompañen la presentación de los hechos de violencia contemplados en la presente Ley. Las partes podrán proponer otros informes técnicos.

Artículo 19.- Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas o la reiteración de los hechos de violencia, el juez podrá evaluar la conveniencia de modificar las medidas preventivas ordenadas, pudiendo ampliar las impuestas u ordenar otras.

Artículo 20.- Seguimiento de las actuaciones. Todas las medidas preventivas deben ser ordenadas por un tiempo razonable, pudiendo en los casos mencionados del artículo anterior, ampliar su duración.

Artículo 21.- Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente Ley estarán exentas del pago de tasas depósitos y de cualquier otro impuesto.

Artículo 22.- Normas supletorias. En todo lo no previsto en las disposiciones de la presente Ley, y en cuanto sea compatible con ella, se aplicarán supletoriamente las normas del proceso sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

TÍTULO III DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

CAPÍTULO I OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA

Artículo 23.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente Ley el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el que deberá diseñar e implementar una Política Pública en materia de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en articulación con otros Ministerios, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia.

Artículo 24.- Objetivos. La Política Pública en materia de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres tendrá los siguientes objetivos:

- a) Promover la articulación interinstitucional entre organismos públicos y privados a los fines de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y proteger y promover sus derechos humanos.
- b) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección y asistencia de las mujeres víctimas de violencia y el reconocimiento de sus derechos;
- c) Asegurar el acceso de las víctimas a servicios de asistencia médica, psicológica, social y económica integrales y gratuitos;
- d) Promover la creación de ámbitos destinados a garantizar la seguridad personal y la asistencia de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas/os;
- e) Elaborar protocolos de trabajo y asistencia interinstitucionales para la implementación de acciones destinadas a la asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos/as;

- f) Garantizar a las mujeres que lo requieran asistencia jurídica gratuita de manera directa o a través de convenios con Colegios de Abogados y/o instituciones académicas que acrediten idoneidad y experiencia en la materia;
- g) Organizar capacitaciones y campañas de sensibilización a los funcionarios públicos competentes en la materia, en particular a fuerzas policiales y de seguridad y funcionarios judiciales, sobre la problemática, su prevención, abordaje y asistencia integral a las víctimas, con perspectiva de género y de derechos humanos. La capacitación estará a cargo de profesionales y/o instituciones que acrediten idoneidad y experiencia en la materia;
- h) Promover medidas tendientes a garantizar la protección del derecho laboral de aquellas trabajadoras víctimas de violencia;
- i) Diseñar medidas tendientes a brindar asistencia económica a aquellas mujeres víctimas de violencia que no cuenten con recursos propios de subsistencia.
- j) Implementar una línea telefónica gratuita destinada a receptar denuncias y brindar asesoramiento sobre los recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a sus víctimas;
- k) Elaborar programas y campañas de concientización pública destinadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia contra las mujeres, difundir medidas preventivas e informar sobre los recursos existentes para la asistencia integral a las víctimas;
- l) El fortalecimiento de las medidas de sensibilización ciudadana para la prevención de la violencia contra las mujeres.
- m) Promover la realización de estudios e investigaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre violencia contra las mujeres, y su difusión.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

Artículo 25.- Obligaciones. Los organismos gubernamentales con competencia en la materia adoptarán todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, mediante la plena aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Adoptarán, en el ámbito de su competencia, todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y modificar las conductas y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad entre los géneros y en funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres.

Artículo 26.- Obligaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deberá:

- a) Coordinar los programas de prevención de la violencia contra las mujeres y de asistencia a sus víctimas;
- b) Participar en el diseño de los planes de enseñanza y capacitación sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres destinados a los/as funcionarios/as pertenecientes a la administración de justicia;
- c) Diseñar, conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Nación, los programas de capacitación e información sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres destinados a los/as profesionales y funcionarios/as que implementan los servicios de asistencia médica y psicológica a las víctimas de violencia y sus familiares;
- d) Promover la creación e implementación de ámbitos para el albergue y la asistencia integral para mujeres víctimas de violencia en las distintas jurisdicciones;
- e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres víctimas de violencia;
- f) Organizar, conjuntamente con la Secretaría de Medios de Comunicación y el Ministerio de Educación de la Nación, campañas de educación y sensibilización ciudadana para prevenir la violencia contra las mujeres;
- g) Promover la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones académicas con experiencia en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

A los fines de la presente Ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación celebrará los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o provinciales.

Artículo 27.- Obligaciones del Ministerio de Educación de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, el Ministerio de Educación de la Nación, en articulación con el Consejo Federal de Educación, deberá:

- a) Promover la modificación de los planes de estudio, programas educativos, métodos de enseñanza y normas educativas para promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, contribuir a la eliminación de criterios discriminatorios, y brindar herramientas para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos;
- b) Promover la revisión y actualización de los libros de textos y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, y para que fomenten la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones y la idea de corresponsabilidad y coparticipación en la construcción de la sociedad que integran;
- c) Adoptar todas las medidas necesarias para que en los planes de formación del personal docente se incluya formación específica en materia de detección precoz de la violencia contra las mujeres; y
- d) Las universidades asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia contra las mujeres.

e) Adoptar todas aquellas medidas necesarias para desarrollar en el alumnado la capacidad para analizar y valorar críticamente las desigualdades entre los sexos y fomentar la consecución de la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres.

f) Adoptar medidas necesarias para prever la escolarización inmediata de las niñas y adolescentes que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia.

A los fines de la presente Ley, el Ministerio de Educación de la Nación celebrará los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o provinciales.

Artículo 28.- Obligaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, el Ministerio de Salud de la Nación, en articulación con el Consejo Federal de Salud, deberá:

a) implementar protocolos de asistencia interinstitucionales para la atención y asistencia de las mujeres víctimas de violencia, resguardando su intimidad, previniendo su revictimización y promoviendo una práctica médica no sexista;

b) implementar programas de sensibilización y formación continuada del personal médico-sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz e impulsar la asistencia integral de la mujer víctima de violencia;

c) promover la incorporación en las currículas educativas de las carreras de grado y de posgrado, y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias, contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, y la asistencia integral a las víctimas de violencia; y

d) promover la incorporación de las prestaciones especializadas en el Programa Médico Obligatorio y en los alcances de las prácticas médicas y farmacológicas.

A los fines de la presente Ley, el Ministerio de Salud de la Nación celebrará los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o provinciales.

Artículo 29.- Obligaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, deberá:

a) Crear mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las mujeres denuncien los actos de violencia cometidos contra ellas en condiciones de seguridad y confidencialidad.

b) Promover la investigación, recoger datos y elaborar estadísticas relacionadas con las distintas formas de violencia contra las mujeres.

c) Desarrollar y promover en las distintas jurisdicciones, en articulación con la instancia de monitoreo interinstitucional que determine la autoridad de aplicación de la presente Ley, el relevamiento de datos y registros estadísticos;

- d) Celebrar convenios con Colegios de Abogados, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales a los fines de garantizar el asesoramiento y patrocinio gratuito y el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia; y
- e) Diseñar, con la participación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los planes de enseñanza y capacitación sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres destinados a los/as funcionarios/as pertenecientes a la administración de justicia.

Artículo 30.- Obligaciones del Ministerio del Interior de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, el Ministerio del Interior de la Nación, deberá:

- a) brindar capacitaciones al personal policial y de fuerzas de seguridad en materia de prevención de la violencia y asistencia a las víctimas, con perspectiva de género y derechos humanos; y
 - b) elaborar protocolos de asistencia policial que promuevan la atención de la víctima que acude a realizar la denuncia en un marco de respeto por sus derechos humanos y evitando su revictimización.
- A los fines de la presente Ley, el Ministerio del Interior de la Nación celebrará los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o provinciales.

Artículo 31.- Obligaciones de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación, deberá:

- a) impulsar campañas de información y sensibilización ciudadana con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres. Las mismas deberán ser accesibles a las personas con discapacidad;
- b) velar porque los medios audiovisuales aseguren un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, con especial atención en la erradicación de conductas discriminatorias y favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres;
- c) adoptar las medidas necesarias para despertar la conciencia social sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la promoción de imágenes no estereotipadas de mujeres y varones y en la eliminación de patrones de conducta generadores de violencia;
- d) elaborar directrices y códigos de ética para la difusión de imágenes e informaciones que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones; y
- e) velar porque la difusión de información relativa a violencia contra las mujeres se garantice en el marco del respeto por los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Artículo 32.- Instancia de monitoreo interinstitucional. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación promoverá la creación de una instancia de monitoreo interinstitucional de la violencia contra las mujeres.

La misma deberá:

- a) fomentar el desarrollo de investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;
- b) implementar acciones de seguimiento, diagnóstico y evaluación de las políticas que se implementen en la materia y elaborar propuestas de reformas legislativas e institucionales; y
- c) difundir los resultados de los estudios e investigaciones.
- d) Articular acciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público con fines estadísticos y de investigación social.

TÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

Artículo 33.- Vigencia de la Ley 24.417. En aquellos casos de violencia familiar no previstos en las disposiciones de la presente Ley, será de aplicación la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar.

Artículo 34.- Presupuesto. El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 35.- Reglamentación. La presente Ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de su promulgación.

Artículo 36.- Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María C. Perceval.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La violencia de género, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en forma desproporcionada, es uno de los problemas de desarrollo y derechos humanos más graves que enfrentan los países del mundo. Es una de las violaciones a sus derechos humanos que mayor visibilidad ha alcanzado en las últimas dos décadas, fundamentalmente producto del trabajo y resultado de la demanda de los movimientos de mujeres.

La violencia de género no sólo representa un costo humano invaluable para las mujeres y sus familias, sino además un costo económico y social para el país, y por cierto un obstáculo para las democracias, en tanto afecta la calidad de vida de las mujeres, limitando su pleno desarrollo, y dificultando su participación social y contribución a los procesos democráticos en igualdad de condiciones con los varones (Luz Rioseco Ortega; Buenas prácticas para la erradicación de la

violencia en la región de América Latina y el Caribe; Serie Mujer y Desarrollo; CEPAL; 2005)

El paulatino reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres forma parte de un “proceso de especificación creciente de derechos”, producto de la cada vez mayor comprensión y aceptación de que hay grupos de la sociedad que por sus necesidades y por la especificidad de las violaciones a sus derechos no les es suficiente la sola protección general que se brinda a todos los seres humanos y requieren, por lo tanto, de protecciones diferentes y específicas (Rioseco Ortega, 2005)

Es así como a la par de la progresiva visibilización de la violencia contra las mujeres en tanto violación a sus derechos humanos, los países de la Región han suscrito significativos compromisos internacionales y regionales, que incluyen propuestas y lineamientos básicos para incorporar en el diseño de sus políticas públicas y legislativas medidas tendientes a mejorar la condición social de las mujeres. Ejemplo de ello han sido los avances introducidos por la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena, 1993), por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994), por el Programa de Acción para las Mujeres de América Latina y el Caribe (Mar del Plata, 1994) y por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y su Plataforma de Acción Mundial (Beijing, 1995), entre otros.

Asimismo, el marco legal establecido primero por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), aprobada por Ley 23.179 de 1985 y con rango constitucional desde el '94 –y después con mucha mayor especificidad- por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994), aprobada por Ley 24.632 de 1996, obliga a los Estados a implementar leyes y políticas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, se observan insuficiencias para concretizar decididamente los principios y derechos contenidos en dichos instrumentos internacionales. Por ejemplo, no todas las legislaciones nacionales que promueven medidas contra la violencia doméstica o intrafamiliar se han adecuado a la Convención de Belem do Pará ni se aplican e interpretan acorde con la conceptualización y las obligaciones que éste instrumento establece (Luz Rioseco Ortega; Buenas prácticas para la erradicación de la violencia en la región de América Latina y el Caribe; Serie Mujer y Desarrollo; CEPAL; 2005)

Asimismo, han surgido obstáculos y limitaciones inherentes al problema –complejo, de origen cultural y multicausal- y resistencias al cambio de sectores tradicionalistas que no reconocen la violencia y la discriminación contra las mujeres como constitutiva de una violación de sus derechos humanos. Tal como señala Rioseco Ortega, “existen dificultades para dimensionar su gravedad y para entenderlo además, como un problema que requiere ser abordado en forma conjunta por

Estado y la sociedad civil como requisito de desarrollo democrático del país, vale decir, con la participación activa de la comunidad y sus organizaciones”. De la misma manera, se hace necesario responder a nuevos desafíos, “como lo es el abordaje de la violencia desde una perspectiva más amplia e integradora en dirección a generar conciencia en la población y sus instituciones sobre los alcances de la violencia sexual, psicológica y económica, que se encuentran aún menos visibles que la violencia física” (Luz Rioseco Ortega; Op. Cit.; Págs. 10 y 11)

De la misma manera, el proceso de reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos también ha debido sortear las resistencias a la comprensión de este problema como propio de la responsabilidad de los Estados, “en una mirada que sólo alcanzaba a ver una leve o dudosa culpabilidad de los agresores directos y no todo aquello que los Estados hacen o dejan de hacer para poner fin a esta violencia y para proteger a las víctimas” (Luz Rioseco Ortega; Op. Cit.; Pág. 14)

Al respecto, señala Rioseco Ortega, por un tiempo debieron idearse estrategias para poder presentar casos y visibilizar el problema en instancias internacionales. Una de estas estrategias, quizás la que tuvo mayor impacto jurídico, fue la utilización de la jurisprudencia del Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras que amplió el concepto de responsabilidad de los Estados desde la sola acción a la omisión, con lo cual un Estado no sólo es responsable por lo que hacen sus agentes, sino también por lo que no hacen (Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH; Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras; Sentencia de 29/07/88)

En este sentido, la sentencia señaló que “todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención” (CIDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras; Sentencia de 29/07/88, 164)

A la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos la primera obligación asumida por los Estados es la de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos; la segunda obligación es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. “Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso,

la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”. A lo que agrega que “la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (CIDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras; Sentencia de 29/07/88, 166 y 167)

En materia de jurisprudencia internacional, también podemos citar el Caso María da Penha contra Brasil, primer caso que utiliza como fundamentos la Convención de Belem do Pará ante un caso de violencia contra las mujeres.

María Da Penha denuncia la tolerancia del Estado brasileiro por no haber tomado por más de quince años medidas efectivas necesarias para procesar y penar al agresor (el ex marido), pese a las denuncias que ésta había efectuado. La Comisión señaló que “la impunidad que ha gozado y aún goza el agresor y ex esposo de la señora Fernandes es contraria a la obligación internacional voluntariamente adquirida por parte del Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará. La falta de juzgamiento y condena del responsable en estas circunstancias constituye un acto de tolerancia por parte del Estado de la violencia que Maria da Penha sufrió, y esa omisión de los tribunales de justicia brasileños agrava las consecuencias directas de las agresiones”. A lo que agrega, “esa tolerancia por los órganos del Estado no es exclusiva de este caso, sino una pauta sistemática. Es una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la mujer” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso María Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, 16 de abril de 2001, 55)

“En este caso emblemático de muchos otros, la ineficacia judicial, la impunidad y la imposibilidad de obtener una reparación por la víctima establece una muestra de la falta de compromiso para reaccionar adecuadamente frente a la violencia doméstica. El artículo 7 de la Convención de Belem do Pará parece ser una lista de los compromisos que el Estado brasileño no ha cumplido aún en cuanto a este tipo de casos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso María Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, 16 de abril de 2001, 57)

Por lo expuesto, la Comisión consideró que se daban las condiciones de violencia doméstica y de tolerancia por el Estado definidas en la Convención de Belem do Pará y que existía responsabilidad del Estado por la falta de cumplimiento a sus deberes establecidos en su artículo 7 en relación a los derechos por ella protegidos, entre ellos, a una vida libre de violencia, a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral y su seguridad personal, su dignidad personal, igual protección ante la ley y de la ley; y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que

violen sus derechos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso María Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, 16 de abril de 2001, 57 y 58)

Por estos motivos concluyó, entre otras cuestiones, señalando “que el Estado ha violado los derechos y el cumplimiento de sus deberes según el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la señora Fernandes; y en conexión con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y en su relación con el artículo 1 de la Convención, por sus propios actos omisivos y tolerantes de la violación inflingida” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso María Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, 16 de abril de 2001, 60.4)

A más de una década de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) es evidente que han habido notables avances para las mujeres: una mayor presencia en escaños parlamentarios y en los poderes ejecutivos; eliminación de algunas diferencias de género en la educación; mayor presencia en el mercado laboral, entre otros, cambios en la vida de las mujeres que están estrechamente vinculados a transformaciones socioculturales que acompañan al desarrollo económico de las sociedades, pero que no son simplemente consecuencia del crecimiento de la economía.

Sin embargo, estos avances deben ser ponderados a la luz de persistentes desigualdades por motivos de género y de un contexto económico y político que vulnera sus derechos humanos.

Es por ello que nos encontramos ante el gran desafío de sortear múltiples obstáculos que impiden la plena igualdad entre varones y mujeres. Y, de la misma manera, que impiden la plena implementación e interpretación de las disposiciones, en este caso, de la Convención de Belem do Pará.

El desafío es afrontar la violencia contra las mujeres como un tema de políticas públicas, con perspectiva de género y de derechos humanos. Definirla como problema de políticas públicas es la base para identificar la capacidad que tienen los distintos instrumentos de políticas para enfrentarla. Implica también abordar la violencia contra las mujeres como un fenómeno independiente y distinto de otras manifestaciones de la violencia familiar, identificando los factores sociales, culturales, políticos, económicos e institucionales que inciden en ella.

Desde mediados de los '90, la Convención de Belem do Pará interpela a los Estados de la Región a implementar políticas para erradicar, prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. La misma reafirma la idea de que la violencia contra las mujeres no puede ser considerada ni afrontada como una expresión más de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, “esto tampoco se ha reflejado en la mayoría de las políticas públicas ni legislativas de los países de la región, en que la aproximación sigue siendo a la violencia en la familia.

Esto tiene importantes repercusiones ideológicas al momento de diseñar políticas o programas y de optar por una u otra forma y metodología de intervención, como también al consagrar o aplicar o no mecanismos como la conciliación o la mediación. A juicio de la gran mayoría de las entrevistadas, de los informes y de la bibliografía revisada, este es uno de los obstaculizadores más potentes para avances más rápidos” (Luz Rioseco Ortega; Op. Cit.; Pág. 56)

Las leyes y políticas sobre violencia contra las mujeres deben constituir el referente para el desarrollo de nuevas prácticas institucionales que incorporen visiones distintas de las mujeres y de la especificidad de las violaciones a sus derechos humanos, respetando y creando condiciones para su efectivo ejercicio.

El enfoque de derechos humanos en las políticas y leyes tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres implica considerar que sus efectividad depende, fundamentalmente, de la incorporación de medidas centradas en la defensa de los derechos de las víctimas, y de las mujeres en general, a una vida libre de violencias; y del reconocimiento de la autonomía de las mujeres y de sus derechos al ejercicio de una ciudadanía plena y, por lo tanto, de sus necesidades e intereses específicos. Asimismo, la promoción de los derechos humanos de las mujeres requiere de procesos de transformación de las distintas instituciones y del sistema de valores y creencias, a fin de erradicar las formas en que la violencia contra las mujeres se reafirma y persiste. Además, las prácticas institucionales deben involucrar un proceso de empoderamiento y fomentar la participación activa de las mujeres como actores en las decisiones y acciones que las atañen, y no como meras receptoras de los servicios y de las intervenciones institucionales (Modelo de Leyes y Políticas sobre Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres; Unidad de Género y Salud; Organización Panamericana de la Salud; 2004)

Por todo lo expuesto proponemos la presente iniciativa, que tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y brindar asistencia integral a sus víctimas, desde un abordaje integral y multidisciplinario.

El proyecto de ley se encuentra organizado en cuatro Títulos. El primero define las Disposiciones Generales (conceptos, sujetos de aplicación y principios de interpretación)

En un segundo Título –organizado en dos capítulos- se explicitan los derechos de las mujeres víctimas de violencia (derecho a la información, a la asistencia integral, a la asistencia jurídica y a la privacidad) y los procedimientos que las autoridades administrativas y judiciales deben llevar adelante para el efectivo reconocimiento de dichos derechos. También se consideran las medidas preventivas que – ante el conocimiento de actos u omisiones violatorios de los derechos de las mujeres- el juez podrá ordenar, tanto en el ámbito público como privado, con el objeto de proteger a las víctimas.

En un tercer Título –también organizado en dos capítulos- se definen los objetivos generales de una Política Pública en materia de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y las obligaciones de los organismos gubernamentales, quienes deberán adoptar todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, mediante la plena aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como adoptar –en el ámbito de su competencia-, todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y modificar las conductas y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad entre los géneros y en funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres.

En un cuarto Título se definen las Disposiciones Finales de la Ley.

Han sido antecedentes para la elaboración de este proyecto, la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de España; el Anteproyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres en el Ámbito Familiar y las Relaciones Interpersonales del Movimiento de Mujeres de Córdoba; y el Modelo de Leyes y Políticas sobre Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres elaborado por la Unidad de Género y Salud de la Organización Panamericana de la Salud (2004)

Para avanzar en la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres es necesaria la búsqueda de consensos y el compromiso de los distintos actores vinculados; mejorar la legislación; invertir decididamente en prevención; crear centros de asistencia integral, fortaleciendo las instituciones que vienen trabajando en esta línea y aprender de aquellas que tienen experiencia y metodologías de intervención validadas en el tiempo. Se hace necesario a su vez, impulsar la creación de redes sociales con la participación activa de la sociedad civil y de los gobiernos locales, y dar continuidad a los programas de capacitación de los/as funcionarios/as públicos, judiciales y policiales, como así también a los/as agentes comunitarios, a la vez que iniciar y/o reforzar la inserción del tema en las currículas de todos los niveles de las carreras profesionales pertinentes y de la enseñanza escolar.

La complejidad del problema y su magnitud requiere de abordajes desde una perspectiva que vincule la existencia de este fenómeno socio-cultural y valórico, la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía y la profundización de la democracia. “Para avanzar hacia una sociedad más democrática, tolerante, equitativa y no discriminatoria de las mujeres (...) importa que cada organización en sus intervenciones específicas, como en asociatividad con otras, potencien su rol como actores claves en el proceso de construcción de

una sociedad menos violenta y más igualitaria” (Luz Rioseco Ortega; Op. Cit.; Pág. 11)

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Ley.

María C. Perceval.-

(VI)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1 - El objeto de la presente ley es garantizar a las mujeres la plena vigencia de lo establecido en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer conforme al artículo 75, inciso 22 goza de rango constitucional para el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías en el marco de la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres.-

Art. 2 – Es obligación de los poderes e instituciones del Estado velar para que las mujeres no sufran discriminación alguna por razón de su género, tanto en el ámbito público como en el privado, y a eliminar los obstáculos de hecho y de derecho para la igualdad real de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres.

Art. 3 - El Estado como garante de la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres deberá desarrollar políticas, planes, programas y servicios integrales en todas los ámbitos de aplicación.

Art. 4 - A los efectos de la presente ley, se entenderá como "discriminación contra las mujeres":

A) La existencia de circunstancias o situaciones fácticas que impliquen distinciones, restricciones o exclusiones que de alguna manera restrinjan, alteren, menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades de las mujeres basadas en su pertenencia al género femenino, aunque sean producto del medio, las tradiciones, las costumbres o la idiosincrasia individual y colectiva.

B) La existencia de leyes, pronunciamientos judiciales, decretos, reglamentos, resoluciones, actos administrativos o cualquier otro acto jurídico, cuyo espíritu, intención, contenidos o efectos, impliquen distinciones, exclusiones o restricciones, que de alguna manera restrinjan, alteren, menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades de las mujeres basadas en su pertenencia al género femenino o que impliquen ventajas o privilegios para los varones sobre las mujeres;

C) La ausencia o deficiencia legal o reglamentaria que tenga por objeto o por resultado restringir, alterar, menoscabar o anular de alguna manera el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de los

derechos y libertades fundamentales de las mujeres en un marco de igualdad real de oportunidades y de trato con los varones;

Art. 5 - No constituyen discriminación por razón de género aquellas distinciones, exclusiones, o preferencias adoptadas con el fin de garantizar y acelerar la igualdad real de oportunidades y de trato de las mujeres, promover sus derechos o proteger la maternidad.

Art. 6 - En los casos que una mujer o un grupo de mujeres sufra algún tipo de discriminación basada en su pertenencia al género femenino o alguna restricción, alteración o anulación de sus derechos conforme lo establecido por la presente ley, los poderes del Estado deberán garantizar los derechos o libertades conculcadas y dispondrán, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la discriminación y el pago de una justa indemnización. Las acciones ante las instancias judiciales pertinentes tramitarán por la vía del proceso sumarísimo.

Art. 7. - El Estado Nacional y los Gobiernos Provinciales adoptarán todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Art. 8. Los poderes e instituciones del Estado adoptarán todas las medidas necesarias e integradas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables; garantizando la protección de las mujeres víctimas de la violencia, el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación de los daños causados, la indemnización y la curación de las víctimas y la rehabilitación de los agresores.

Art. 9. - A los efectos de la presente ley, se entenderá que "violencia contra las mujeres", cualquier acción, conducta u omisión, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado y que incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a) Que tenga lugar en dentro de la familia o unidad doméstica, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, o en cualquier otra relación interpersonal y que comprende, entre otros, maltrato, violación y abuso sexual;

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos educativos o cualquier otro lugar; y

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

Art. 10. - El Estado debe difundir información sobre la asistencia de que disponen las mujeres y las familias que son víctimas de la violencia.

Art. 11. - El Estado deberá proporcionar, financiar y promover servicios de asesoramiento y rehabilitación para los autores de actos de violencia.

Art. 12. - El Estado deberá implementar programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para niñas adolescentes y jóvenes que hayan sido o sean objeto de relaciones abusivas.

Art. 13. - El Estado deberá implementar programas y procedimientos tendientes a prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento sexual y otras formas de violencia contra la mujer de todas las instituciones de enseñanza, lugares de trabajo y demás ámbitos.

Art. 14. - El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para incorporar la dimensión de género en los programas de trabajo y equilibrar cualitativamente y cuantitativamente la participación de las mujeres en el ámbito laboral; eliminar toda forma de discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, ascenso, despidos, condiciones de trabajo y la igual remuneración por tareas de igual valor.

Art. 15. - Los planes, programas y acciones destinados a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior tenderán en particular a:

- a) Impulsar las acciones positivas en el ámbito laboral.
- b) Estimular a las empresas del sector público y privado a que promuevan el acceso de las mujeres al empleo y su promoción a puestos de responsabilidad, especialmente en los sectores tradicionalmente masculinos y en los relacionados con las nuevas tecnologías;
- c) Hacer compatible el empleo con el ejercicio de la maternidad y la paternidad;
- d) Impulsar la Información ocupacional y el empleo de las mujeres;
- e) Imposibilitar la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo y en las relaciones laborales;
- f) Perfeccionar el conocimiento de la situación social de las mujeres con relación al trabajo;

Art. 16. - A través del Ministerio de Trabajo se crearán unidades de acompañamiento para la búsqueda de empleo de las mujeres que brinden un servicio de orientación vocacional, información ocupacional y asesoramiento laboral de la mujer y guías y manuales para la búsqueda de empleo.

Art. 17. – A través del Ministerio de Trabajo se implementará programas de información, orientación y apoyo al empleo femenino en zonas rurales, originando la generación de ingresos propios a través

del fomento de microempresas personales, familiares, y cooperativas, que privilegien la utilización de la materia prima del medio, facilitando la igualdad de acceso y el control de los recursos productivos, la tierra, el crédito, el capital, los derechos de propiedad, los programas de desarrollo y las estructuras cooperativas.

Art. 18. - A través del Ministerio de Trabajo se implementará un programa de regularización del trabajo femenino y difundirá los mecanismos adecuados para regularizar a las trabajadoras domiciliarias, rurales, domésticas e informales.

Art. 19. - A través del Ministerio de Trabajo se adaptará la organización de los programas formativos a las necesidades de las mujeres con responsabilidades familiares.

Art. 20. - A través del Ministerio de Trabajo se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar el principio de no discriminación en el empleo.

Art. 21. - Los poderes e instituciones del Estado y los partidos políticos adoptarán todas las medidas necesarias para incrementar la participación de las mujeres y garantizar igualdad de oportunidades y de trato en los más altos niveles de planificación y gestión de las políticas públicas y en las decisiones políticas, sociales y económicas, culturales y de cualquier otra índole.

Art. 22. - El Estado deberá garantizar que las decisiones, las responsabilidades y los beneficios del desarrollo se distribuyan equitativamente entre varones y mujeres.

Art. 23. – Los partidos políticos, los sindicatos, los gremios de profesionales y técnicos y demás organizaciones representativas de la sociedad civil, garantizarán la participación de las mujeres en todos los niveles de su estructura organizativa y en la utilización de sus fondos, en igualdad de condiciones.

Art. 24. - Los poderes e instituciones del Estado y los partidos políticos adoptarán las medidas necesarias para apoyar la formación de mujeres dirigentes, creando las condiciones para su efectiva incorporación al ejercicio de las responsabilidades político institucionales; visibilizarán la participación efectiva de las mujeres de los partidos políticos en los temas de debate nacional; y organizarán concertadamente una red de formación y actualización de mujeres dirigentes a distintos niveles.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Isabel J. Viudes.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El objeto del presente proyecto de ley es garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías en el marco de la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, establecido en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, y conforme al artículo 75, inciso 22 que reconoce rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

A los efectos de la elaboración del presente proyecto de ley se han tenido en consideración diversos instrumentos internacionales y legislación comparada. Entre ellos se encuentran las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la Mujer de la III Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas y la Plataforma de Acción aprobada por la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas; el Primer y Segundo Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990 y 1993-1995) de España; legislación de la Comunidad Europea; leyes de equiparación de la República Federal de Alemania; la Ley de Igualdad Real de la Mujer de Costa Rica; proyectos de igualdad real de la mujer de países de América latina y el Caribe; proyectos de leyes modelo relativas a cuestiones de género para los países de América latina y el Caribe elaborados por las Naciones Unidas, entre otros.

Las reivindicaciones en torno a la igualdad de género se arrastran históricamente como una asignatura pendiente del proceso inacabado de la modernidad. Aunque se observan importantes avances en este sentido, su consecución definitiva queda aún muy lejos y empieza a ser acuciante en este nuevo siglo. Por eso, esta materia deber ser tratada con seriedad y urgencia a través de la promoción de mecanismos eficaces que erradiquen el sistema patriarcal dominante de nuestras sociedades. Por tanto, los instrumentos deberán ser de muy distinto tipo y naturaleza, ya que este problema social ocupa transversalmente todo el sistema político, jurídico y socio-económico actual.

A esto parece referirse el término anglosajón *mainstreaming*, traducido al español como transversalidad: o sea, a la necesidad de implementar de forma coordinada y sistemática una serie de medidas de política de género en todas aquellas decisiones que puedan afectar a mujeres. Sin embargo, como se verá más adelante, la mayoría de las medidas que se intentan coordinar no son adecuadas o no se interpretan debidamente. Todas ellas parecen estar aún inmersas en el propio sistema patriarcal que ha sido objeto de “naturalización” y que, en realidad, bajo diversos argumentos, sigue “ocultando” o “haciendo invisibles” las desigualdades de género.

En esta reflexión crítica es útil comenzar por conceptualizar las denominadas “acciones positivas” ya que nacieron como instrumento para atacar la supuesta neutralidad del sistema patriarcal vigente. Como se sabe, la expresión “Affirmative Action” surge en EEUU en 1935 para referirse a una serie de programas dirigidos a grupos

desventajados con el objetivo de su equiparación social. Con estos instrumentos se buscaba bien erradicar las causas que provocan la desventaja, bien hallar un equilibrio de las funciones que cumple el colectivo en la sociedad o, también, beneficiarlo directamente como régimen compensatorio ante la discriminación histórica. Las medidas de discriminación o acción positiva podrían incluirse en este tercer tipo. Así, la discriminación positiva, también llamada inversa, se alza como excepción al principio de no discriminación directa.

Desde sectores liberales se critica duramente el uso de la acción positiva por múltiples razones, especialmente porque ataca la igualdad formal y su objetivo se fundamenta en una igualdad real, interpretada como igualdad en los resultados, esto es, que independientemente del punto de partida, al final, todos puedan obtener iguales resultados. La perspectiva liberal es partidaria de una igualdad de oportunidades que considera abstractamente a todos como iguales ante la ley, y critica la igualdad en el punto de llegada basada en la diferenciación, al considerarla contraria al principio de libertad. Así, el contractualismo liberal construye una identidad homogénea garantizada por el espacio público del derecho, dejando las diferencias invisibilizadas y, como mucho, toleradas en el ámbito privado. No obstante, la defensa de la igualdad como diferenciación radica en que la libertad no es diferente de la capacidad o, dicho de otra manera, la libertad tiene asimismo una dimensión real relacionada con la capacidad para ejercitar esa libertad formalmente reconocida. La “igualdad en los resultados” busca no tanto que todos se sitúen en el mismo punto de partida en un sentido formal de igualdad, como que todos disfrutemos al final de una igual vida digna, de unos mismos resultados, de una igualdad sustancial. El sistema jurídico persigue que a la postre todos puedan disponer de una igual vida digna y, por esta razón, tiene que dirigirse a erradicar la marginación de la mujer que ha interiorizado su subordinación y/o se le ha impedido y se le impide socialmente una posición igual a los hombres.

Así, pues, se dejan a un lado aquellos críticos conservadores que utilizan interesadamente la noción de “diversidad” para rechazar de principio la acción positiva por considerarla un mecanismo que incrementa la fragmentación de la población y no un instrumento de igualación, es decir, aquellos que oponen interesadamente la igualdad y la diferencia. Junto a éstos, están aquellas otras propuestas que aceptan, al menos parcialmente, la efectividad de las políticas de igualdad como diferenciación, que defienden la compatibilidad entre la igualdad de oportunidades (igualdad en un sentido más formal) y las acciones positivas (basadas, como se ha dicho con anterioridad, en la igualdad sustancial o igualdad en los resultados). En estos casos la acción positiva se somete a una serie de constricciones que rechazan el establecimiento de porcentajes fijos o cuotas, al ser éstos contrarios al principio de igualdad de oportunidades basado en el talento y el mérito.

Para algunos como Rosenfeld el mayor problema de las “mujeres” son los estereotipos sociales y, por ello, la acción positiva es una medida

inadecuada para compensar su desigualdad. En todo caso, afirma este autor, la acción positiva ha de ser voluntaria. No se puede imponer un deber de compensación a un número determinado de empleados que no son responsables de perpetuar los estereotipos sociales. En este sentido los empresarios han utilizado un argumento en ocasiones aceptado por los tribunales: la falta de interés de muchas mujeres por trabajos de altos salarios que no han sido tradicionalmente ejercicios por el sexo femenino. En definitiva, para este sector de la literatura el debate sobre la acción positiva parece acabar en un conflicto entre las mujeres “modernas” y las “tradicionales”. Lo que se ignora es, sin embargo, la manera en que las propias condiciones sociales producen limitaciones en las “elecciones” de ciertas mujeres, cuyo estilo de vida se ve relegado por tradición al ámbito familiar. Por este motivo la reflexión crítica tiene que ir más allá de estas propuestas y de las propias acciones positivas. En este momento las políticas deben ir dirigidas a dismantelar o deconstruir completamente el sistema patriarcal actual. El discurso de género no debería fundamentarse en las diferencias entre mujeres y hombres, sino en que la mujer es juzgada en la vida práctica según la ley del hombre como si de un varón se tratara. Es decir, el ataque es contra el reparto social “naturalizado” de valores y actividades entre mujeres y hombres. A la vez se requiere también un esfuerzo constructivo o de “reconstrucción” de esa misma realidad social partiendo de un nuevo sujeto político democrático que acabe con la separación artificial entre la esfera pública y privada. Se trata por tanto de crear de forma libre proyectos de vida digna, independientemente del sexo. La diferencia aparece ahora como recurso público a garantizar, y lo hace a fin de erradicar el género en el discurso político-jurídico.

Participación política de la mujer. El nuevo sujeto político democrático. En general, definir una noción presenta dificultades porque ya que muchas veces su significación se transmuta fácilmente por el uso ordinario y, en ocasiones, excesivo del término. El asunto se complica aún más cuando hablamos de categorías dentro del plano político-jurídico en el que a menudo las expresiones se tergiversan con el objetivo de conseguir fines muy distintos. Muchas veces los conceptos se crean y usan para satisfacer determinados propósitos políticos.

Hay quienes consideran el término “mujeres” una categoría conceptual basada en ideas, esto es, en el sistema de creencias políticas. Se piensa que es una categoría identitaria fundada en las diferencias biológicas entre las personas que dota de los fundamentos para la movilización política de ciertos grupos. Se argumenta que una conciencia mayor de la función práctica de las categorías políticas concede un grado mayor de legitimidad a las categorías identitarias. Así, tanto las “mujeres” como también los “hombres” son categorías políticas y no categorías de esencia natural.

Ahora bien, el hecho de considerar a las mujeres como grupo político potencial diferenciado puede ser únicamente una medida primaria para acabar con la división tradicional entre hombres y mujeres,

siempre y cuando no suponga ocultar el problema de género y tenga como último objetivo afrontar decididamente la propia visión patriarcal de la sociedad. La intervención de la mujer en el ámbito público promueve la transformación del sistema de estereotipos socio-culturales, y uno de los mecanismos para facilitar esta participación pueden ser las cuotas. Los críticos liberales insisten en que este instrumento es inútil para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres ya que la desigualdad está en la base o estructuras sociales y, por tanto, responde más a una estrategia política que a una forma de erradicar la desigualdad.

Con todo, el argumento en contra de las cuotas, tal y como se presentan e interpretan hoy, tendría que venir, más bien, del hecho de que no arremeten enfrentan directamente desde su base el sistema patriarcal, sino que suman o añaden a la mujer al sistema impuesto por el hombre. Esto no quiere decir que el uso de las cuotas en los órganos de representación y en las esferas de poder (también en el sector privado) sea fútil; no lo es como medida a corto plazo. Que el problema de la desigualdad esté enraizado en las estructuras sociales no justifica que haya que esperar a un cambio social para tomar medidas político-jurídicas que favorezcan el cambio. La esfera política y la social se condicionan mutuamente y es difícil esperar un cambio social sin que las mujeres estén representadas en los órganos de toma de decisiones. Pero, en todo caso, la razón para establecer las cuotas no debe estibar en que las mujeres sean capaces de edificar un “mundo mejor”, o de que puedan aportar una visión o unos valores distintos. Antes bien, el fundamento está en la necesidad de fomentar la igualdad de sexos y desarrollar las capacidades cívicas de todos.

La cuestión, en consecuencia, no es tanto que las mujeres se constituyan como una identidad cultural. El fondo de la problemática es que las “mujeres” al constituirse como identidad y categoría política corren el peligro de tener que contraponerse a otros grupos para hacer valer sus propuestas. Colocar a las “mujeres” como categoría política aparte puede tener el efecto de relegar una serie de temas como “temas de mujeres”. Las mujeres se “incorporan” o “añaden” a la agenda política a través de políticas de “formación” o “asistencia”. La igualdad de resultados se interpreta, entonces, en relación a un proyecto de vida definido en realidad por hombres y no por mujeres.

Desde este punto de vista el inconveniente se plantea en las mujeres que no están preparadas para la vida pública o que tienen que equilibrar el trabajo asalariado con el trabajo doméstico. Pero, muy al contrario, la traba radica en las estructuras políticas y sociales que han generado unos roles y que han definido de determinado modo un proyecto de vida digna. No se puede pedir que las mujeres asuman el rol tradicional de los hombres y, además, mantengan el suyo propio. Ello equivale a reclamarles una doble vida que es prácticamente imposible de realizar.

Dicho esto, la dirección que deben deberían tomar las políticas de igualdad sería más bien la de considerar a las mujeres y a los hombres como individuos susceptibles de ser todos ellos diferentes,

aunque iguales. No se trata de que la mujer se incorpore al rol del hombre, esto es, que simplemente se añada al discurso político como categoría diferencia. Hay que romper las barreras de los roles tradicionales y luchar por los roles individuales basados en las elecciones personales. El camino (el mecanismo) actual para hacerlo efectivo es que las mujeres se incorporen de forma real al discurso político y no, como es lo habitual, que se hagan partícipes del mismo por motivos ajenos a la igualdad (normalmente por fines electorales). La cuestión jurídica esencial para el antisexismo no es intentar que las leyes tengan sexo o vayan dirigidas a uno de los sexos en particular. Por el contrario, la cuestión jurídica es poner de manifiesto que unas leyes elaboradas sin las mujeres (todavía infrarrepresentadas en los órganos decisorios y operadores del derecho) provocan que la cultura jurídica sea sexista y que el sexo se considere una variable fundamental.

La defensa de la diferencia y la expansión de las vías de participación política es solamente el paso para conseguir la igualdad de todos como seres individuales, pero no debe quedarse ahí. Hay que tener muy claro que el fin debe conducir a la construcción de la diferencia entre todos como seres humanos que eligen libremente los resultados o proyectos de vida digna, y no entre mujeres y hombres. La lucha compite por conseguir un cambio institucional, jurídico y cultural que cuenten por igual con ambos sexos en los círculos decisorios públicos y privados, obligando a compartir cargas y tareas. Para ello hay que crear un “espacio social ampliado” que involucre el ámbito público y el privado, y que permita un tipo acción político-social interactiva y relacional, que presente conjunta y dialécticamente los dualismos de esencia ontológica de género.

La manera de construir este espacio no puede basarse en identidades “esencialistas” y en “discursos racionales a priori”, reductores de la complejidad social. La apuesta intelectual e imaginativamente política debe ser a favor de un contexto complejo de diferencias reconocidas y de mínimos universales contrapuestos.

El Proyecto de Ley de igualdad entre mujeres y hombres tiene las mejores intenciones pero todavía queda mucho por dismantelar del sistema patriarcal de la sociedad Argentina.

Estaríamos así ante un intento diferente de recuperar la exigencia de universalidad, como imprescindible desde el punto de vista ético y jurídico (respecto a los derechos humanos) y conciliarlas con una comprensión de la diferencia que, en lugar de subrayar la posibilidad de consenso pese a la diversidad, ponga el énfasis en que no hay consenso sino desde la diversidad. Desde el punto de vista del pluralismo cultural, ello comportaría el reconocimiento del carácter valioso de toda tradición cultural (como tal, aunque eso no signifique, en mi opinión, aceptar como valioso, y, menos aún, como no susceptible de discusión, todos y cada uno de los valores que propone), de forma que el diálogo intercultural parte de esa premisa, sin que ello impida, sino más bien que empuje hacia la “interpelación

mutua de unas tradiciones por otras, donde no se escamoteen ni los presupuestos antropológicos, ni tampoco los méritos y/o responsabilidades históricas en ese campo; donde se haga posible, en fin, la autocrítica sincera de cada tradición en cuanto a su contribución al respeto y promoción de los derechos humanos.

El Proyecto establece que “el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías en el marco de la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres”. Por tanto, declara la dignidad humana como fundamento último de los derechos, fuente de esos derechos y también de sus deberes.

Seguidamente el articulado se refiere a la plasmación jurídica del derecho a la igualdad en la Constitución Argentina y en los tratados a ella incorporados : en el artículo 2 aparece su dimensión formal (derecho a la igualdad y a la no discriminación) y en el artículo 3 y 4 la dimensión sustancial. De esta manera, la igualdad ocupa una posición culmine en el sistema jurídico y se consolida como test de validez sustancial del resto de normas jurídicas.

Se declara asimismo que la igualdad es un derecho plasmado en textos y documentos jurídico-internacionales (como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979). De hecho la idea del mainstreaming (transversalidad de las medidas de género) viene ya dada a través de las mencionadas y otras declaraciones europeas e internacionales. Tras la Conferencia de Pekín se aconsejan dos medidas fundamentales para acabar con la desigualdad de la mujer: el incremento del poder político de la mujer y la transversalidad. A partir de entonces la Estrategia marco comunitaria de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres ha enfatizado acciones positivas y el mainstreaming de género.

Esta filosofía nutre este proyecto de ley que significa un cambio importante en la concreción de la obligación de la Administración pública en la gestión de la igualdad, suscitando un paso importante en el proyecto de intervención social. El gobierno adquiere ahora compromisos y responsabilidades para la obtención de resultados reales.

Se consagra la intervención activa del Estado, tanto nacional como provincial para combatir todas las manifestaciones de discriminación, directa e indirecta, por razón de sexo, y se promueve la igualdad real entre mujeres y hombres. Esta igualdad debe ser entendida como igualdad en los resultados pero, sobre todo, como igualdad en la diferencia que no signifique “asimilación” o “integración” en proyectos de vida ya definidos (en este caso, por hombres).

Se parte acertadamente de la complejidad y la horizontalidad (transversalidad o mainstreaming) del principio de igualdad en los diferentes ámbitos normativos.

En general, el proyecto establece acciones positivas tanto a nivel público como privado, reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomenta la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los deberes familiares. Sin embargo, lo hace siempre desde la perspectiva de asimilación o integración, de absorción en definitiva, de la mujer en los patrones o roles establecidos socialmente por la sociedad patriarcal. Se añade, todavía, que la expansión de tales medidas se cuestiona en determinados sectores, como se comprueba de las limitaciones o diferenciaciones realizadas en diversos ámbitos del empleo público.

El énfasis en ciertos derechos de dimensión social se completa estratégicamente con la necesidad de participación política efectiva de la mujer como grupo diferenciado, mediante el principio, siempre flexible, de presencia o composición equilibrada en los órganos y cargos de responsabilidad. El concepto “representación equilibrada” no puede considerarse una medida matemática o cuantitativa, sino cualitativa. No significa que las mujeres tengan que ser representadas por mujeres, sino que todos deben ser representados por todos. No se trata de establecer una cuota, sino de imponer medidas imprescindibles para la efectiva realización de una sociedad justa. La representación equilibrada en los órganos de decisión públicos y privados, , no puede interpretarse como una injusta discriminación de los varones. Más bien se traduce en un paso para el logro de una igualdad justa. Cuando se establecen cuotas limitadas por la temporalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad tampoco se impide el principio de mérito. Al contrario, se respeta y hace efectivo, promoviendo una auténtica transformación estructural.

Lo anteriormente mencionado tiene un apoyo fuerte en la declaración general de la ONU del año 1948 sobre los derechos humanos, que en su primer y segundo artículo manifiesta: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Tomando como punto de partida que los derechos humanos son universales, es decir que refiere a toda la humanidad, hombres igual que mujeres, en todos los países y en todas las culturas. En la Convención del año 1979 sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por primera vez la ONU enfoca el aspecto de igualdad de género y los derechos humanos de la mujer

No existe ninguna sociedad donde hay igualdad de género entre hombres y mujeres llegan ser admitidos. Durante los años noventa esto ha ido manifestándose y aclarándose aún más en varias conferencias de ONU. La declaración de Viena de 1993 establece por ejemplo: “...los derechos humanos de mujeres y niños son irreversibles, completos e inseparables de los derechos humanos generales...”

La cuarta conferencia internacional de mujeres en Beijing en 1995, manifestó que los derechos de la mujer son universales e indivisibles y no se pueden anular por razones de tradiciones culturales o religiosas. El derecho de la mujer de decidir sobre su sexualidad es aceptado como una parte de los derechos humanos. Se rechaza la violencia contra las mujeres, independientemente de culturas y costumbres. Los derechos económicos han sido reconocidos, incluyendo entre otros el derecho de herencia y el de propiedad de la tierra, además del mismo salario por trabajo de igual valor.

Aunque la mayoría de los países por principio se han adherido a la Declaración Universal de la ONU sobre los derechos humanos, todavía falta mucho para lograr la igualdad de género entre hombres y mujeres.

Durante las últimas décadas se ha logrado un avance significativo en cuanto a educación y salud y la brecha entre hombres y mujeres ha disminuido. Para las mujeres esto ha significado una más larga esperanza de vida, menos hijos por mujer y un incremento de la capacidad de leer y escribir; pero todavía falta mucho por hacer con referencia a la distribución del poder político y los recursos económicos. Aún las mujeres sufren de discriminación en cuanto al acceso a la alimentación, la salud, la educación y se vulnera hasta el derecho a la vida. El 70% de la población mundial pobre y el 66% de los analfabetos, son mujeres.

En el plano político-estructural hay un buen número de convenciones internacionales de DD. HH., relacionados con los derechos de hombres y mujeres, que la mayoría de los miembros de la ONU han firmado. En varios países estas convenciones han sido incorporadas en la legislación nacional, mientras que en otros brilla por su ausencia; en estos últimos, las mujeres tienen derechos legales muy reducidos y están prácticamente sometidas a los hombres. No obstante, también en el primer grupo de países, los que han firmado los convenios internacionales de la ONU y que formalmente dan en su legislación los mismos derechos a las mujeres que a los hombres, se encuentra un abismo entre el sistema formal basado en los derechos y la cultura de valores, que efectivamente prevalece en el país.

Durante los últimos 20 años la economía del libre mercado ha hecho su marcha triunfal en el mundo. Hoy en día la economía de la mayoría de los países está entrelazada a través del comercio y las inversiones. En muchos lugares este modelo de desarrollo económico ha creado un incremento rápido de ingresos y bienes de capital, por ejemplo en Asia, y ha contribuido a una disminución de la pobreza. Al mismo tiempo hay regiones y países donde el desarrollo económico no ha logrado equilibrarse al crecimiento de la población, lo que ha significado incremento de la pobreza.

Además hay una variedad de estudios, por ejemplo los informes anuales de PNUD, que muestran que las distancias entre ricos y

pobres en el mundo se han acentuado bastante, tanto entre los países, como al interior de los mismos. Los que son pobres y carecen de recursos e influencias, no pueden aprovechar las posibilidades que una economía de libre mercado ofrece, en cambio corren el riesgo que sean aún más marginalizados.

Una gran cantidad de estudios demuestra que la mayoría de estos grupos pobres y vulnerables son mujeres.

En todos los países, las mujeres además tienen la responsabilidad principal del trabajo no pagado en el hogar; educar a los niños y las niñas, cocinar, lavar, planchar, hacer compras y otras tareas. De esta manera las mujeres tienen mucho más carga de trabajo que los hombres, y consecuentemente mucho menos tiempo disponible para participar en estructuras de decisiones económicas y políticas.

El orden patriarcal es la razón principal de la opresión y discriminación de las mujeres alrededor del mundo. La mayoría de las sociedades y organizaciones son caracterizadas por estructuras y normas creadas por hombres. Este es el patriarcado, un orden social en el cual se ha institucionalizado el poder de los hombres sobre las mujeres, en lo económico, lo político, en el hogar y en las relaciones heterosexuales. Ello da a unos pocos hombres poder y autoridad en la sociedad, mientras que las mujeres tienen una posición subordinada. En la sociedad patriarcal se considera que la mujer tiene menos valor y es inferior al hombre, lo que lleva a la discriminación y a la opresión. Los valores patriarcales penetran la cultura, la religión y las tradiciones, que a su vez mantienen y afirman la subordinación de la mujer. La razón por la que la religión, en muchos casos, se usa con el fin de oprimir, es resultado de que fueron los hombres quienes han elaborado los textos religiosos y sus interpretaciones, además están controlando las instituciones religiosas. Esto es aplicable a todas las religiones mundiales.

Debemos respetar las diferentes culturas así como las diferentes religiones y tradiciones que forman parte de éstas. Al mismo tiempo los derechos humanos son universales, de validez general e inviolable. En el caso que una cultura y sus tradiciones violen los derechos fundamentales de las mujeres, esto no puede ser aceptable. La violencia contra las mujeres forma parte del sistema patriarcal y se convierte, con frecuencia, en una herramienta eficiente para mantener la sumisión de la mujer por el hombre. Cuando hombres y mujeres desafían las tradiciones y tratan de cambiarlas, muchas veces se enfrentan a una resistencia violenta.

Quienes consideran que las disparidades entre los sexos son biológicas, tienden a enfocarse en las diferencias entre hombres y mujeres, atribuyendo ciertas cualidades dadas al sexo respectivo. Así, opinan que las mujeres por naturaleza son cuidadosas, tienen más empatía y son más apropiadas para cuidar a los niños y a las niñas. Opinan que los hombres son agresivos y extrovertidos y más apropiados para mantener a la familia. Este modo de ver es, a largo plazo conservador, puesto que considera los roles vigentes entre

hombres y mujeres como dados por naturaleza e imposibles de cambiar. Además da lugar a una valorización de lo femenino y lo masculino, siempre dando el valor más alto a lo masculino.

Si queremos cambiar la sociedad, es más útil enfocar cómo se crean los roles entre hombres y mujeres. El punto de vista, en este caso, es que estos roles tienen un origen social y cultural y en consecuencia son posibles de cambiar, a diferencia del sexo en sí, que es biológicamente determinado. En este caso se habla de género, o sea cómo son las relaciones sociales entre hombres y mujeres y cómo éstas determinan la distribución del trabajo entre los sexos, el acceso, y el control sobre los recursos económicos y el poder político. Entonces igualdad de género también es un asunto de poder.

Viendo atrás en la historia, queda bien claro que la definición de lo que es masculino y lo que es femenino tiene variaciones de lugar a lugar, entre épocas y clases sociales. Por ejemplo, no se puede identificar una manera única de ser un “verdadero hombre”, que haya estado vigente en todos los tiempos y en todos los lugares. Tal vez nunca haya habido una cualidad biológica específica que distinga lo masculino de lo femenino, sino que se trata de cualidades humanas generales que hombres y mujeres tienen permitido desarrollar con diferente intensidad, dependiendo de la cultura y la educación.

Históricamente siempre son las mujeres quienes han impulsado las reivindicaciones de igualdad de género y han luchado por sus derechos; pocos hombres se han involucrado en la lucha por la igualdad de género. Esto se explica porque la desigualdad de género no ha sido un problema para la mayoría de los hombres, puesto que no sienten que constituyen un sexo específico y hayan sido discriminados por eso. Los privilegios y ventajas que los hombres gozan dentro del sistema patriarcal se entienden como obvios y dados por la naturaleza, y el que es privilegiado tiene cierta dificultad de ser consciente que tiene una posición privilegiada. Además, es excepcional, que los que tienen privilegios voluntariamente los dejan .

Sin embargo, la posición privilegiada tiene su precio. Para poder mantener su posición hegemónica, los hombres tienen que someterse a un modelo de masculinidad estereotipada de dureza y agresividad, que lleva a la mutilación emocional, tendencias a la violencia y comportamiento de riesgo inmoderados. Igualmente es un modelo ideal que ningún hombre puede lograr cien por ciento. Además de frustración y angustia, esto también tiene como resultado la sobre representación masculina en la estadística de abuso, criminalidad y suicidio, una peor salud física y psíquica, un más bajo promedio de vida, etcétera.

La igualdad de género no es una cuestión sólo para mujeres; se refiere de igual manera a los hombres como a las mujeres. No es posible lograr una verdadera igualdad de género entre hombres y mujeres, sin la participación activa de los hombres.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.-

Isabel J. Viudes.

(VII)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, corregir y sancionar la violencia laboral.

Artículo 2º: A los efectos de la presente ley entiéndase por violencia laboral a toda acción que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito propio, por el empleador, por personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él, sobre el/la trabajador/a, que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social mediante amenaza, intimación, inequidad salarial, acoso, maltrato físico y/o psicológico, social u ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a sin perjuicio de las conductas definidas en la ley 23.592, sus modificatorias y sin perjuicio de la aplicación de otras leyes cuando fueran pertinentes.

Artículo 3º: Se entiende por maltrato psíquico y social contra el/la trabajador/a, a la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica infundada, como por ejemplo:

- Constante bloqueo de sus iniciativas de interacción generando aislamiento del mismo;
- Cambiarlo de su lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de sus compañeros o colaboradores más cercanos sin razón funcional para ello;
- Prohibir a otros empleados que hagan contacto con él;
- Obligar a ejecutar tareas denigrantes para su actividad profesional;
- Juzgar públicamente de manera que resulte ofensiva, injustificada o reiterada en relación a su desempeño en la organización;
- Asignar misiones sin sentido o innecesarias con la intención de humillarlo o disuadirlo;
- Encargar trabajos imposibles o altamente dificultosos de realizar deliberadamente;
- Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las herramientas necesarias para concretar una tarea atinente a su puesto;
- Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot o conducta similar;
- Amenazas repetidas de sanciones, sumarios o despido infundadas;

Artículo 4º: Se entiende por maltrato físico a toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico al trabajador

Artículo 5º: Se entiende por acoso a la acción persistente y reiterada a agraviar con palabras, gestos, bromas o insultos en razón de su sexo, edad, nacionalidad u origen étnico, color, religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación familiar.

Artículo 6º: Se entiende por acoso sexual a la conducta reiterada de asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de otros comportamientos basados en el sexo, ejercida por el empleador, superior jerárquico o un tercero vinculado directamente a él. También todo contacto físico innecesario, comentarios, sarcasmos y observaciones no bienvenidas de contenido sexual, miradas o gestos lascivos, despliegue de literatura pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la apariencia o cuerpo y asalto sexual.

Artículo 7º: El/La trabajador/a cuando fuere objeto de violencia laboral o acoso sexual en ocasión del mismo, sea éste ejercido por el empleador, un superior jerárquico y otro trabajador, podrá hacer la denuncia del contrato de trabajo en los testimonios del artículo 242 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo o de los estatutos especiales o convenios que rijan en los dos últimos supuestos, siempre que hubiere mediado denuncia por parte de la víctima y el empleador no adoptara las medidas necesarias para ser cesada tal conducta.

Artículo 8º: Ningún trabajador podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo a menos que sean mejoradas ni ser despedido por denunciar ser víctima de acoso sexual o de violencia laboral. Tal conducta por parte del empleador dará derecho al trabajador a hacer uso de las opciones previstas en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, sus modificatorias y en la Ley 23.592.

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado obedece a su denuncia, cuando ocurra dentro del año subsiguiente a tal circunstancia.

Igual presunción regirá respecto de los testigos en procedimientos en que se debata o investigue la existencia de violencia laboral o acoso, cuando fuese dispuesto desde la fecha de ofrecimiento de su declaración testimonial y hasta un año después de producirse la declaración respectiva ante el organismo interviniente. Esta protección cesará si la declaración no se hubiese producido.

En caso que el empleador produzca un despido que obedezca a esos motivos y durante los lapsos indicados, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un año de remuneración, siendo acumulables a la establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus concordantes.

Artículo 9º: La víctima de violencia laboral o acoso sexual tiene derecho a obtener una reparación por los daños y perjuicios

padecidos. El empleador que haya sido notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual es solidariamente responsable, salvo que acredite fehacientemente que tomó acciones inmediatas y apropiadas para corregir esa situación.

El autor de violencia laboral o acoso sexual es personalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima, al empleador o a un tercero, con los alcances previstos en el Código Civil de las responsabilidades previstas en la presente ley.

Artículo 10º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Selva J. Forstmann. -

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La violencia Laboral es posiblemente tan antigua como la propia existencia de la relación entre las partes del proceso productivo y, aunque nacieron asimétricos en cuanto al proceso de acumulación o simple ejercicio de poder, en los últimos años ha salido de las sombras para irrumpir con toda fuerza en el espacio público.

En nuestro país durante las etapas del llamado pleno empleo era impensable que un trabajador o trabajadora fueran objeto de violencia. Si ello sucedía bastaba con la denuncia al cuerpo de delegados o rápidamente sustituir ese trabajo oprobioso por otro que tenía las puertas abiertas para acabar con el problema. Por supuesto nada le ahorraba a los trabajadores el mal momento, que pasaba a la memoria colectiva como un hecho poco feliz y repudiable.

Los tiempos que corren denotan un detrimento en las condiciones humanas de los ámbitos de trabajo que hacen pensar en su necesaria reformulación.

Esta tarea no es sólo de los operadores del trabajo, sino también de quienes tenemos a cargo la sanción y promulgación de leyes. En los países donde se ha tratado el tema que nos convoca ha sido analizado multisectorialmente por psicólogos, médicos psiquiatras, legistas, asistentes sociales, juristas, abogados, sociólogos, sindicalistas y legisladores.

Resulta a mi ver interesante determinar el concepto, características, formas de expresión, orígenes y fases del desarrollo del “mobbing”, así como sus implicancias o consecuencias en la vida social de los individuos que forman la masa de trabajadores activos de este país. Dos licenciados en psicología y uno en medicina del trabajo del Centro Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España; Félix Martín Daza, Jesús Pérez Bilbao y Juan Antonio López García Silva han efectuado un estudio sobre “El hostigamiento psicológico en el trabajo” publicado en la página <http://www.mtas.es/isnht/ntp/ntp>

Allí los autores citados, siguiendo al precursor que ha analizado el tema a nivel mundial, Dr. H Leyman (“Silencing of a skilled technician”, work, Env. In Sweeden, 1984;4:236238) ha definido al “mobbing” como aquella situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema durante un tiempo prolongado de forma sistemática, sobre otra persona en el lugar de trabajo. Por tiempo prolongado los analistas señalan que no debe durar menos de seis meses, y en cuanto a la forma, la agresión debe manifestarse por lo menos una vez por semana. ¿Por qué se exigen dichos recaudos para así considerar que el agredido sufre de “mobbing”? Porque en la medida que se den esos parámetros mínimos incidirá en la salud psicofísica del trabajador.

Señalan que existe “psicoterror laboral” u “hostigamiento psicológico en el trabajo” a través de por lo menos cuarenta y cinco comportamientos hostiles.

Las acciones también pueden estar dirigidas contra la reputación o dignidad personal del afectado (comentarios injuriosos contra su persona, ridiculizándolo o riéndose públicamente de él, de su aspecto físico, de sus gestos, de su voz, de sus convicciones personales o religiosas, de sus inclinaciones sexuales, de su estilo de vida, etc.). Como subespecie encontramos al “acoso sexual” .

También pueden ser contra el ejercicio de su trabajo (imposición de trabajo en exceso o difícil de realizar, o innecesario, monótono, repetitivo, o que requiere una calificación menor que la que posee la víctima, u otorgándole tareas superiores para las que está calificado; así como privándole de realizar determinados tipos de trabajo o negándole información necesaria de acuerdo a su categoría.

También existe mobbing cuando se le oculta o niega herramientas de trabajo o se le impone la realización de labores contrarias a las convicciones morales del empleado.

Otras veces, las acciones responden a situaciones de inequidad a través del otorgamiento de trato desigual, la distribución inequitativa del trabajo o la imposición de diferente sueldo en similares tareas.

Es interesante señalar que el término “mobbing” proviene del mundo animal. Se refiere al mecanismo por el cual, de una población animal, un individuo es expulsado con comportamientos propios de alejamiento o agresividad por ser considerado este último extraño a la comunidad de origen, siendo considerado enfermo o peligroso. Es un mecanismo de defensa gracias al cual un grupo animal mantiene su homogeneidad expeliendo al “no similar” con comportamientos lesivos, que en algún caso puede llegar a la destrucción del individuo.

Puntualmente el término inglés era aquel que usaban los biólogos en el siglo XIX para describir el comportamiento de los pájaros, que para defender el nido volaban en torno de los posibles agresores.

No es así en el caso humano. Aquí se trata sustancialmente de irrogar molestias morales que vienen ejercidas por un individuo o grupo confortando a otro individuo. Puede ser “horizontal” (entre pares) o “vertical” (de un superior jerárquico).

Los países escandinavos han sido pioneros en el estudio de esta temática. Por el contrario, EE.UU. ha enfocado el problema del acoso sexual desde distintos frentes pero poco se ha hecho en materia de “mobbing”.

Alemania, gracias a la influencia de Leymann, ha incorporado este tema en la agenda de estudio laboral (Harald Hege); mucho después lo han hecho países como Francia, Holanda, Suiza e Italia. La legislación escandinava, en especial la sueca, es la primera en el mundo en receptar la problemática en análisis. La normativa vigente emanó del Ente Nacional para la salud y la seguridad, entrando en vigencia a partir del 31 de Marzo de 1994.

Suecia, Finlandia y Noruega garantizan el derecho de los trabajadores a mantenerse sanos en el trabajo, tanto física como mentalmente; considerando las acciones de “mobbing” como delitos. Esta perspectiva legislativa también ha sido promovida en Francia, que lo castiga actualmente con multa y penas de hasta un año de prisión. El “mobbing” es reconocido por la OIT desde el año 1998 con el informe titulado “violence at work”.

Varios Estados han presentado proyectos legislativos en el marco del derecho no vinculante, así el parlamento Europeo ha solicitado a la comisión Europea un “libro verde sobre el estado de acoso Moral en el Trabajo” adoptado tras el informe del eurodiputado Jan Andersson (“a modo de presentación: la necesidad del tratamiento legal de la violencia laboral”, Patricia B. Barbado, Jurisprudencia Argentina, Numero Especial, 2005-II, Bs. As., 27/04/05, “mobbing. El acoso psicológico en el ámbito laboral”).

Por el momento a nivel nacional, sólo existe un acuerdo suscripto entre la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas e “Instituciones sin violencia” para organizar una oficina de recepción de denuncias en el ámbito laboral, pero se aclara que sólo tendrá incumbencia en los casos que se den en la Administración Pública.

Se han realizado importantes reflexiones sobre el conflicto en la empresa en nuestros tiempos y cómo éste debe apreciarse como un aviso de las dificultades que están presentes y no tienen otro modo de expresarse.

En este caso sentido, Castillejo de Arias ha expresado que el conflicto integra el funcionamiento moral de la empresa, siendo sus causas múltiples entre las que pueden enunciarse: falta de comunicación, falta de reconocimiento, confusión de roles, problemas de poder.

La autora citada también destaca que el manejo de conflictos ha sido una actividad necesaria en cualquier empresa. Sin embargo no se ha formado al personal especialmente para el trato y manejo de dichos conflictos, lo que en muchos casos lleva a tratar de disimularlos, evitarlos, desviarlos o que desaparezcan.

Estas reflexiones resultan muy oportunas en el mundo actual, donde el desempleo es una amenaza que genera conflictos internos en las empresas.

Por un lado el temor a quedar cesante lleva a un mayor nivel de competitividad entre los empleados, a un individualismo más acérrimo, a una tolerancia de situaciones abusivas hasta el límite de lo inimaginable.

Por el otro lado el empresario se ve obligado por déficits presupuestarios o por crisis económicas, a buscar deshacerse de alguno de sus empleados a través de la renuncia de los mismos, en muchos supuestos bajo presión del empleador o prescindir de aquel de sus subordinados que con sus reclamos, a veces legítimos, resulta molesto.

En este contexto aparece esta figura singular de la patología laboral. Tanto en Europa como Estados Unidos los expertos en el estudio y seguimiento del sistema jerárquico existente en fábricas y oficinas, atendiendo a su reflejo en la vida de los trabajadores, han detectado el crecimiento alarmante de este fenómeno, al que nuestro país no resulta ajeno.

El “mobbing” aparece muchas veces en forma directa y, en otras oportunidades, lo hace a través de una estrategia de hostigamiento sutil. A manera de ejemplo mencionarlos:

- a) El aislamiento físico del trabajador;
- b) El hostigamiento y la falta de comunicación;
- c) La prolongación de conceptos peyorativos;
- d) La asignación de tareas humillantes o vergonzantes;
- e) Tratar de darle al trabajador tareas de muy difícil realización;
- f) Retar al trabajador en público, agraviando o menoscabando su imagen;
- g) Cambiarle constantemente y en forma arbitraria las modalidades de trabajo;
- h) Hacerlo trabajar en condiciones antiergonómicas, sabiendo que ello constituye un daño para el trabajador;
- i) Acusar y culpar injustamente al trabajador por hechos que le son ajenos;
- j) Utilizar técnicas para sabotear las tareas del trabajador;
- k) Molestar e interrumpir los trabajos que intenta realizar el trabajador;
- l) Insultar y ridiculizar al trabajador;
- m) Intentar agredir físicamente al trabajador;
- n) Impedir que el trabajador utilice los sanitarios para sus necesidades fisiológicas.

Marie France Irigoyen, una psiquiatra francesa que se ha convertido en una de las grandes especialistas mundiales en tema del mobbing, en su libro “El acoso moral en el trabajo” nos ilustra acerca de las consecuencias específicas en el área de la salud mental que puede causar al trabajador la persecución psicológica.

La autora citada, basándose en una exhaustiva investigación de años, expresa que si el acoso persevera en el tiempo y se refuerza, puede llegar a establecer un grave estado depresivo. Y siguiendo los criterios del DSM IV (clasificación internacional de las enfermedades mentales) el 69% de las personas que entrevistó y son víctimas del acoso moral en el trabajo, presentaban un estado depresivo severo que justificaba la atención médica. Ello implicaba asimismo un riesgo suicida nada despreciable.

Asimismo la especialista de referencia señala que pasados varios meses de acoso moral, los síntomas de estrés, que al principio de la agresión estaban indiferenciados, se transforman en un trastorno físico manifiesto.

El acoso moral deja huellas indelebles que pueden ir desde estrés postraumático hasta una vivencia de vergüenza recurrente e incluso hasta cambios en la personalidad. La desvalorización persiste aunque la persona se aleje de su agresor. De alguna manera se puede decir que la víctima lleva una cicatriz psicológica que la hace frágil, la lleva a vivir con miedo y a dudar de todo y de todo el mundo.

Como vemos, a través de la experiencia y los estudios realizados por esta reconocida terapeuta el daño psíquico e incluso físico que puede producir el mobbing es de considerable gravedad.

Es por esto que solicitamos a los integrantes del este Honorable Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

Selva J. Forstmann. –

(VIII)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

TITULO PRELIMINAR Disposiciones Generales

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. Orden Público.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República.

Artículo 2.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:

- g) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
- h) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
- i) Las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, asistir y erradicar la discriminación y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos a través de un Plan Nacional de Acción que incluirá acciones positivas;
- j) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres;
- k) La remoción de patrones socioculturales en que se sostiene la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres y;
- l) El acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

Artículo 3.- Derechos Protegidos.- Esta ley asegura el efectivo cumplimiento de los siguientes derechos de las mujeres:

- m) A una vida sin violencia;
- n) A la salud, la educación y la seguridad personal;
- o) A la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial;
- p) A que se respete su dignidad;
- q) A decidir sobre la vida reproductiva, número de hijos y cuándo tenerlos;
- r) A la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;
- s) A recibir información y asesoramiento adecuado;
- t) A gozar de medidas de asistencia, protección y seguridad;
- u) A gozar de acceso gratuito a la justicia y;
- v) A la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres

Artículo 4.- Definición.- Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, directa o indirecta, que afecte su vida, libertad, dignidad, así como la integridad física, psíquica, sexual, laboral, o económica, producida tanto en el ámbito público como en el privado, quedando comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda disposición criterio o práctica aparentemente neutra que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón, salvo en supuestos de justificación objetiva que atiendan a una finalidad legítima.

Artículo 5.- Tipos y Modalidades. Quedan especialmente comprendidas en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos y modalidades de violencia contra la mujer:

1) Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer con resultado dañoso o riesgo de producir daño o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.

2) Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, restricción, humillación, manipulación, aislamiento, culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que le cause perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación.

3) Sexual: La que obliga a presenciar, mantener o participar de relaciones sexuales no deseadas mediante intimidación, amenaza, coacción o uso de la fuerza. Se consideran especialmente comprendidos los siguientes tipos:

a) Relaciones sexuales violentas que se produzcan contra la cónyuge, unión de hecho estable o no, relación afectiva o de parentesco, por un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos sea cual fuere su clase por algunas de estas vías.

b) Esclavitud sexual: la privación ilegítima de libertad de la mujer para su venta, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual.

c) Prostitución, explotación y comercio sexual: acción que obliga a la mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, por la fuerza o mediante amenaza, coacción, intimidación, presión psicológica, abuso de poder para obtener o esperar obtener beneficios pecuniarios o de otro tipo a cambio de los referidos actos sexuales.

d) Abuso sexual: actitudes y comportamientos de exhibición y observación que un varón realiza para su propia satisfacción sexual especialmente con niñas y adolescentes, empleando la manipulación emocional, el chantaje, las amenazas, el engaño u otro tipo de violencia física o psíquica.

e) Acoso sexual: consistente en solicitar para sí o terceros actos o comportamientos de contenido sexual no aceptados por la mujer, en el marco de una relación de poder o superioridad laboral, docente, médica o de otras profesiones bajo amenaza expresa o tácita de provocarle un daño o la promesa de una recompensa.

f) Violencia contra los derechos sexuales o reproductivos: comprende toda actuación que impida o restrinja el libre ejercicio por las mujeres de su derecho a la salud sexual y reproductiva.

g) Trata de mujeres : actos de reclutamiento, captación y transporte de mujeres, niñas y adolescentes.

4) Económica o patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Se consideran especialmente comprendidos los siguientes tipos:

d) Perturbación a la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.

- e) Sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.
- f) Limitar los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir.
- g) Limitar o controlar sus ingresos.

5) Laboral: La que discrimina a la mujer en los ámbitos de trabajo públicos o privados y obstaculizan su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, para supeditar la contratación, ascenso, permanencia o estabilidad de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea.

Se incluye en esta forma de violencia contra la mujer el mobbing, entendiendo por tal, toda situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una presión psicológica extrema en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

6) Institucional: La que realizan las autoridades, funcionarios / as, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley.

7) Doméstica: Toda conducta constante o no que perjudica o menoscaba la integridad física, psíquica, sexual o económica contra la mujer producida por algún integrante del grupo familiar. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, el matrimonio, uniones de hecho aunque hubiere cesado la convivencia, y parejas que no cohabiten en forma permanente.

8) Obstétrica: La que ejerce el personal de salud sobre la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.

9) Mediática: La exposición de la mujer a través de cualquier medio de difusión, que de manera directa o indirecta: explote, discrimine, deshonre, humille o atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación.

10) Simbólica: Las que a través de mensajes, valores, íconos o signos transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

TITULO I

Políticas Públicas

Artículo 6.- Preceptos rectores.- Para el cumplimiento de los fines de la presente Ley los tres Poderes del Estado ratificarán en cada una de sus actuaciones:

a) El respeto irrestricto del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y varones.

b) La eliminación de la discriminación, situaciones de desigualdad y las relaciones de poder sobre las mujeres.

c) Todas las acciones conducentes a hacer efectivas las normas emanadas de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

d) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres.

e) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados al efecto, así como promover la sanción y la reeducación de los que ejercen la violencia.

f) La adopción del principio de transversalidad estará presente en las medidas y ejecución de disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios.

g) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales.

h) El derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información.

i) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 7.- Implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El Consejo Nacional de la Mujer, con la participación de su Directorio y del Consejo Federal será el encargado de formular, diseñar y poner en marcha las políticas públicas necesarias para la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que creado por esta ley.

El Consejo Nacional podrá suscribir convenios con las jurisdicciones locales para la organización, implementación y financiamiento de las acciones del Plan en las respectivas jurisdicciones, teniendo en cuenta

la realidad particular y grado de desarrollo de la problemática de cada lugar.

Artículo 8.- Objetivos del Plan. Serán objetivos del plan los siguientes:

- a) Promover políticas integrales y específicas para la sensibilización prevención, detección, asistencia y registro de la violencia contra las mujeres, en el ámbito público y privado.
- b) Lograr la articulación y coordinación entre las distintas áreas involucradas: nivel nacional, jurisdicciones locales y municipales, universitarias, sindicales, empresariales, religiosas, organizaciones de defensa de derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil.
- c) Capacitar, formar y entrenar a los agentes públicos y profesionales vinculados a la prevención, denuncia, tratamiento, contención y/o asistencia de las víctimas de violencia y de sus agresores, en las áreas de intervención específicas.
- d) Desarrollar políticas de difusión, sensibilización y concientización sobre el derecho a una vida libre de violencia para todas las personas, promoviendo el cambio cultural necesario.
- e) Impulsar y fortalecer mecanismos que permitan el registro estadístico de la violencia contra las mujeres, en todo el país para su seguimiento, evaluación, estudio e investigación.

Artículo 9.- Destinatarias / os del Plan Nacional de Acción. Son destinatarias / os del Plan la población en general, las mujeres en particular, y en especial las que son objeto de violencia por razones de género.

Serán también destinatarios / as quienes la ejercen, con el fin de modificar conductas y evitar la reincidencia.

Artículo 10.-Consejo Consultivo.- El Plan contará con un Consejo Consultivo ad honorem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y por organizaciones del ámbito académico especializadas en el estudio de la violencia contra las mujeres, que tendrá por función la de asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y las estrategias más adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia.

Artículo 11.- Facultades del Consejo Nacional de la Mujer .- El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los objetivos propuestos en Plan Nacional de Acción, deberá:

- a) Coordinar las acciones previstas en el presente programa, destinadas a la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
- b) Brindar asistencia a las mujeres víctimas de violencia y reeducación a quienes la ejercen, atribuyendo las responsabilidades correspondientes a cada área en forma articulada.
- c) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los servidores públicos del ámbito de la justicia, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales y demás sectores; la que

será brindada de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico sobre violencia de género para el reconocimiento de las causas y características particulares contra las mujeres, promoción de los cambios culturales tendientes a la eliminación de prejuicios y cualquier tipo de práctica basada en la discriminación y de estereotipos que será común para el personal de todos los servicios.

d) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada en materia de violencia de género e implementación de las directivas de la Convención Interamericana Para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer destinado a legisladores-as y asesores-as.

e) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios privados que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres.

f) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones en modelos de abordaje de la prevención y atención, la creación de sistemas de atención y derivación interinstitucional y protocolos para los distintos niveles.

g) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación .

h) Promover programas de prevención y asistencia para grupos o colectivos de mujeres vulnerables: pobres, mujeres privadas de libertad, migrantes, rurales, de los pueblos originarios, afectadas por el virus del SIDA, entre otros

i) Implementar una línea telefónica gratuita en forma articulada con las provincias a través de Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a sus víctimas.

j) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres; informar sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza; instalar la condena social a toda forma de violencia de género; previendo especialmente la accesibilidad para las mujeres con discapacidad y el respeto por la diversidad cultural, comprometiendo especialmente a los varones. Publicar materiales de difusión, para apoyar las acciones de las distintas áreas.

k) Convocar y poner en funciones al Consejo Consultivo.

l) Celebrar convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos del presente Plan.

Artículo 12.- Políticas Públicas. El Estado implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional, las jurisdicciones locales y las organizaciones de la sociedad civil:

1.- Ministerio de Salud

- a) incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres dentro de los programas de salud integral de la mujer.
- b) diseñar protocolos específicos de detección de la violencia intrafamiliar y sexual contra las mujeres para los servicios de salud de interés prioritario: atención primaria de salud emergencias, obstetricia y ginecología, traumatología, pediatría, salud mental.
- c) promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la utilización de protocolos de atención y derivación.
- d) promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud en el Consejo Federal de Salud, respetando las características locales.
- e) impulsar la aplicación de un registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres que coordine los niveles nacionales y provinciales.
- f) asegurar la asistencia especializada de los hijos/as testigos de la violencia que hayan manifestado afectación.
- g) promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u Organismo que lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia a la violencia contra las mujeres.
- h) promover programas de prevención y asistencia en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones.

2.- Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Seguridad

2.1 Área de Seguridad

- a) Fomentar el desarrollo de servicios policiales que en forma interdisciplinaria brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales.
- b) El Consejo de Seguridad Interior elaborará los procedimientos básicos para diseñar protocolos específicos para la actuación policial a fin de dar las respuestas adecuadas y minimizar la ocurrencia de situaciones de victimización secundaria.
- c) Promover la articulación de los servicios de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y con las policías locales.
- d) Sensibilizar a los cuadros policiales en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos humanos.
- e) Capacitar al personal policial y equipos de apoyo a la mujeres que padecen violencia, con el fin de asegurar el cumplimiento rápido y efectivo de sus derechos y evitar la revictimización.
- f) Incluir en los programas de formación de la policía asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y

sobre las características y atención de casos de violencia basada en el género.

2.2 Área de Justicia

- a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia mediante la puesta en marcha y/o el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico para el ejercicio de sus derechos y/o el patrocinio jurídico gratuito.
- b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, otras instituciones y organismos no gubernamentales para ampliar la asistencia jurídica especializada y gratuita.
- c) Promover la coordinación con equipos asistenciales para lograr criterios unificados de evaluación de gravedad y riesgo de las situaciones de violencia para la elaboración de informes judiciales.
- d) Promover la articulación y cooperación de las distintas áreas involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales
- e) Promover la elaboración de un protocolo de atención de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran otro tipo de tratamiento.
- f) Promover la instrumentación de mecanismos ágiles y expeditivos de resolución.
- g) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación incentivando en los distintos niveles del Poder Judicial, la capacitación específica referida al tema.
- h) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho.

2.3 Área de Derechos Humanos

- a) Promover la inclusión de la problemática de violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.

3.- Ministerio de Desarrollo Social

- a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia.
- b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de mujeres víctimas de violencia de género en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia
- c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en proceso de asistencia por violencia de género
- d) Apoyar proyectos y/u otorgar subsidios para la creación y puesta en marcha de refugios u otras formas de atención a la emergencia destinados a mujeres y al cuidado de las/los hijas/os,

4- Ministerio de Educación

- a) Articular con las áreas educativas a través del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos curriculares de abordajes con enfoque de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la vigencia de los derechos humanos en las relaciones familiares, la promoción del buen trato y deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos.
- b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia de género.
- c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las niñas/os y adolescentes que se vean afectadas por un cambio de residencia derivada de un acto de violencia.
- d) Las medidas propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación.
- e) Promover la incorporación de la temática de la violencia de género en las currículas universitarias, en los niveles de grado y post grado.

5.-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

- a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para promover la igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres, la no discriminación en el acceso: convocatoria y selección; la carrera: promoción y formación; y la permanencia, así como el derecho a una igual remuneración por igual tarea.
- b) Promover a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito laboral en empresas y sindicatos.
- c) El ámbito responsable de estas acciones dentro del Ministerio de Trabajo será el Área de Género y Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral o quien realice sus funciones.

6.- Jefatura de Gabinete de Ministros-Secretaría de Gabinete y Gestión Pública.

- a) Impulsará programas específicos que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la administración pública e implementen los principios de igualdad de oportunidades en el empleo público y la no discriminación.
- b) A través del Consejo Federal de la Función Pública promoverá acciones semejantes en las jurisdicciones locales.

7.-Secretaria de Medios

- a) Impulsar mensajes y campañas desde el Sistema Nacional de Medios para la difusión, sensibilización, concientización dirigidas a la población en general y en particular a las mujeres sobre el derecho de las mismas a una vida libre de violencia.

- b) Promover en las empresas de medios de comunicación el tratamiento de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres.
- c) Brindar capacitación a periodistas y agentes de medios de comunicación en violencia contra las mujeres.
- d) Alentar por medio de estímulos la eliminación del sexismo en la información.
- e) Comprometer al sector privado en la lucha contra la violencia de género como un tema prioritario de responsabilidad social empresarial.
- f) Promover la inclusión de la temática en las currículas de formación de las carreras de periodismo, comunicación y publicidad.

8.- Ministerio de Defensa

- a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a la Convención contra toda Forma de Discriminación contra la Mujer.
- b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas para el ingreso, promoción y permanencia en ese cuerpo.
- c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos humanos.
- d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género.

Artículo 13.- Seguimiento del Plan Nacional de Acción- La Autoridad de Aplicación realizará el seguimiento de la implementación del Plan y de su evaluación se informará anualmente al Poder Legislativo a fin de promover las reformas a la legislación vigente.

Capítulo II

Artículo 14. Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Consejo Nacional de la Mujer.

TÍTULO II

Procedimientos

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 15.- Derechos y Garantías Mínimas en los Procedimientos. La garantía de acceso a la justicia incluye el derecho de toda mujer a:

- a) La gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico.
- b) Obtener una respuesta oportuna y efectiva.
- c) Ser oída personalmente por el Juez.
- d) Recibir protección judicial urgente y preventiva, cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en esta ley.

- e) La protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones.
- f) Participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa.
- g) Recibir un trato acorde con su condición de afectada, evitando la revictimización.
- h) La amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos.
- i) Contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el cumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

Artículo 16.- Instancia Previa - Los Ministerios dependientes del Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán crear instancias y procedimientos previos a la judicial tendientes a permitir el acceso al cumplimiento de esta ley.

Del mismo modo cada Provincia garantizará en todas las localidades instancias y procedimientos con el objetivo de permitir el acceso al cumplimiento de esta ley, ya sea por medio de los Municipios, Delegaciones de los Consejos o áreas Provinciales de la Mujer, Juzgados de Paz, u organismos que estimen conveniente.

Dichas disposiciones no invalidan ni supeditan la instancia judicial pertinente

Los Estados Provinciales dictarán su propio procedimiento judicial o adherirán al consignado en el Capítulo II del presente título.

Capítulo II

PROCEDIMIENTO

Artículo 17.- Ámbito de aplicación. El presente capítulo es de aplicación ante los juzgados nacionales con asiento en la Capital Federal.

Artículo 18.- Características. El procedimiento será gratuito y sumarísimo.

Artículo 19.- Denuncia. La denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier Juez/a o ante el Ministerio Público en forma oral o escrita, no requiriendo patrocinio letrado el que será necesario para la sustanciación del juicio.

Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.

Artículo 20.- Competencia. Entenderá en la causa el juez/a que resulte competente en razón de la materia según las modalidades de violencia de que se trate.

Aun cuando fuera incompetente el juez/a podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.

Cuando de la denuncia surja la eventual comisión de un delito, la misma se elevará al Juez/a competente en materia penal

disponiéndose, previamente, las medidas preventivas que el caso amerite.

Artículo 21.- Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiera la posible existencia de conductas violentas contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial pertinente dentro de las 24 horas.

Artículo 22.- Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser efectuadas:

a) por la mujer que se considere afectada, sin restricción alguna o por su representante si correspondiere.

b) cuando el interés social lo justifique, cualquier ciudadana/o podrá formularla, siempre que se encuentren involucradas niñas o adolescentes, mujeres discapacitadas, adultas mayores u otras personas mayores de edad, que por su condición física o psíquica no pudieran hacerla.

En todos los casos se presume la buena fe del denunciante, salvo prueba en contrario.

c) Será obligatoria la denuncia para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomen conocimiento directo o indirecto de que por su condición, una mujer sufre violencia. La omisión será sancionada bajo las disposiciones referidas al incumplimiento de los deberes del funcionario público.

En los casos de violencia sexual la mujer, que la haya padecido, es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la denuncia fuera efectuada por un tercero se citará a la mujer afectada para que la ratifique o rectifique en 24 horas, tomando los recaudos para evitar que la causa tome estado público. En el supuesto de ser menor de edad podrá hacerla cualquier persona que tome conocimiento de la situación.

Artículo 23.- Asistencia protectora. En toda instancia del juicio se admitirá la presencia de una/un acompañante solidario, como ayuda protectora ad honorem, siempre que la afectada lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psíquica de la misma.

Artículo 24.- Medidas Preventivas. Durante cualquier etapa del proceso el juez/a interviniente, en caso de urgencia evidente podrá de oficio o a petición de parte adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas.

I - EN CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA:

a) Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad sobre la misma.

- b) Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio o a los lugares de habitual concurrencia de la víctima y sus familiares.
- c) Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la víctima o los restantes miembros del grupo conviviente.
- d) Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor.
- e) Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos.
- f) Ordenar el acompañamiento de la víctima a su domicilio para retirar los efectos personales.
- g) Proveer las medidas conducentes a brindar a la víctima y al grupo familiar, cuando así lo requieran, asistencia médica y psicológica, a través de los organismos públicos y entidades no gubernamentales con formación especializada en la prevención y atención de la violencia y asistencia a la víctima.
- h) En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen la materia.
- i) Establecer un régimen de tenencia de los hijos y visitas conformes con las reglas legales establecidas.
- j) Otorgar la guarda de quien padece violencia en el supuesto que fuere menor, respetando el derecho a ser oída, a quien considere idóneo para tal función, si esta medida fuera necesaria para su seguridad psicofísica y hasta tanto se efectúe un diagnóstico de la situación.
- k) Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas de los hijos/as menores, si fuere necesario.
- l) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos/as.
- m) Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el decomiso de las que estuvieren en su posesión.
- n) Disponer el inventario de los bienes de la sociedad conyugal y de los propios de la persona afectada, en caso de mediar vínculo matrimonial entre el presunto agresor y la víctima.
- o) Ordenar al presunto agresor la interdicción de enajenar, disponer, ocultar o trasladar bienes comunes o propios de la persona agredida.
- p) Otorgar el uso exclusivo, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa a la persona agredida.
- q) Disponer la instalación de medidas de seguridad (rejas, cerraduras, etcétera) en el domicilio de la víctima, ordenando al presunto agresor el pago de los gastos correspondientes.

II - OTRAS MODALIDADES DE VIOLENCIA-

Informar, al organismo o institución donde se produjo la violencia, a fin de que se labren las actuaciones correspondientes con el objeto de preservar la relación laboral, educativa o social de la mujer que padece violencia

Artículo 25 Facultades del Juez/a. La enunciación del artículo precedente no es de carácter taxativo, pudiendo el/la juez/a dictar medidas autosatisfactivas.

El/la juez/a podrá, bajo resolución fundada, establecer el tiempo de duración de las medidas dispuestas, teniendo en cuenta el peligro que pudiera correr la persona agredida, la gravedad de los hechos, la continuidad de los mismos y los demás antecedentes que se pongan a su consideración. También podrá establecer medidas preventivas para casos de violencia ocurridos en otros espacios, tanto del ámbito público como del privado.

Artículo 26 .- Audiencia. El/la juez/a fijará una audiencia, que tendrá por objeto conocer los actos u omisiones que se denuncian.

La misma se deberá tomar personalmente, escuchando a las partes por separado, bajo pena de nulidad, dentro de las cuarenta y ocho horas de ordenadas las medidas enunciadas en el artículo 24, o si no se adoptara ninguna de ellas, de conocer los actos u omisiones.

En ningún caso podrán autorizarse instancias de mediación o conciliación.

Artículo 27 Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a requerirá informe/s a un equipo interdisciplinario, para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer, la situación de peligro e indicadores de riesgo, y el medio social y ambiental de la mujer afectada por la violencia y del presunto agresor. El informe debe ser remitido en un plazo de cuarenta y ocho horas, a efectos de que el/la juez/a pueda aplicar, interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el artículo 24.

No será requerido dicho informe cuando el/la jueza no lo considere necesario por haber acompañado la denunciante un diagnóstico producido por profesionales o instituciones públicas o privadas idóneas en violencia contra las mujeres.

Las partes podrán proponer otros informes técnicos de los referidos en el presente artículo.

Artículo 28- Prueba. Principios y medidas - El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia.

Regirá el principio de obtención de la verdad material, debiendo el/la juez/a hacer recaer la carga de la prueba sobre el supuesto agresor, salvo que entienda que la víctima se encuentra en mejores condiciones de acreditar los hechos alegados.

Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

Artículo 29. Sanciones. Ante el incumplimiento por parte del agresor de las resoluciones judiciales o la reiteración de hechos probados de

violencia, el/la juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones, según las circunstancias del caso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda:

- a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido.
- b) Multa graduable de entre 2 (dos) y 50 (cincuenta) salarios mínimo, vital y móvil a favor de la mujer que haya padecido la violencia.
- c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas y a superar las consecuencias
- d) Realización de trabajos comunitarios en los lugares y por el tiempo que se determine.
- e) Comunicación del incumplimiento de las órdenes impuestas a las dependencias dónde trabaje el agresor, a la asociación profesional y al sindicato del cual dependa.

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.

Artículo 30- Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables, dentro del plazo de tres días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan o rechacen medidas preventivas urgentes se concederá con efecto devolutivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas, se concederá con efecto suspensivo.

En todos los casos, la apelación se otorgará en relación.

Artículo 31.- Seguimiento. Durante el trámite de la causa y después de la misma, por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención de trabajadoras/es sociales, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

Artículo 32.- Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

Artículo 33.- Remisión al juez penal. En todos los supuestos en los que, de los hechos investigados, resultase un delito de acción pública y luego de adoptar las medidas preventivas urgentes previstas en el artículo 24 se remitirán las actuaciones respectivas al fuero penal.

Igual trámite se dará en los casos de los delitos dependientes de instancia privada cuando la parte así lo requiera.

Título III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 34.- Obligaciones de los/as funcionarios/as. Los funcionarios / as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro funcionario/a público/a a quienes acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:

Los derechos que la legislación le confiere a la mujer afectada, y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención.

Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso.

Cómo preservar las evidencias.

Artículo 35.- Registros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros socio-demográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil y profesión u ocupación de la mujer afectada, así como del agresor; vínculo existente con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.

Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho Registro.

El acceso a los registros requiere previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes, pudiendo tener acceso a ese dato sólo a requerimiento judicial y por motivos fundados.

La Corte elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, características de quienes ejercen o padecen violencia, modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, tipo y cantidad de sanciones aplicadas.

Artículo 36.- Colaboración de organizaciones públicas o privadas. Los/las jueces/juezas podrán solicitar o aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de las mujeres.

Artículo 37.- Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley están exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y de cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en materia de costas.

Artículo 38.- Normas Supletorias. Será de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.

Título IV

Disposiciones Finales

Artículo 39.- Cláusula Presupuestaria. Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley serán previstas

anualmente en la ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional.

Artículo 40. Comuníquese al Poder Ejecutivo .

Silvia E. Gallego. –

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El 9 y 10 de Julio de 2008 en Caracas, Venezuela, se dio a conocer el Informe Hemisférico de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA que fuera elaborado por el Comité de Expertos/as del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para (MESECVI).

Recordemos que dicha Convención fue ratificada por nuestro país en su calidad de Estado Parte, el 13 de marzo de 1996 por ley 24.632.

Dicho informe da cuenta que existen logros importantes a la hora de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y también reconoce que hay mayor conciencia de los Estados de la región, incluida la Argentina. Sin embargo, por la persistencia del problema, creemos que es imprescindible encarar la temática con una legislación que promueva la visibilización y que garantice acelerar los cambios necesarios para hacer efectiva la eliminación de este flagelo. Si bien se ha hecho mucho, también mucho es el camino que falta recorrer, para lograr que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea realmente efectivo.

Debemos acordar que la violencia contra las mujeres, puede considerarse como un verdadero símbolo del ejercicio del Poder, como una manifestación de la discriminación, de las situaciones de desigualdad o lo que es lo mismo, del no respeto a la igualdad entre varones y mujeres, por ello es considerado, una violación a los Derechos Humanos, y hoy que se puede ver con más claridad, no sólo su existencia sino lo devastador de sus efectos, en definitiva podemos decir que tiene la connotación de una verdadera alarma social.

La violencia contra las mujeres revela una desigual distribución del poder, reforzando así la desigualdad y la subordinación social de las mismas y favoreciendo que éstas se transformen en las destinatarias de la violencia estructural y coyuntural.

Es en ese contexto que este Senado no puede ser ajeno al tema, “las leyes son hijas del tiempo” y si lo consideramos como uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la dignidad y la no discriminación, proyectos de esta naturaleza, imponen su urgente tratamiento.

Los derechos referidos precedentemente están consagrados en la Constitución Nacional y la legislación que se propone en el presente Proyecto pretende no sólo que los mismos se hagan efectivos, sino

que busca que se cumpla con las Convenciones Internacionales que el Congreso ha ratificado, como así también atender las recomendaciones de Organismos Internacionales, en el sentido de proporcionar respuestas globales a la violencia que se ejerce contra las mujeres. Esta violencia abarca la que se da en relaciones de pareja, conocida como familiar o doméstica, pero además todo tipo de violencia contra la mujer, cualquiera fuera el ámbito en que se produzca, sea laboral, institucional, social, etc.-

El diario Clarín en el mes de setiembre del 2008 informa que, en lo que va del año, al menos 132 mujeres fueron asesinadas en la Argentina a causa de la violencia de género, lo que implica una muerte cada 38 horas. De dichas mujeres muertas, 22 eran niñas o adolescentes. Muchas fueron también violadas. La inmensa mayoría de sus asesinos fueron su marido o ex marido, su compañero o ex compañero, su amante, su novio o su ex novio.

En los fundamentos al Proyecto de Ley sobre el tema, presentado recientemente en la Provincia de Santa Fe, se da cuenta de las siguientes referencias: “de acuerdo a datos suministrados por el BID se estima que el 25% de las mujeres argentinas es víctima de violencia y que el 50% pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida. En una de cada cinco parejas hay violencia. En el 42% de los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo realiza su pareja. El 37% de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva veinte años o más soportando abusos de este tipo. Según datos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el 54% de las mujeres golpeadas están casadas”.

La alarmante información explica el motivo de que cuando el informe llegó a nuestras manos y analizamos las recomendaciones del Comité de Expertas/os (CEVI), no tuvimos dudas en elaborar el presente proyecto y aportar al compromiso que tiene este Senado para adecuar medidas indispensables a la hora de implementar las recomendaciones del organismo internacional, con el objetivo de hacer efectiva la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, preocupación de otras legisladoras ya planteada en distintos proyectos que abordan el tema que datan de años anteriores a dichas recomendaciones.

Para su elaboración tratamos de aprovechar nuevas legislaciones dictadas en Latinoamérica, como por ejemplo la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela que data del 2007 y entre otros antecedentes normativos tomamos también en cuenta la legislación Española a la que consideramos muy avanzada en la materia.

Este proyecto de ley no sólo viene a reforzar nuestro compromiso como Estado Parte de la Convención de Belém Do Pará, sino que el informe referido nos ha puesto en blanco y negro los obstáculos aún existentes para el logro de los objetivos fundamentales, que respaldan el Derecho de las Mujeres en este siglo XXI, que no es ni más ni

menos que el de vivir definitivamente una vida sin violencia. Las recomendaciones del organismo internacional nos ha nutrido de elementos que pueden ser considerados como verdaderos indicadores y que sirvieron de base para su elaboración. Por ello estamos absolutamente persuadidas que es necesario contar con una herramienta legislativa mas efectiva que sea un verdadero aporte a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el territorio Argentino.

Decíamos y es cierto que se debe reconocer que nuestra sociedad y el Estado mismo ha adquirido mayor conciencia del problema, problema que durante siglos estuvo legitimado desde lo legal, desde el mundo jurídico, lo social, lo económico y sobre todo desde lo cultural, pero lo cierto es que aún hoy no se entiende cabalmente que la violencia contra las mujeres en sus distintos tipos o modalidades, se cometan en el ámbito público o privado, constituyen una violación a los Derechos Humanos.

El proyecto toma los ejes del informe y sobre todo hace hincapié en las recomendaciones, promoviendo la visibilización de los obstáculos, con el objeto de lograr las modificaciones y avances.

La violencia contra las mujeres que trata el presente proyecto es un campo en permanente proceso de construcción y reconstrucción, podríamos hablar de “violencia de género”, terminología que compartimos, pero no es la denominación que adoptamos en su título, por admitir que existen quienes lo rechazan o defienden con argumentos de distinta índole: lingüísticos o intelectuales y para evitar un debate donde muchas veces juegan emociones y pasiones que nos podrían distraer del verdadero problema. Para nosotros el concepto “género” es más político que gramatical, pensamos además que está consolidada su terminología a partir de la determinación de la ONU pactada en 1995 intentando buscar una definición común a nivel internacional que identifique claramente la desigual relación entre varones y mujeres, marcada históricamente. Por entender que el lenguaje es una convención, optamos por hablar de la “violencia contra las mujeres”.

La iniciativa se estructura con un TITULO PRELIMINAR, en cuyo artículo 1 se determina que, de ser aprobado, la ley que surja como consecuencia será “de orden público”. Más allá de los debates doctrinarios sobre este concepto, seguimos a Laurent, Salvat, Llambias, Lafaille para quienes toman a las disposiciones de “orden público” como principios fundamentales de la organización social y de allí su carácter de leyes imperativas al decir de Borda. Agrega dicho artículo que “ será de aplicación en todo el Territorio Nacional”.

Se desagrega en un primer Capítulo “Disposiciones Generales” que se refieren a su objeto, hace referencia a los Derechos Protegidos, define la violencia contra las mujeres, y a los Tipos y Modalidades en que se presenta la violencia. Se toman las referidas en la Convención mencionada en el artículo segundo y se desarrollan, optando por conceptualizaciones muy descriptivas cuya finalidad es aportar a la visibilización de las mismas.

Las Políticas Públicas se desarrollan en el Título I. Desde hace más de veinte años se vienen desarrollando Políticas Públicas en distintos niveles del Estado y la sociedad: legislación nacional y provinciales, programas, acciones y servicios que muestran una preocupación creciente de distintos actores respecto a este flagelo. Sin duda, han resultado insuficientes para prevenir y atender la violencia contra las mujeres debido a que, fundamentalmente, no hubo una respuesta global y multidisciplinar que diera cuenta de la naturaleza social, cultural y política de la violencia de género. Por ello es que en materia de Políticas Públicas se propone un Plan Nacional de Acción recogiendo en su contenido las recomendaciones del Comité de expertas/os referido.

Dicho Plan compromete a todos los Poderes del Estado, instalando con centralidad la problemática en la agenda gubernamental y social. Muchas de las medidas adoptan experiencias nacionales e internacionales como así también de otras iniciativas legislativas.

Propone un articulado con Principios Rectores que coloca en el logro de la igualdad y la no discriminación la forma para prevenir, asistir y erradicar la violencia contra las mujeres. La transversalidad de las políticas que se impulsan, la necesidad de invertir recursos del Estado, la garantía de atención integral y oportuna de quienes la padecen y a quienes la ejercen, como así el compromiso no sólo del Estado en esta lucha sino también involucrando de este modo a distintos sectores de la sociedad.

Entre los objetivos y medidas sectoriales que se incluyen podemos destacar las siguientes cuestiones: a) las acciones y políticas están centradas en la defensa de los derechos de las mujeres y su empoderamiento como claves para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; b) promueve procesos de transformación sistémicas en las instituciones y en el sistema de creencias; c) compromete a distintos actores de la sociedad. d) garantiza y obliga capacitaciones y formación permanente para todos los operadores que intervienen en el proceso de sensibilización, prevención y asistencia; e) garantiza procesos de monitoreo, evaluación y estudio de los distintos tipos y modalidades de la violencia de género y de las políticas públicas que deben aplicarse.

Tal cual plantea el Comité en el Informe Hemisférico en relación a la sección de Presupuesto Nacional, es “mínima la inversión que hacen los países de la región”. También dice “el apoyo económico que asignan los estados, a los diferentes programas y servicios para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, constituye la garantía de su implementación y continuidad. Es también una muestra importante del compromiso estatal y de la voluntad política de los gobiernos en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres”. Por esta razón se incluye el artículo 39.

El Título II se refiere a “los Procedimientos” y en su capítulo I determina una serie de derechos y garantías mínimos que se deben respetar a la hora de acceder a la justicia como efectivos derechos de las mujeres.

Se establece como novedad, una instancia optativa previa al judicial con el objeto de permitir el acceso al cumplimiento de esta ley, pensamos aquí en el interior del país, donde se encuentran alejados por considerables distancias los centros judiciales. El Estado Nacional, la Ciudad Autónoma o cada Provincia determinará el procedimiento de las mismas, de ninguna manera ello invalida o reemplaza la instancia judicial, muy por el contrario su existencia debe servir para hacer operativo el texto legal, que se propone en el presente proyecto, respetando así recomendaciones del Comité de Expertas/os.

En el Capítulo II del Título II se establece procedimiento judicial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será gratuito y sumarísimo, por los mismos fundamentos que se dieron cuando se aprobó en 1994 la ley sobre violencia doméstica.

Asimismo en el artículo 21 dispone que varias instituciones sean las encargadas de receptar las denuncias de violencia contra las mujeres con el objeto de evitar demoras, promover mayor eficacia y apoyar a quienes padecen este flagelo.

Respecto a la competencia, entendemos que es importante que se comprometan los fueros correspondientes al ámbito donde se produce la violencia contra las mujeres. Nos parece importante su intervención ya que la capacitación que requerirá será de utilidad para lograr una mayor visibilidad de la temática en el ámbito judicial en su conjunto.

Cabe destacar que se promueve la capacitación de operadores de la justicia para su adecuada aplicación y para que sus decisiones estén acorde con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos y violencia contra las mujeres.

Como otra forma de garantizar el cumplimiento de lo enunciado en el presente proyecto de ley el artículo 29 determina obligaciones a funcionarias/os quedando en evidencia las consecuencias de su incumplimiento.

Determina un mecanismo para el supuesto que al concurrir al servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiera la posible existencia de conductas violentas contra la mujer corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las 24 horas.

Se recoge la figura de la asistencia protectora que tomamos de la ley de violencia doméstica de la Provincia de La Pampa, por haber reconocido en la práctica lo trascendente de esa figura, ya que las situaciones de violencia producen miedo, intimidación, baja autoestima, etc. y el acompañamiento solidario la hace sentir protegida, y en mejores condiciones para defender sus derechos.

Contempla el proyecto medidas Preventivas en forma pormenorizada las referidas a la violencia doméstica, para ello hemos tomado experiencias de distintos distritos del país, propuestas tanto desde instituciones gubernamentales como no gubernamentales. No ocurre lo mismo para las otras modalidades de violencia contra la mujer, donde encontramos mayores limitaciones para implementarlas.

Hemos hablado también de medidas autosatisfactivas, por considerarlas soluciones jurisdiccionales urgentes y autónomas, es decir que no depende su vigencia y mantenimiento de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal como requieren las medidas cautelares. Si la característica más importante de esta medidas es que se trata de un proceso urgente, donde concurre un peligro inminente y la falta de satisfacción del requerimiento solicitado ocasione un daño, dónde además, la medida dispone de autonomía ya que la pretensión es independiente y no accesoria al proceso principal, entendemos que corresponde hablar de medidas autosatisfactivas y no cautelares. Como alternativas podrían adoptarse indistintamente algunas de las denominaciones que ha tenido en cuenta la jurisprudencia como “medidas cautelar autónoma” o “la cautela satisfactiva”, optamos por la denominación que consideramos más común y que así la han denominado algunos proyectos de reforma al Código de Procedimientos.

Optamos por las medidas autosatisfactivas porque son autónomas, tienen un fin en sí mismo y se agota en su despacho favorable, mientras que las cautelares son accesorias, y encuentran su razón de ser en el proceso principal, siendo un medio tendiente a garantizar la eficacia de la sentencia definitiva. Analizando ambas, las primeras se ajusta más a los fines del proyecto.

Con relación al artículo 28, el juez podrá invertir la carga de la prueba. Quien invoca los hechos alegando un derecho de su pretensión es por principio general del Derecho Procesal, sobre quién recae la carga de la prueba. Sin embargo, en especial el Código Procesal Laboral, en materia de carga de la prueba, adopta el criterio de que sea el actor quien debe probar los hechos constitutivos y el demandado los extintivos o impeditivos. Ello es así por que la norma procesal tiene espíritu protectorio, tratando de lograr un equilibrio entre las partes ya que es reconocida la desigualdad existente entre patrón/a y trabajador/ra.

Sabido es lo concatenado que está la discriminación con la violencia, como así también que uno de los problemas que presentan ambas temáticas es relacionado a la dificultad probatoria. Es cierto que la ley 23.592 que sanciona las conductas discriminatorias no ha previsto un protocolo específico, ni tampoco presunciones a favor de quienes así se sienten y acuden a la justicia, pero sin embargo en el ámbito laboral existen presunciones legales incluso en la ley de Contrato de Trabajo. Consideramos conveniente una norma explícita en ese sentido sobre todo teniendo en cuenta el espíritu de los Tratados Internacionales y

las interpretaciones realizadas por Tribunales Internacionales de Justicia. Las nuevas corrientes de estudio sobre discriminación, lograron imponer sus criterios y así se llegó a la modificación de varias disposiciones legislativas en la materia como la Civil Rights Act de EEUU (1991), la ley de procedimientos laborales de España de 1990, y en igual sentido podemos mencionar las directivas de la Comunidad Europea.

En nuestro país hay casos donde la justicia decidió invertir la carga de la prueba en supuestos de mobbing o acoso laboral, ejemplo de ello la sala VII de la Cámara Laboral en la causa “ Rybar, Héctor c/ Banco de la Nación Argentina s/ despido”, donde el tribunal entendió que había indicios suficientes “ conducentes a una presunción de discriminación” que había padecido el denunciante, o sea que no tuvo que acreditar las persecuciones y presiones ya que se entendió que la demandada (la empresa) estaba en mejor posición para demostrar que no las hubo.

El artículo 29 establece sanciones ante el incumplimiento por parte del agresor en determinadas circunstancias, que van desde una simple advertencia a otras más severas. Por el inciso c) el juez puede obligar a quien ejerce o haya ejercido violencia contra la mujer, a concurrir para su asistencia a programas tendientes a lograr la modificación de la referida conducta y superar sus consecuencias. Este criterio si bien es objetado por algunos profesionales, la práctica ha demostrado que en algunos casos ha dado resultado positivo lo que nos habilita para considerarlo.

El artículo 31 nos habla de la necesidad del seguimiento, por la índole de la complejidad del tema, por ser la violencia contra la mujer una conducta aprendida, culturalmente aceptada durante mucho tiempo, que se sustentó en el modelo patriarcal de la sociedad, consecuentemente el seguimiento para lograr su erradicación es fundamental.

Con relación a la reparación que da cuenta el artículo 32, hoy ya es común reclamos de esta naturaleza en los tribunales del país. Sabemos que hay un debate que cuestiona el concepto, aduciendo que son reparaciones adicionales en caso de discriminación, mobbing o acoso laboral y que ello conspira con la seguridad jurídica y por sobre todo desalienta las inversiones. Con relación a ello entendemos que las limitaciones de carácter tarifario de las indemnizaciones dadas por la legislación laboral no pueden convertirse en un manto de inmunidad para el empleador.

Plantea el proyecto la necesidad de Registros socio-demográficos en el ámbito judicial, con mención de indicadores mínimos, en virtud de la necesidad de contar con información fidedigna y lo que se estima conveniente que a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se elaboren estadísticas de acceso público, promoviendo de esta manera la difusión y como corolario para contar con elementos serios

de estudio y evaluación de la evolución de la lucha sobre la violencia contra las mujeres.

Por el artículo 36 se da cabida al instituto del “amicus curiae”. Se trata de presentaciones que pueden realizar, a pedido del juez o en forma espontánea personas ajenas al litigio pero con un justificado interés en la resolución final.

Es una figura clásica, proviene del derecho romano. En un primer momento se la presentaba en instancias internacionales, y así es que, de la mano del Derecho Internacional, se la fue adoptando en varios países, siempre tratándose de causas en las que se debe decidir judicialmente sobre Derechos Humanos.

A nivel nacional no hay legislación vigente que de pautas sobre este instituto en términos generales, sin embargo, hay leyes que lo receptan, ejemplo de ello es la 24.488 sobre Inmunidad de Jurisdicciones que en su artículo 7 faculta, “para el caso de demandas contra un Estado extranjero, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para que pueda expresar su opinión...” en su carácter de “un amigo del tribunal”. Por otra parte se advierte su inclusión en la ley 402 sancionada el 4 de junio del 2000, Ley de Procedimiento ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires.

Además ya ha sido receptado según da cuenta la jurisprudencia por ejemplo, la Cámara en lo Criminal Nº 2 de la Provincia de La Pampa.

Para finalizar, queremos señalar que éste no es un proyecto exclusivamente para las mujeres, sino que es un aporte para una sociedad más justa y equitativa.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares den su voto positivo a esta nueva herramienta legal en la lucha contra la violación a los derechos humanos de las mujeres.

Silvia E. Gallego. –

(IX)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLE
SUS RELACIONES INTERPERSONALES

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

La presente ley tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en el que ésta desarrolle sus relaciones interpersonales y garantizar que se brinde asistencia integral a las víctimas en las áreas estatales competentes que realicen actividades programáticas destinadas a la población y en los servicios especializados de violencia.

Artículo 2.- Derechos protegidos

Esta ley adecua y garantiza todos los derechos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y en especial:

- a. a la vida, a la seguridad personal y a la salud;
- b. a la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial;
- c. a la dignidad de las personas;
- d. a la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;
- e. al trato respetuoso de las mujeres víctimas de violencia, evitando todo acto u omisión que produzca su victimización secundaria.

Artículo 3.- Definición

A los efectos de la presente ley, se entenderá como violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y en el que desarrolle sus relaciones interpersonales cualquier acto u omisión por medio del cual se provoque sufrimiento físico, sexual o psicológico, directa o indirectamente, a través del engaño, la seducción, la amenaza, la coerción, la intimidación, la persecución o la vigilancia constante o frecuente o cualquier otro medio, sobre cualquier mujer en el ámbito familiar, con el objeto o a efectos de intimidarla, castigarla o humillarla, mantenerla dentro de los roles sexuales estereotipados, o negar su dignidad humana, autodeterminación sexual, integridad física, mental o moral o socavar la seguridad de su persona, su respeto a sí misma o su personalidad o disminuir sus capacidades físicas o psicológicas, o producirle daños a los bienes que integran su patrimonio, el de sus familiares o allegados.

Quedan comprendidos los actos u omisiones enunciados en el párrafo anterior perpetrados contra mujeres mayores de 18 años por cónyuges, convivientes, ex-cónyuges, ex-convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos o afines, novios, padres de un hijo en común y otras relaciones interpersonales en los términos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Artículo 4.- Tipos

Quedan en la definición del artículo precedente los siguientes tipos de violencia contra la mujer:

- a. Violencia doméstica: Toda acción u omisión cometida sin importar el espacio físico donde ocurra, que directa o indirectamente, dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual o patrimonial, la libertad, comprendida la libertad reproductiva, o el

derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Para la configuración de hechos de violencia doméstica no es requisito la convivencia con la víctima.

b. Violencia física: Toda conducta que directa o indirectamente, ya sea por acción u omisión, produzca un daño o dolor físico sobre la víctima, y toda otra forma de maltrato que afecte su integridad física o el de sus familiares o allegados.

c. Violencia psicológica: Toda conducta que directa o indirectamente, ya sea por acción u omisión, ocasione daño emocional, degrade o controle las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de las mujeres, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo; tales como las conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante o frecuente, aislamiento, amenaza de alejamiento de los hijos, celos excesivos, burla, desvalorización y crítica permanente, ridiculización, indiferencia, abandono, hostigamiento, acoso, intimidación y chantaje, entre otras conductas.

d. Violencia sexual: Toda conducta, amenaza o intimidación que afecte la integridad sexual o vulnere el derecho de las mujeres a decidir voluntariamente su conducta sexual, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital.

e. Violencia contra la libertad reproductiva: Toda conducta que directa o indirectamente, ya sea por acción u omisión, vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos o el intervalo entre los nacimientos.

f.. Violencia patrimonial: Toda conducta que directa o indirectamente, ya sea por acción u omisión, implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos de la víctima que integren su patrimonio, el de sus familiares o allegados, incluyendo la privación maliciosa de medios económicos indispensables para una vida digna.

Artículo 5.- Aplicación

Quedan comprendidos en la presente ley los actos u omisiones perpetrados contra mujeres mayores de 18 años.

Las niñas y las adolescentes menores de 18 años víctimas de situaciones de violencia, tienen reconocidos todos los derechos consagrados en la Convención Sobre los Derechos del Niño y por la Ley 26.061 que indica los mecanismos para la adopción de las medidas de protección integral de derechos tanto las ordinarias como las excepcionales.

Las mujeres que tengan entre 18 y 20 años tienen reconocidos por el Decreto Reglamentario del PEN 415/05. Art. 2 el acceso a las políticas públicas establecidas por la ley 26.061 -

Artículo 6.- Derechos y Garantías Mínimas de Procedimientos Judiciales y Administrativos

Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres en cualquier procedimiento judicial o administrativo que las afecte, además de todos los derechos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y la Constitución Nacional y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

- a. La garantía de acceso a la justicia, la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico por un profesional especializado;
- b. Obtener una respuesta oportuna y eficaz;
- c. Ser oída personalmente por el juez en todas las instancias del proceso judicial y ante la autoridad administrativa competente en políticas y programas para la mujer cada vez que lo solicite;
- d. A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte.
- e. Recibir protección judicial urgente y preventiva, cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 2º de esta ley;
- f. La protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;
- g. Participar activamente en el procedimiento;
- h. Recibir un trato acorde con su condición de afectada y no ser nuevamente victimizada;
- i. Disponer la mayor libertad para probar los hechos denunciados, aceptando todo tipo de testigos y las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia definidos en el artículo anterior;
- j. Contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios públicos por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

TITULO II

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS BASICOS PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS QUE DESARROLLE SUS RELACIONES INTERPERSONALES

Artículo 7.- Obligaciones de los poderes e instituciones del Estado

Los poderes e instituciones del Estado adoptarán todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y adoptarán todas las medidas necesarias e integradas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito donde la mujer se desarrolle, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables; garantizando la protección y asistencia integral de las víctimas de la violencia, el acceso a soluciones justas y eficaces, inclusive la reparación de los daños causados y otros medios de compensación o indemnización, y la rehabilitación de los agresores.

Artículo 8.- Autoridad Competente

El Consejo Nacional de la Mujer es el organismo rector de las políticas públicas y los programas de prevención y asistencia destinados a

tratar la violencia contra las mujeres en el ámbito donde desarrollen sus relaciones interpersonales

Artículo 9.- Funciones del Consejo Nacional de la Mujer.

- a. Diseñar, planificar, capacitar y realizar el monitoreo y seguimiento de las políticas y programas de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres en el ámbito donde desarrolle sus relaciones interpersonales.
- b. Diseñar y coordinar los criterios generales que tendrán los Ministerios y Secretarías de Estado que aborden planes de prevención y asistencia a la mujer en situaciones de violencia a partir de un abordaje integral, interdisciplinario, intersectorial e interjurisdiccional.
- c. Asistir técnicamente a las jurisdicciones en el diseño, monitoreo, evaluación y capacitación de los programas destinados a prevenir y asistir violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrolle sus relaciones interpersonales.
- d. Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de situaciones de violencia.
- e. Diseñar e implementar un Registro Único de situaciones de violencia contra la mujer en el ámbito en que desarrolle sus relaciones interpersonales, en el que se establezcan los datos e indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los fines específicos.
- f. Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones, los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados -como mínimo- por nombre, edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la víctima y el victimario, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas al victimario, que deben ser aprobados en el marco de los Consejos Federales que tengan competencia en la materia, independiente de los datos e indicadores que cada jurisdicción defina de acuerdo sus necesidades, realidad social y los fines que le son propios.
- g. Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores que integren los Registros que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios.
- h. Analizar y difundir los datos estadísticos y resultados de las investigaciones periódicamente a fin de monitorear y adecuar las políticas.
- i. Diseñar, aprobar e implementar los protocolos específicos de detección temprana y asistencia a la víctima para su aplicación en todos los programas.
- j. Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa que disponen las mujeres que son víctimas de la violencia tanto en la instancia nacional, provincial y municipal.
- k. Promover la participación activa de las organizaciones públicas y de la sociedad civil especializadas en la temática de la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrolla sus relaciones interpersonales.

l. Establecer y mantener un registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia regulada por esta ley en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las víctimas y la rehabilitación de los agresores.

m. Coordinar, a través de los colegios y asociaciones de profesionales, la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres

n. Promover el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas.

o. Fomentar la incorporación de las mujeres en igualdad de oportunidades y trato en la vida social, laboral, económica y política, con el fin de garantizar su autonomía.

Art. 10.- Lineamientos básicos programáticos

El Estado Nacional deberá promover y fortalecer institucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios de asistencia médica, psicológica, social y legal a las mujeres víctimas de violencia y a los victimarios a partir de las siguientes líneas programáticas:

1. Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir el problema de la violencia contra la mujer en el ámbito que desarrolle sus relaciones interpersonales.

2. Creación de unidades especializadas en violencia que trabajen en la prevención, asistencia y tratamiento de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades:

- a. Asistencia psicológica;
- b. Asistencia y patrocinio jurídico gratuito
- c. Asistencia de operadores familiares;
- d. Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica;
- e. Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados al desarrollo humano;

3. Programa de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.

4. Programa de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.

5. Centros de Día para el fortalecimiento integral de la mujer.

6. Casas de medio camino, en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o a la de su grupo familiar orientadas a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.

7. Refugios para la atención y albergue de las víctimas de violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o a la de su grupo familiar orientadas a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.
8. Programas de rehabilitación destinados al victimario.

Artículo 11.- Fortalecimiento institucional para la instrumentación de las nuevas líneas programáticas

El Estado Nacional en articulación con las jurisdicciones deberá apoyar con recursos la implementación de las nuevas líneas programáticas las que deberán garantizar:

- a) Gratuidad en la prestación de servicios a las víctimas de violencia;
- b) Organización del plantel profesional sobre la base de la interdisciplina e integralidad para afrontar la complejidad y diversidad del problema de la violencia contra las mujeres;
- c) Atención con personal capacitado con perspectiva de género;
- d) Diseñar y aplicar acciones de apoyo para el personal de los servicios especializados que realicen atención directa a las víctimas y a los victimarios para evitar el síndrome de Burn-out.

Art. 12.- Políticas Públicas

El Consejo Nacional de la Mujer deberá articular a través de mecanismos competentes con los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional y en coordinación con todas las jurisdicciones las siguientes acciones:

Diseñar conjuntamente con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo los planes de capacitación en género e igualdad de oportunidades y de prevención y asistencia de la violencia contra la mujer para los/as funcionarios/as que intervengan en el tratamiento de los hechos que contempla esta ley.

1. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad

- a. Crear mecanismos institucionales en el ámbito judicial y reforzar los existentes, a fin de que las mujeres puedan acceder a interponer denuncias en condiciones de seguridad y confidencialidad, y sin temor a castigos o represalias;
- c. Facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sedes policiales;
- d. Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; y difundir periódicamente los resultados de los estudios;
- e. Promover en las distintas jurisdicciones la capacitación del personal policial en la dimensión de género y la previsión de mecanismos que garanticen la debida asistencia y protección policial a las mujeres que efectúen denuncias.

2. Ministerio de Educación

- a. Diseñar programas sobre derechos humanos y la presente ley, con objeto de aumentar la conciencia de las mujeres acerca de sus derechos y mecanismos de protección y aumentar la conciencia de otras personas acerca de los derechos humanos de las mujeres;
- b. Diseñar planes de estudio escolares en todos los niveles de derechos humanos sobre las mujeres y emprender campañas públicas acerca de la igualdad de mujeres y varones en la vida pública y privada, incluidos sus derechos dentro de la familia;
- c. Promover la modificación de los modelos de conductas sociales y culturales de las mujeres y los varones, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres;
- d. Realizar la revisión y actualización de los libros de textos y material didáctico con el fin de detectar elementos discriminatorios y estereotipados del rol de la mujer, debiendo incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre los sexos.

3. Ministerio de Desarrollo Social

Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que fije para las niñas y las adolescentes víctimas de violencia.

4. Ministerio de Salud

- c. Confeccionar los protocolos médico y psicológico que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención a las víctimas de actos de violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de los elementos probatorios;
- d. Promover a través del Consejo Federal de Salud el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos, para ello los organismos nacionales y provinciales celebrar convenios que sean necesarios con personas de derecho público o privado como organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil;
- e. Garantizar la cobertura del total de las prestaciones especializadas para mujeres víctimas de violencia serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), y en el
- f. d. Nomenclador Nacional de Prácticas Médicas y Farmacológicas. Los establecimientos médico-asistenciales públicos, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones.

5. Secretaría de Medios

- a. Realizar programas de prevención en medios de difusión masiva destinados a toda la población.
- b. La Presidencia de la Nación, a través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), debe supervisar la efectiva inclusión de mensajes y programas destinados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, formulados de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de la Mujer, tanto en las

programaciones habituales de radio y televisión, pública, privada, por cable y satelital.

6. Consejo Federal de Políticas Sociales, Consejo Federal de Salud, Consejo Federal de Educación y Consejo Federal de Políticas de Infancia y Adolescencia

a. Los Consejos deberán incluir en su temario la discusión de políticas de violencia contra la mujer

b. Los Consejos deberán articular con las jurisdicciones, monitorear y realizar un seguimiento de las acciones y consensos sobre temas de violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolla sus relaciones interpersonales.

TITULO III PROCEDIMIENTO

Artículo 13.- Presentación

Las presentaciones sobre los actos y omisiones contempladas en el artículo 3 y 4 de la presente ley podrán hacerse en forma verbal o escrita, con o sin asistencia letrada.

Las presentaciones autorizadas por esta ley pueden efectuarse ante la autoridad judicial competente. La autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas por el artículo 17 de la presente ley.

Artículo 14.- Patrocinio gratuito

La víctima tiene derecho a recibir patrocinio jurídico gratuito a través de las Defensorías de Pobres, Incapaces y Ausentes en lo Civil y Comercial, de organismos administrativos y de otros organismos públicos, conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 15.- Competencia

Serán competentes los jueces en lo Civil con competencia en cuestiones de familia, estado civil y capacidad de las personas.

Cuando la denuncia verse sobre hechos que configuren delitos, el juez que haya prevenido la pondrá en conocimiento del juez competente en la materia, ordenando previamente las medidas preventivas urgentes que sean necesarias para hacer cesar el hecho que diera origen a la presentación.

Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante cuando ésta así lo requiriese.

Artículo 16.- Legitimación

La presentación de los hechos constitutivos de violencia a que se refiere esta ley, podrán ser efectuadas por:

a. La persona agraviada;

b. Cualquier persona, si la persona afectada fuese discapacitada o una persona mayor que por su condición física, psíquica o etárea no pudiese formularla;

c. Las niñas y las adolescentes de acuerdo a lo establece la ley 26.061.

Artículo 17.- Medidas preventivas urgentes.

Al tomar conocimiento de los hechos motivos de la presentación y acreditándose la verosimilitud del derecho y las razones de urgencia, el juez podrá ordenar, dentro de las cuarenta y ocho horas, las siguientes medidas preventivas urgentes:

- a. Ordenar la exclusión del presunto autor de la vivienda donde habita la víctima si la continuación de la convivencia significa un riesgo para la integridad física y psíquica de alguno de sus integrantes;
- b. Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio de quien fuera víctima de los hechos de violencia, como igualmente a los lugares de trabajo, estudio o esparcimiento de la afectada, y/o del representante legal cuando la víctima fuere menor, como así también fijarle un perímetro de exclusión para circular o permanecer por determinada zona;
- c. Prohibir al presunto agresor que realice, directa o indirectamente, actos de perturbación o intimidación respecto de la víctima y de los restantes miembros del grupo conviviente;
- d. Proveer las medidas conducentes a fin de brindar al agresor, a la víctima y al grupo familiar, cuando así lo requieran, asistencia legal, médica y psicológica a través de los organismos públicos y entidades no gubernamentales con formación especializada en la prevención y atención de la violencia y asistencia a la víctima;
- e. Decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad, excluyendo en tal caso de dicha vivienda al agresor;
- f. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante si ésta se ha visto privada de los mismos por episodios de violencia.
- g. Ordenar el acompañamiento de la víctima a su domicilio para retirar los efectos personales.
- h. Fijar una cuota alimentaria provisoria si correspondiese de acuerdo a los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen la materia.
- i. Establecer un régimen provisorio de tenencia y visitas conforme a las reglas legales establecidas.
- j. En el caso de que la víctima fuere menor de edad, el juez, mediante resolución fundada y con consentimiento expreso de la misma, puede otorgar su guarda a quien considere idóneo para tal función, si esta medida fuera necesaria para su seguridad psicofísica y hasta tanto se efectúe un diagnóstico de la situación.
- k. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas.
- l. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/as.
- m. Prohibir al agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el decomiso de las que estuvieren en su posesión.

- n. En caso de mediar vínculo matrimonial entre el presunto agresor y la víctima, disponer el inventario de los bienes de la sociedad conyugal y de los propios de la afectada.
- o. Ordenar al presunto agresor la interdicción de enajenar, disponer, ocultar o trasladar bienes comunes o propios de la persona agredida.
- p. Otorgar el uso exclusivo, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa a la persona agredida.
- q. Disponer la instalación de medidas de seguridad (rejas, cerraduras, etc.) en el domicilio de la víctima, ordenando al presunto agresor el pago de los gastos correspondientes.
- r. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la víctima, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la o las víctimas.

El juez podrá fijar a su arbitrio y conforme a las reglas de la sana crítica el tiempo de duración de las medidas dispuestas, teniendo en cuenta el peligro que pudiera correr la persona agredida, la gravedad de los hechos, la continuidad de los mismos y los demás antecedentes que se pongan a su consideración.

Luego de tomada la medida, el juez interviniente, en caso de que lo considere necesario, podrá requerir un informe al lugar de trabajo y/o lugares donde tenga actividad el agresor, a efectos de tener un mayor conocimiento de la situación planteada. Asimismo deberá solicitar los antecedentes judiciales y/o policiales de la persona denunciada con la finalidad de conocer su conducta.

Artículo 18.- Comunicación de las medidas preventivas urgentes.

A pedido de parte, el juez podrá ordenar se comunique las medidas preventivas urgentes decretada a las instituciones y/u organismos públicos o privados, a los que se hubiere dado intervención en el proceso, como así también a aquellos cuyos intereses pudieran resultar afectados por la naturaleza de los hechos.

Artículo 19: Audiencia

El juez fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de las cuarenta y ocho horas de ordenadas las medidas del artículo 17, o , si no se adoptara ninguna de ellas, de conocer los actos u omisiones. El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el Juzgado con auxilio de la fuerza pública, siendo pasible de las sanciones disciplinarias que fije el mismo. Si la persona damnificada fuera menor de edad, deberá contemplarse lo estipulado por la ley 26.061. En dicha audiencia el juez escuchará a las partes por separado y ordenará las medidas que estime pertinentes. Quedan absolutamente prohibidas las audiencias de mediación.

Artículo 20.- Informes

El juez podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos

por la víctima, la situación de peligro de la víctima y de su grupo familiar.

Dicho informe será remitido en un plazo de 48 horas, a efectos de que el juez pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el artículo 17.

El juez también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, situación de peligro de la víctima y de su grupo familiar, evitando producir nuevos informes que revictimicen a la mujer afectada.

El juez también podrá considerar informes interdisciplinarios de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra la mujer.

Las partes podrán proponer otros informes técnicos de los referidos en el presente artículo.

Artículo 21.- Prueba. Principios y Medidas

El juez tendrá amplias facultades ordenatorias e instructorias, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor y proteger a quienes corran el riesgo de ser víctimas de nuevos actos de violencia.

Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo a los principios de libre convicción y sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

Artículo 22.- Apelación

Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes serán apelables, dentro del plazo de tres días hábiles, con efecto devolutivo y la apelación se otorgará en relación.

Artículo 23.- Sanciones

Ante el incumplimiento de las órdenes impuestas en esta ley o la reiteración de hechos de violencia por parte del agresor, el juez podrá aplicar algunas o varias de las siguientes sanciones según las circunstancias del caso, sin perjuicio de las restantes a aplicar y de la responsabilidad civil y penal que corresponda:

- a. Advertencia o llamado de atención por el acto cometido.
- b. Multa graduable entre 5 y 50 salarios mínimo, vital y móvil a favor de la víctima.
- c. Asistencia obligatoria del imputado a programas educativos o terapéuticos por el tiempo y el medio que definan los especialistas.
- d. Realización de trabajos comunitarios en los lugares que se determinen.

e. Comunicación de los hechos de violencia a la dependencia donde trabaja el agresor, a la asociación profesional o al sindicato del cual dependa.

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del juez con competencia en lo criminal.

Artículo 24.- Seguimiento

Durante el trámite de la causa y después de la misma por el tiempo que se juzgue adecuado, el juez deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal con la frecuencia que se ordene y/o mediante la intervención de asistentes sociales quienes darán informes periódicos acerca de la situación.

Artículo 23.- Reparación

La parte damnificada podrá reclamar en este proceso la reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados según las normas comunes que rigen la materia.

El juez en la sentencia podrá ordenar a pedido de parte que el agresor indemnice los daños causados incluyendo gastos de mudanza, reparaciones de la propiedad, gastos legales, médicos, psicológicos, de alojamiento y, en general, la reparación de todos aquellos daños y lucro cesante causados por el maltrato.

Artículo 24.- Remisión a la justicia penal

En todos los supuestos en que de los hechos investigados resultase un delito que no fuese dependiente de instancia privada o acción privada, y luego de adoptar las medidas preventivas urgentes contempladas en el artículo 17, se remitirán las actuaciones respectivas a la justicia penal. Igual trámite se dará en los casos de los delitos de acción dependientes de instancia privada cuando la parte así lo requiera.

Cuando la denuncia sea efectuada directamente en sede penal, la parte damnificada podrá optar por solicitar al juez en lo criminal las medidas preventivas urgentes establecidas en el artículo 17 o por efectuar la presentación prevista en esta ley ante el juez nacional en lo Civil con competencia en cuestiones de familia, estado civil y capacidad de las personas.

Artículo 25.- Obligación de informar

Los funcionarios policiales, judiciales y de la administración pública a los cuales acudan las personas afectadas tienen la obligación de informar sobre los recursos legales existentes frente a los actos de violencia enunciados en la presente ley.

Artículo 26.- Remisión de los datos

Los juzgados de todos los fueros que intervienen en estos casos de violencia deberán remitir al Registro creado en el ámbito del Poder

Judicial la información, especificando los datos personales de identificación de victimarios y víctimas a fin de que esa información sea requerida cada vez que la justicia se aboque a estas situaciones.

Artículo 27: Colaboración de organizaciones públicas o privadas
Los jueces podrán solicitar la colaboración de toda la administración pública, organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de las mujeres y las familias, a los efectos de que brinden asistencia a las personas afectadas por los hechos denunciados.

Artículo 28.- Exención de cargas
Las actuaciones fundadas en la presente ley están exentas del pago de sellado, tasas depósitos y de cualquier otro impuesto.

Artículo 29.- Normas supletorias
En todo lo no previsto en la presente ley, y en cuanto sea compatible, se aplicarán supletoriamente las normas del proceso sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial.

TITULO IV DISPOSICIONES FINALES

Artículo 30.- Adhesión
Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los contenidos de la presente ley.

Artículo 31.- Aplicación Ley 24.417

La ley 24.417, de Protección contra la Violencia Familiar, será de aplicación en aquellos casos de violencia familiar no previstos por la presente ley.

Artículo 32.- Comunicación
Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Gerardo R. Morales.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Este proyecto que vengo a presentar tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos en los que ella desarrolle sus relaciones interpersonales, garantizando políticas públicas eficaces que efectivicen la atención integral de quienes hayan sido víctimas de violencia, así como su acceso a la justicia.

Para ello he tenido en cuenta los diversos instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos que contienen disposiciones relevantes para la protección de las mujeres contra actos de violencia.

Especialmente, los tratados internacionales de Derechos Humanos, cuya jerarquía constitucional fuera consagrada por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional defienden y promueven los derechos humanos de las mujeres:

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es una herramienta importantísima para el tratamiento de la violencia de género. Muchas de las disposiciones antidiscriminatorias que consagra establecen acciones para proteger a las mujeres contra la violencia.

El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -organismo encargado del monitoreo de la Convención- en la Recomendación General número 19, ha afirmado que "la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre". Reconoce, que la definición de discriminación contemplada en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer incluye la violencia basada en el sexo. También afirma que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Para este Comité la violencia en la familia está generalizada y existe en todas las sociedades. Dentro de las recomendaciones específicas para combatirla y erradicarla los Estados partes deberían adoptar las medidas efectivas para superar todas las formas de violencia de género, a través de actos públicos o privados; que desarrollen programas y servicios de apoyo a las víctimas de violencia; programas de rehabilitación para los agresores, y que disponga de herramientas eficientes para prevenir la violencia y proteger a las víctimas, debiendo el Estado informar sobre la situación de violencia en su país, así como dar cuenta de las políticas instrumentadas para erradicar, evitar y superar la violencia de género.

Debemos reconocer a la violencia de género como violación a los derechos humanos y como violación directa a uno o más de los derechos consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos es fundamental.

Sin embargo, han sido fundamentales para el abordaje de la violencia de género el desarrollo de instrumentos específicos y regionales. Es por ello que se considera imprescindible adecuar nuestro marco normativo a la "Convención de Belem do Pará" o "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer". Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994. Fue ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996 y convertida en Ley Nacional número 24.632. La misma es de fundamental importancia para los derechos humanos de las mujeres y es la que establece los lineamientos fundamentales para el diseño, implementación,

coordinación y seguimiento de las leyes y políticas públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual, así como convertirse en el instrumento principal en la jurisdicción interna a los efectos de interpretar los derechos de las mujeres. Una de sus mayores virtudes es su especificidad, lo que ha significado un avance significativo: se aplica directamente a tratar la violencia contra las mujeres. La violencia de género es la que se inflige a las mujeres como y por ser tales y que se relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. La Convención, a diferencia de las legislaciones nacionales que se refieren a esta temática en América Latina y el Caribe, ha rechazado la utilización de un lenguaje neutral en términos de género y determinó claramente quiénes son las víctimas que requieren protección, así como las causas sociales de la violencia contra las mujeres, partiendo de la realidad social de desigualdad de poder entre varones y mujeres. Entiende que la eliminación de la violencia contra las mujeres es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

Acorde a estos preceptos es que el presente proyecto se propone dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado, consagradas en el artículo 7 y en la citada Convención de Belém do Pará.

He tenido en cuenta, además, para formular esta adecuación legislativa las últimas recomendaciones vertidas por el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (MESECVI) quienes han presentado su primer Informe Hemisférico, resultado de la ronda de evaluación multilateral iniciada en julio de 2005 y concluida en julio del 2007. En él se efectúa la evaluación a los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas al ratificar la Convención y brinda recomendaciones para su efectiva aplicación. El informe fue realizado en base al análisis de las siguientes temáticas: Marco jurídico. Planes nacionales y medidas sociales tomadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Acceso a la Justicia. Presupuesto y Estadísticas.

¿Por qué se eligieron estos temas? El Comité de Expertos/as considera que “aún no se ve traducido a la normativa nacional de todos nuestros países, con la claridad que debiera, el mandato de considerar a la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Muchas de las leyes que se sancionaron en nuestros países fueron redactadas entre 1989 y 1996. Algunas de ellas, antes de la ratificación de la Convención, y el enfoque es mucho más limitado. Asimismo, a más de 20 años de ratificada nuestra Convención, aún son pocos los países que cuentan con un marco jurídico que contemple la violencia en todos los ámbitos: el espacio doméstico, el espacio comunitario y el Estado. La mayoría cuenta con leyes de violencia que protege a las mujeres de la violencia en el ámbito doméstico—que en algunos casos es sólo familiar y no enfocada en la mujer- y aún esta protección es parcial, ya que son muy pocos los países que sancionan la violación en el matrimonio. En

contraste con la legislación en violencia familiar, es muy escasa la legislación que protege a las mujeres de la violencia en el espacio social, laboral o estatal”¹

En este sentido, con respecto al Marco Jurídico y en un todo de acuerdo con la opinión de las expertas debemos dejar en claro que la Ley Nacional sobre Protección contra la Violencia Familiar (Ley No. 24.417), por ser anterior a la ratificación de esta Convención no ha dado respuesta satisfactoria a todos estos requerimientos. Esta norma homologa diferentes situaciones de violencia dentro del ámbito familiar de una forma neutral en relación al género. Así, se refieren a situaciones de violencia sufridas en el marco familiar por cualquiera de sus integrantes, mujeres o varones, adultas/os o menores, ancianos/as, con discapacidades o sin ellas. Esta homologación le quita eficacia y una adecuada correlación a las distintas problemáticas y su respuesta legislativa. Por eso, resulta más eficaz una legislación que contemple en forma específica y separada las distintas manifestaciones de violencia en el ámbito familiar o de las relaciones interpersonales. Además- continúan diciendo las expertas- las leyes deben ir acompañadas de planes nacionales o lineamientos programáticos que implementen las medidas sociales necesarias.

Por ello mi propuesta contempla en su Título I una definición amplia de violencia contra la mujer en todos los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales, recogiendo los avances de Belem do Pará, tanto para las conductas que configuran dicha violencia como para con el vínculo con el agresor. Este título deja establecidos los derechos protegidos por la presente propuesta legislativa, define los diferentes tipos de violencia contra la mujer y establece los derechos y garantías mínimas de los procedimientos judiciales y administrativos.

El Título II se dedica a las obligaciones ineludibles de los poderes del Estado en la materia, desarrolla los lineamientos básicos programáticos, que considero deben ser de efectivo cumplimiento en todo el territorio nacional, y establece como autoridad competente al Consejo Nacional de la Mujer. Por último define las políticas públicas a través de las cuales el organismo competente articulará con los distintos ministerios y secretarías el diseño de los planes para capacitación en género e igualdad de oportunidades, de prevención y asistencia de la violencia contra la mujer para los/ las funcionarios que intervengan en el tratamiento de los hechos que contempla esta ley.

El segundo tema, tomado por el Informe Hemisférico es el de Acceso a la Justicia, en el mismo las expertas muestran una fuerte preocupación (compartida por miles de mujeres de toda la región) por los sistemas de justicia que no se hacen eco de los problemas relacionados con la violencia de género. Dicen el Informe: “Los sistemas judiciales de nuestros estados, como parte de uno de los tres poderes de la República, tienen que asumir que los tratados internacionales son obligatorios para los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que estos tres poderes son también responsables de su

¹ Informe de Actividades al Comité de Expertas (CEVI). OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/doc.36/06, 12 de julio de 2006.

implementación. Son pocos los jueces que citan tratados internacionales en sus sentencias. La Convención de Belém do Pará no ha sido asumida ni incorporada a los sistemas judiciales y ese desafío está aún pendiente. El problema se agrava en los países federales, donde es difícil encontrar normativa homogénea que cubra todo el territorio nacional resultando esto en desigualdad de las mujeres de las distintas provincias o estados frente a la ley”. Y agregan “Asimismo observamos que en muchos países se utilizan mecanismos “como el de conciliación o mediación entre la víctima y su agresor como parte de los servicios de atención a las mujeres que sufren de violencia. (...)Es de notoria preocupación para el CEVI que se sigan usando estos métodos que no se pueden aplicar para casos de violencia donde no cabe negociación alguna cuando se han vulnerado derechos fundamentales. Por ello, el Comité pone énfasis en que los mecanismos de mediación o conciliación no deben ser usados previo a un proceso legal, sea que éste se instaure o no, y en ninguna etapa del proceso legal y de acompañamiento a las mujeres víctimas”^{2/}

El proyecto que presento propone avances en este sentido teniendo en especial consideración los procedimientos del Título III. Estos tienen importancia fundamental, ya que de ellos depende que se logren los objetivos de la legislación. El rápido acceso a la justicia y la aplicación a tiempo de las medidas definen en forma efectiva la protección de la víctima y evitan la reiteración de situaciones de violencia.

Uno de los ejes de las leyes contra la violencia familiar radica en las medidas de protección a la víctima. Estas deben ser dictadas por el juez que conoce la denuncia sin esperar la citación del denunciado agresor. Se trata de las “medidas preventivas urgentes” destinadas a garantizar la seguridad e integridad física o psicológica de la víctima en forma inmediata que mi proyecto define en el Artículo 17. Estas medidas no deben dictarse por un tiempo pre- establecido, las dispondrá el juez teniendo en cuenta el peligro que pudiera correr la persona agredida, la gravedad de los hechos y la oportunidad de la continuidad de las mismas hasta tanto se determine que el bien jurídico protegido está seguro.

Las medidas preventivas urgentes previstas superan y amplían la noción de medida cautelar, brindando así soluciones jurisdiccionales que satisfacen adecuadamente las necesidades de respuestas inmediatas planteadas por las víctimas.

Con respecto a la mediación que menciona el Informe Hemisférico, en nuestra legislación el artículo quinto de la ley 24.417, le otorga al Juez la facultad de convocar, con posterioridad a la adopción de las medidas cautelares, a las partes y al Ministerio Público a una audiencia de mediación, instando a las mismas a concurrir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del artículo tercero.

Según los expertos la mediación está expresamente contraindicada en los casos de violencia física y sexual, ya que la víctima está fuertemente presionada y en desventaja, siente vergüenza y miedo por

^{2/}. Informe Hemisférico, página 25.

la situación padecida. Verdadero desequilibrio de poder donde se hace imposible mediar dadas las condiciones de fuerte disparidad en la que se encuentran las partes. No hay, en tal situación la libertad de elección que un acuerdo de partes requiere.

El otro tema tomado por el Informe Hemisférico está relacionado con la necesidad imperiosa de contar con estadísticas y datos ajustados a la realidad para poder intervenir acertadamente en su transformación.

“De acuerdo con el artículo 8 inciso h) de la Convención de Belém do Pará, los Estados deben garantizar la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, “La mayoría de Estados no cuenta con información estadística consolidada sobre denuncias, detenciones y sentencias en casos de violencia contra las mujeres. La gran mayoría de Estados o no cuenta con esta información, o solo cuenta con estimados parciales, o cuenta con datos basados en información entregada por algunas comisarías o juzgados de solo algunas regiones del país^{3/}. Por otro lado, ningún Estado cuenta con mecanismos para evaluar el subregistro de casos”. Siguiendo esta recomendación el proyecto que presento prevé en su Artículo 9.- diseñar, planificar, capacitar y llevar el seguimiento de las políticas y programas de atención destinados a las mujeres que padecen violencia de género; generar estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de situaciones de violencia; diseñar e implementar un registro único de situaciones de violencia contra la mujer en el que se establezcan los datos e indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y secretarías competentes en la materia, así como diseñar protocolos específicos y analizar y difundir los datos estadísticos y resultados de las investigaciones realizadas en forma periódica, a fin de evitar la falta de datos, la ineficiencia de las políticas específicas y el subregistro de las situaciones de las que da cuenta este proyecto.

Señor Presidente, por todas las razones expuestas, a fin de dar cumplimiento a lo suscripto en la Convención de Belém do Pará y teniendo en cuenta las últimas recomendaciones del Informe Hemisférico de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA que fuera elaborado por el Comité de Expertos/as del Mecanismo de Seguimiento de dicha Convención⁴ es que solicito la aprobación del presente proyecto de Ley.

Gerardo R. Morales.-

^{3/} Informe Hemisférico, página 40.

⁴ El informe está basado en la evaluación que las expertas realizaron de las respuestas que veintiocho (28) Estados de la región dieron al cuestionario y considera la información presentada hasta julio del 2007. Asimismo, el Comité tomó en cuenta cinco informes sombra presentados ante el CEVI por organismos no gubernamentales,^{4/} así como informes sombra presentados ante otros organismos internacionales y documentación complementaria.